

POPULISMO Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA
EN AMÉRICA LATINA (1996-2002)

Tesis que para obtener el título de
MAESTRO EN CIENCIAS SOCIALES
presenta

RODRIGO SALAZAR ELENA

Jurado conformado por:
Dr. Benjamín Temkin (director)
Dr. Rubén Hernández (lector)
Dr. Diego Reynoso (lector)

Investigación realizada con financiamiento del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CONTENIDO

Agradecimientos	3
Introducción	5
I. El concepto de populismo	8
Definiciones alternativas del populismo	8
El discurso populista	16
La especificidad del discurso populista	23
Condiciones de credibilidad del discurso populista	31
II. La representación política como relación entre agente y principal	39
Explicaciones del fenómeno populista	40
La representación política desde la perspectiva de las relaciones agente-principal	50
Modelo de decisión electoral	71
Efectos sobre la calidad de la representación	78
Comentarios	81
III. La confianza en las instituciones políticas	84
Datos y unidades de análisis	85
Variables	86
Determinantes de la confianza en las instituciones	89
Anexo III.1.	96
Anexo III.2.	97
IV. Desconfianza en las instituciones y propensión a votar por candidatos populistas	98
Casos	100
Variables de interés	102
Variables de control	104
Hipótesis a verificar	105
Determinantes del voto por partidos populistas	108
Sumario	116
Anexo 4.1.	119
V. Instituciones políticas y populismo en Bolivia y Venezuela	123
Estrategia de investigación	124
Desempeño económico y resultados electorales	127
Evaluación de los resultados	136
Reforma de los sistemas electorales	139
Resultados de la reforma sobre la confianza en las instituciones	140
Consecuencias en el sistema de partidos. El triunfo electoral del populismo.	144
Por qué la reforma no afectó la confianza política	149
Sumario	153
Conclusiones	155
Fuentes consultadas	158

*Desconfío de la democracia,
ese curioso abuso de la estadística.*
Jorge Luis Borges

... [López Obrador] *acaba con los malos
y les dice lo que nosotros quisiéramos,
pero no podemos.*
Asistente a mitin, sobre el candidato Andrés Manuel López Obrador

*Miro a mis compatriotas hoy más con ojos
de padre de familia que de político*
Álvaro Uribe

*El Poder Judicial y los organismos de control del Estado se han mostrado
como unas momias que no se enteran de nada, que no sancionan a nadie. El Poder
Legislativo ha sido secuestrado por representantes de los grupos económicos más
poderosos que actúan de espaldas a los intereses mayoritarios del pueblo*
Partido Sociedad Patriótica – Declaración de Principios

*... el estado ha sido siempre dominado, controlado por las elites del colonialismo
interno ya por el camino de las dictaduras militares [ya] por la denominada
democracia representativa, expresado por los partidos políticos neoliberales.*
Movimiento al Socialismo (Bolivia) – Declaración de Principios

Agradecimientos

Contra la costumbre, estos agradecimientos se restringen al ámbito estrictamente académico, que es el único en el que las omisiones no pueden ser motivo de ofensa. Para la gente que sencillamente quiero, espero ser el tipo de persona que lo demuestra cuando es pertinente.

Expreso mis agradecimientos, en primer lugar, a los tres integrantes de mi jurado: Benjamín Temkin, Diego Reynoso y Rubén Hernández. Se dio la feliz situación que tuve el honor de ser alumno de ellos, y en cada caso puedo decir que lo que tenga de atinado este trabajo está muy relacionado con lo aprendido en sus cursos. La clase preparada por John Ackerman resultó también determinante para aclarar varios aspectos teóricos de la relación entre representantes y representados.

En un programa intensivo desde el punto de vista escolar como es la Maestría en Ciencias Sociales, son pocas las oportunidades para discutir los temas directamente relacionados con los proyectos de investigación de los alumnos. Sin duda debido a la actualidad del tema de mi interés, tuve la fortuna de que concurriéramos en él un número suficiente de personas como para abrir un espacio de discusión dedicado específicamente al populismo. En este contexto, fue de particular importancia el seminario que impartió Carlos de la Torre, cuyo profundo conocimiento sobre el tema y la habilidad para transmitirlo dio un nuevo impulso que, en ese momento, mi investigación ya exigía.

Las mismas restricciones de tiempo y oportunidades me hacen guardar un especial agradecimiento a los compañeros de estudios que, a pesar de lo apremiante de sus propios tiempos, se dieron espacio para leer y comentar partes del borrador de este trabajo. Aunque su contribución específica será anotada en el lugar correspondiente, dejo constancia de mi deuda con Judith Pérez Soria, Luis Ortiz Sandoval y Daniel Vázquez. También agradezco el mismo favor a mi hermano, Juan Carlos Salazar y a mi madre, Ethel Elena, por una revisión de estilo pulcra que me salvó de más de un error vergonzoso.

El apoyo, la disposición y la eficiencia del servicio de Biblioteca de la FLACSO fueron fundamentales en todo el transcurso de mis estudios, pero resultaron cruciales para obtener el material sin el cual las pruebas empíricas de esta investigación habrían sido imposibles. Mi reconocimiento para Eustolia Muciño y todo su equipo.

Finalmente, agradezco el financiamiento otorgado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, añadiendo sin ocio que, sin él, la investigación y mis estudios no se habrían materializado.

*México, D.F.
julio de 2006*

Introducción

Comienzo este apartado con una confesión de culpa: mi objeto de estudio me resulta antipático. La pobreza intelectual, el recurso al aplauso fácil, la falacia descarada, el moralismo y la ñoñería, prácticamente todo en el discurso populista, tal y como se manifiesta por lo general, me provoca un profundo malestar. De hecho, ese malestar es el que motivó mi interés propiamente académico en el tema de estudio. Incluso una vez concluida la investigación, no puedo afirmar que mis preferencias hayan cambiado: no tengo hoy una mejor predisposición hacia estos señores que, como quien ve llover, afirman conocer con exclusividad lo que quiere un aglomerado llamado “pueblo” y se envalentonan proclamando que nada está por encima de los deseos de ese pueblo. No puedo dejar de sospechar cuando los deseos del pueblo así revelados y el incremento del poder de la persona a quien se le revelaron coinciden siempre, como por arte de magia.

Expongo mi disgusto hacia el objeto de estudio porque no pretendo ser ajeno a la subjetividad. Pero eso no quiere decir que lo que sigue es un panfleto en contra del populismo y de los populistas. Mi intriga es por qué surge el populismo, en qué condiciones tiene éxito, cómo es que un discurso tan campechano, en determinadas circunstancias, resulta convincente para tantas personas. Así, no pretendo “demostrar científicamente” que el populismo es un riesgo para la estabilidad económica o para la estabilidad de la democracia.

El populismo no sólo es una fenómeno que parece permanente en América Latina, sino que lleva tiempo establecido en varios países desarrollados y ya hizo presencia en Europa Oriental. Si el populismo surge en donde hay elecciones competitivas, entonces es posible que esté más relacionado con la democracia de lo que sus detractores pretenden. No me ocupo, pues, de las consecuencias del populismo; intentaré indagar, hasta donde sea posible, en sus causas.

La relevancia del tema viene dada por el hecho de que, en América Latina pero también fuera de ella, candidatos con discursos de contenido populista se presentan a la arena electoral de forma más frecuente, muchas veces obteniendo el poder ejecutivo, o en todo caso con suficientes votos para poner nerviosos a quienes se habían acostumbrado a entrar

y salir del poder con toda comodidad. La observación más superficial destaca que en varias ocasiones el éxito de los candidatos populistas viene acompañado de un fracaso estrepitoso de los partidos políticos que se distribuían la mayor parte de los votos. Me parece que la generalización del fenómeno en sí y los fenómenos que por lo común le son aledaños justifican el esfuerzo de proporcionar una teoría que explique los hechos, en lugar de acusar moralmente al fenómeno, emulando lo que se observa en él, para quedarnos con la tranquilidad de que hemos localizado al “malo”.

Intentaré presentar evidencia en favor de una hipótesis que, verbalmente expresada, es muy simple: en condiciones plenamente democráticas, los candidatos populistas se ven favorecidos electoralmente entre los electores que sienten que los políticos en general no los representan.

Aclararé con mayor precisión esta idea a medida que expongo el contenido de este reporte. El populismo es mi variable dependiente. El capítulo I está enteramente dedicado a la definición y delimitación de esta variable. Argumentaré que, si se quiere indagar sobre el populismo electoral, el camino más productivo consiste en atender al contenido del discurso político de los candidatos.

El capítulo II apunta a dos objetivos. El primero, establecer a qué me refiero cuando afirmo que alguien no se siente representado. Aunque concedo que mi hipótesis no es original, me parece que en este punto, de la definición de lo que significa sentirse representado, las buenas intuiciones se atascan en ese estatus. Argumentaré que la democracia electoral tiene propiedades intrínsecas que hacen imposible para cualquier ciudadano el saber con certeza si los políticos electos hacen todo lo que está en sus manos para maximizar el bienestar de la mayor parte de la población. Dada su ignorancia al respecto, sigo, los ciudadanos desarrollan creencias sobre lo que realmente hacen los políticos: a esta creencia la llamaré confianza (o desconfianza, según el caso) en las instituciones. El ciudadano que tiene buenos motivos para confiar, dado lo que alcanza a observar de las acciones de los políticos y los resultados de éstas, se convence de que las instituciones funcionan y, en caso de que en lo particular sienta que podría estar mejor, votará por un candidato de la oposición “tradicional” en la siguiente elección. Quien no siente confianza en las instituciones, dadas las mismas observaciones, es proclive a votar contra el *establishment* y, en un mismo acto,

a favor del candidato que esgrime un discurso de carácter antagonista en el que la persona es más fiable que las instituciones. Este es el segundo objetivo.

Los capítulos III y IV presentan evidencia empírica para cada una de las dos partes en la que se divide el capítulo II. El primero de ellos, presenta la confianza en las instituciones como una función de la información de la que disponen los electores sobre el comportamiento de los políticos y los resultados. En el capítulo IV, trato de probar cómo, en el nivel del elector individual, la desconfianza incrementa la propensión al voto favorable a candidatos populistas.

Como la confianza en las instituciones responde a datos objetivos, los políticos que son perjudicados por la desconfianza pueden utilizar los medios a su disposición para incidir, en su favor, sobre dichos datos. Pueden dar explicaciones sobre por qué las cosas no funcionan, que es la estrategia inmediata pero, me temo, de corta duración. Pueden también valerse de las políticas económica y social para incrementar el bienestar material de los ciudadanos. Esta estrategia es en sí misma interesante, pero me parece que en los tiempos actuales, en los que la libertad de maniobra de buena parte de los gobiernos es tan restringida, es más atractiva analíticamente una tercera estrategia: manipular las instituciones para obligarse a adoptar un comportamiento que inspire confianza. Afortunadamente para el investigador, la naturaleza nos otorga dos comunidades políticas que siguieron por ese camino. Desafortunadamente para ellas, la reforma a las instituciones fue fallida, los niveles de confianza no mejoraron y candidatos populistas aprovecharon la situación para deshacerse de una clase política que había perdido su última oportunidad. Esta es la materia del capítulo V.

I. El concepto de populismo

El tema de este estudio, la pregunta de investigación, consiste en las condiciones que favorecen el desempeño electoral de los movimientos populistas. Esto impone, en primer lugar, una definición de la variable dependiente, más urgente en casos, como éste, en los que existen diversas definiciones en competencia. Ante esta diversidad, caben dos estrategias. Una es esencialista, buscar lo que el populismo “es”. Tal intento, me parece, resultaría vano: más allá de algunas limitaciones que impone la referencia semántica al pueblo, el investigador es libre de definir el fenómeno como le venga en gana, siempre que su definición permita ubicar y separar un conjunto de hechos empíricamente observables. Esto me lleva a la segunda estrategia, consistente en elaborar una definición útil para los objetivos de investigación. En particular, me pregunto qué dimensiones del objeto “populista” estoy obligado a destacar si pretendo obtener conclusiones derivadas de mi pregunta de investigación.

Esta tarea es el contenido del presente capítulo. Comienzo presentando diversas definiciones que las distintas investigaciones han venido proponiendo. El orden en el que se presentan sigue una lógica de menor a mayor utilidad. Comienzo por las definiciones que en estricto sentido no lo son (y por tal motivo las considero “erróneas”); sigo con definiciones que destacan aspectos del fenómeno que no están relacionados con lo que me interesa conocer. Finalmente, presento definiciones que se acomodan mejor al ámbito impuesto por la pregunta de investigación, para escoger la más apropiada y reelaborarla de forma que me parezca más útil. Esta reelaboración implica un cierto nivel de formalización, a la vez que me lleva a separar las propiedades relevantes del fenómeno (el populismo como discurso) de las secundarias (las condiciones de credibilidad del discurso).

Definiciones alternativas del populismo

El término “populismo” presenta el supuesto inconveniente de estar cargado de valoración negativa. Es usado en el debate político para desacreditar al adversario, y quien es acusado de populista difícilmente aceptará que lo es (exactamente lo contrario sucede con el término “popular”, con carga positiva). Este inconveniente, no obstante, no es insalvable. Si se toma en cuenta que uno de los problemas de la ciencia política es que buena parte de su

vocabulario proviene del debate político (Sartori, 1984), para efectos de la investigación las ventajas del término superan a sus desventajas, siempre que el investigador se encargue de darle al uso un contenido conceptual claro y preciso, que no necesariamente coincida (o más bien, abiertamente rechace) el significado que se le da en el lenguaje común (Bourdieu et al., 1975). Finalmente, en la ciencia política se trabaja con términos como “autoritarismo”, “clientelismo” e incluso “corrupción”, cuya valoración negativa no impide ni la definición precisa ni la investigación productiva.¹

Un problema más serio viene dado por el carácter polisémico del concepto. El populismo es un fenómeno político que se presenta en diversas regiones y, al interior de ellas, en distintos períodos históricos. O a la inversa, se ha dado la etiqueta de “populismo” a situaciones políticas ocurridas en distintos momentos y en naciones muy diversas. Como consecuencia de esto, el término se utiliza para definir a Estados, organizaciones, aspectos de las organizaciones, movimientos e ideologías de todo tipo donde se haga “hincapié en la noción de ‘la voluntad del pueblo’ y en el contacto popular directo con los líderes políticos” (Worsley, 1970: 267).² Antes de que este estiramiento conceptual nos lleve a descartar el concepto por considerar que su abuso lo ha hecho inútil, es necesario intentar precisarlo y evaluar su capacidad para investigar fenómenos de interés.

Las definiciones del populismo que a continuación presento se divide en tres grandes grupos. El primero viene constituido por las definiciones “erróneas”; el segundo está formado por definiciones en función de políticas públicas y de políticas estatales; el tercero, finalmente, está formado por definiciones propiamente políticas, que pueden destacar los aspectos organizativos del fenómeno o bien centrarse en las propiedades del discurso.

¹ Sospecho que, en realidad, el problema con el término “populismo” y su connotación valorativa es que los investigadores que rechazan el concepto en estas bases tienden a simpatizar políticamente con líderes o movimientos populistas. En el caso de la corrupción, por ejemplo, el rechazo valorativo es universal. No sólo es que nadie en su sano juicio se aceptará como un corrupto, sino que el acusado de corrupción no encontrará en la academia ningún defensor dispuesto a rechazar el concepto porque se lo usa en forma peyorativa. Como se ve, el consenso moral negativo facilita la aceptación del término.

² Véase De la Torre (1994a: 39-40) y MacKinnon y Petrone (1998) para una relación de los ámbitos y modalidades en los que se ha utilizado el concepto.

Definiciones erróneas

Al utilizar la expresión “errónea” no me refiero a que el objeto esté mal definido, a que se aluda a objetos observables que no “son” populistas; las definiciones mismas son las que están mal construidas porque fusionan la variable a explicar con la o las variables explicativas. Así sucede con Germani (1973), que para caracterizar al populismo como fenómeno describe un proceso histórico en el que las fases de desarrollo no corresponden con las seguidas por las democracias occidentales.³ Esta “definición”, muy común en la escuela funcionalista, puede ser transformada en hipótesis,⁴ separando al populismo del tipo desarrollo histórico que conduce a él pero, por supuesto, esto exige que previamente se caracterice al fenómeno con independencia de los factores que lo producen. Un camino similar es el seguido por el más reciente Laclau (2005), para quien el populismo es la agregación misma de demandas insatisfechas por el sistema institucional. De una forma u otra, ambos autores identifican al populismo como lo opuesto a la institucionalidad democrática, pero resulta curioso que esta caracterización es una *consecuencia* del análisis del populismo, por lo que carece de sentido considerar este aspecto en términos de delimitación del objeto (operación necesariamente previa al estudio de sus condicionantes).

Otra definición errónea es la de Lynch (1999), según la cual el populismo no existe como fenómeno si no tiene un efecto “democratizador, social y políticamente hablando” (p. 64), en cuanto a la participación de la población vía el desarrollo de sus organizaciones, el acceso a derechos sociales y, por tanto, el ensanchamiento de la ciudadanía y el fortalecimiento de la sociedad civil. Un error similar es cometido por Braun (2001), al distinguir entre variantes de populismo, no matizado por su aire de graciosa. Según su criterio, Perón, Vargas, Velasco Ibarra, Betancourt y Cárdenas transformaron la estructura

³ Aclaro que no comparto el reproche de teleologismo que generalmente se le hace a Germani y a Di Tella; a saber, que toma a las democracias capitalistas desarrolladas como parámetro normativo para evaluar a los sistemas políticos de América Latina (v.gr., Laclau, 1977). Revisando el ensayo de Germani, no encuentro nada objetable en su comparación de rutas de desarrollo, como no sea que, al unir el fenómeno a explicar con el proceso, lo que podría ser una hipótesis a contrastar, se convierte en una afirmación sin adecuados controles.

⁴ Véase *infra*, cap. II. Aclaro que es un problema común, pero no es indispensable que el análisis funcional una la definición con la hipótesis. Para un ejemplo reciente, véase Surel (2001: 159-65), quien define con regular precisión a qué se refiere al hablar de populismo para después, y de forma independiente de la definición, atribuirle el cumplimiento de determinadas funciones en los sistemas políticos democráticos.

de clases y la vida diaria una vez que llegaron al poder, por lo que son “populazos”, mientras que los cambios introducidos por los neopopulistas “son tan poco dramáticos e innovadores” (p. 252), que sólo ameritan la etiqueta de “populitos”. En ambos casos, la definición del fenómeno no es independiente de los efectos que se le atribuyen, lo que implica que la definición es, de nueva cuenta, una hipótesis a verificar una vez que se separen sus términos.⁵

Estas pseudodefiniciones no serán consideradas como alternativas para escoger entre ellas.

Populismo “gubernamental”

Este grupo de definiciones incluye aquellas que estudian al populismo como una orientación del Estado o bien como políticas públicas con un contenido determinado. Ambas suponen un agente de toma de decisiones con la capacidad de imponerlas a la sociedad. En el primer conjunto, el populismo es un proyecto de modernización construido sobre las formas nativas, sobre las instituciones tradicionales del pueblo, evitando así las consecuencias disruptivas de la modernización occidental (Stewart, 1970). Touraine (1998: 329), plantea el mismo criterio: el populismo es proyecto de desarrollo (una forma de intervención estatal en la sociedad) cuya meta no es el incremento de la capacidad de inversión, sino lograr mayores niveles de participación e integración de la población. “En este sentido la noción de populismo abarca a todas las formas antielitistas de control del cambio social”, atendiendo a las características históricas y específicas de cada pueblo. Puede haber, sigue el mismo autor, partidos populistas que realizan la integración al sistema político, Estados populistas que realizan las políticas de modernización integradoras bajo dirigentes que se identifican con la nación, y movimientos populistas que defienden los intereses de las masas populares (i.e., no de clases específicas) (pp. 338-48). En Ianni (1973), lo que es populista es el Estado caracterizado por el intervencionismo y el nacionalismo económicos. La expresión “Estado populista” puede resultar engañosa: el Estado no es populista, sino la orientación integradora de los proyectos estatales.

⁵ Por lo demás, esta definición no sólo es errónea conceptualmente, sino que también podría serlo empíricamente. Cardoso y Heiwege (1992: 75-85) presentan evidencia en el sentido de que las políticas de los gobiernos del populismo clásico favorecieron a sus propias clientelas (trabajadores urbanos formales), pero no redujeron la pobreza y la desigualdad, en la medida en que no atendieron las condiciones de los trabajadores informales y rurales.

Como ocurre con las pseudodefiniciones anteriores, la conceptualización del populismo como un proyecto integrador del Estado fue elaborado teniendo en mente los casos que se denominan “populismo clásico”, fundamentalmente las presidencias de Perón en Argentina, Vargas en Brasil y Cárdenas en México. El lugar común, hasta hace poco aceptado, es que estas políticas integradoras están indisolublemente asociadas con la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones. La etiqueta de “clásico” tiene poca importancia heurística: remite al período específico en que se ejercieron estas presidencias y se usa para distinguirlas de fenómenos populistas posteriores.

El segundo conjunto está integrado por lo que se ha dado en llamar “populismo económico”, que se refiere a las características de las políticas públicas aplicadas por determinados gobiernos. Pretende incluir tanto a los populistas clásicos como a casos más recientes (incluidas algunas presidencias de los ochenta). El populismo económico es “un enfoque de la *economía* que destaca el crecimiento y la redistribución del ingreso y menosprecia los riesgos de la inflación y el financiamiento deficitario, las restricciones externas y la reacción de los agentes económicos ante las políticas agresivas ajenas al mercado” (Dornbusch y Edwards, 1992: 17). Aunque económico, este populismo no deja de tener su aspecto político, pues su objetivo es movilizar el apoyo de los trabajadores organizados y sectores de la clase media baja, así como de ciertos sectores empresariales (Kaufman y Stallings, 1992: 25).

Populismo político

La caracterización del populismo a partir de sus rasgos estrictamente políticos es, en buena medida, una respuesta a la literatura sobre populismo económico ante la verificación, en los años 90, de liderazgos personalistas que emprendían una política económica de corte neoliberal. Para ello, se tuvo que separar al populismo tanto con respecto de una etapa específica de desarrollo, como del contenido de las políticas públicas. Como categoría política, el populismo de ajuste estructural (bautizado como “neopopulismo”) comparte un núcleo central de propiedades con el populismo clásico y el de políticas redistributivas.

Las definiciones de este grupo son más “políticas” que las del anterior sólo en la medida en que se refieren a estrategias desarrolladas por agentes para acceder al poder político y

ejercerlo. Un conjunto de ellas se centra en las características organizativas y otro remite a las características del discurso.

Las dimensiones destacadas por los autores que definen al populismo a partir de su organización consisten en cierta forma de ejercicio del liderazgo y un determinado carácter de las bases de apoyo. Drake (1992: 48), condensó ambos criterios al adelantar que los movimientos populistas se distinguen por una “dirección paternalista, personalista, a menudo carismática, y la movilización de arriba hacia abajo” y el apoyo multclasista de las masas.⁶ En forma muy similar, refiriéndose al populismo clásico, Hermet, Loaeza y Prud’homme (2001: 10), hablan de “una manera de hacer política en donde predomina el vínculo directo entre el líder y sus seguidores, así como densas relaciones informales de poder”, definición que Loaeza (2001: 369), reproduce después al hablar de un área no institucionalizada en la que “las influencias personales” superan “las normas y los procedimientos”. Esta caracterización del populismo en función del tipo de liderazgo puede ser aplicada tanto al líder de un partido o movimiento como a un jefe del Ejecutivo.

En Roberts (1998: 381-2), el populismo “prototípico” tiene cinco características, de las cuales tres son de carácter organizativo, a saber: 1) un liderazgo personalista y paternalista, 2) una base de apoyo heterogénea, concentrada en los sectores subalternos, y 3) una movilización política vertical, evitando las formas institucionalizadas de mediación o subordinándolas a vínculos directos entre el líder y las masas. Una cuarta característica se toca con el de las políticas públicas, pero subordinada al liderazgo: 4) políticas redistributivas o clientelistas con el fin de crear una base de apoyo. La única característica señalada por Roberts, sin relación con aspectos organizativos sería, entonces, 5) un discurso que exalta los sectores subalternos o es antielitista y/o *antiestablishment*. Ahora bien, como según las reglas de los conceptos radiales a las que adhiere Roberts, la ausencia de alguna característica no elimina el carácter populista del objeto, sino que lo convierte en subtipo, el discurso puede desaparecer sin consecuencias de clasificación, mientras que tendrían que desaparecer las primeras cuatro características para que surgiera un subtipo únicamente discursivo. Aunque no desdeña las propiedades discursivas del populismo (en particular sus

⁶ En realidad, Drake combina la definición organizativa con la de políticas públicas, pues al definir las “políticas populistas” reproduce a Dornbusch y Edwards, a la vez que al definir a los “gobiernos populistas” alude a movimientos populistas que llegan al poder y aplican políticas populistas (Drake, 1992: 48-50).

efectos emotivos y simbólicos), De la Torre (1998: 89), suscribe este énfasis en la organización al definir al populismo como un liderazgo poderoso comandando una muchedumbre. El carácter dependiente de la organización hacia el liderazgo también es destacado por Álvarez Junco (1994).

Sin duda el investigador que ha puesto más cuidado en definir con precisión el concepto de populismo es Kurt Weyland (2001), quien revisa y desmenuza las definiciones previas, justifica la circunscripción del término al terreno estrictamente político y delimita un campo semántico que abarque tanto los fenómenos correspondientes al populismo clásico como aquellos que se presentaron en los años ochenta y noventa. Su definición recurre a los recursos utilizados para ganar y ejercer el poder, así como la naturaleza del actor político que despliega dichos recursos. Este último puede ser un individuo, una agrupación informal o una organización formal, mientras que el recurso puede ser el apoyo de la mayoría numérica o el apoyo de algún grupo con peso socioeconómico. De las combinaciones posibles, el populismo resulta del liderazgo individual basado en el apoyo mayoritario. El populismo es “una estrategia política a través de la cual un líder personalista busca el poder gubernamental o lo ejerce basado en el apoyo directo, no mediado y desinstitucionalizado de un extenso número de seguidores en su mayoría desorganizados” (Weyland, 2001: 14).⁷ Tal como lo plantea Weyland, este carácter “directo, no mediado y desinstitucionalizado” del apoyo por parte de seguidores desorganizados no es un accidente, sino que se desprende necesariamente del carácter personalista del liderazgo, por lo que se trata de propiedades incluidas en la definición. La enemistad con políticos, burócratas y partidos políticos, así como los elementos carismáticos del liderazgo y la búsqueda de cercanía con las masas son consecuencia de la estrategia personalista seguida por estos líderes (Weyland, 1999 y 2001).

Al definir al populismo como una “estrategia política”, Weyland enfatiza la personalización del liderazgo aún más que Roberts. Al reducir las características del populismo a las

⁷ Esta definición añade sistematización a la que el autor venía trabajando anteriormente, pero siempre destacando los elementos organizativos de tipo de liderazgo, carácter de las bases de apoyo y características (necesariamente) asociadas. Compárese con esta definición previa: “Un líder personal[ista] apela a una masa heterogénea de seguidores que se siente excluidos y están disponibles para la movilización; el líder llega a los seguidores en una forma directa... que rebasa a las organizaciones intermediarias establecidas, especialmente los partidos; si el líder construye un nuevo partido populista o revive a uno viejo, éste continúa siendo un vehículo personal con un bajo nivel de institucionalización” (Weyland, 1999: 381).

estrictamente políticas, Weyland consigue una mayor extensión del término, haciéndolo aplicable a casos de distintos períodos históricos y al margen del contenido sustantivo de las políticas económica y social que se lleven a cabo. Esto representa una ventaja con respecto a las posiciones estructuralistas y a las que enfatizan el proyecto estatal o las políticas económicas irresponsables, que en principio rechazarían cualquier asociación entre populismo y neoliberalismo. En cambio, Weyland (2003b), encuentra una sinergia entre ambos que se basa en la mutua “inclinación antiorganizacional” que lleva a ambos a concentrar el poder, basándose en el apoyo popular no mediado, y a debilitar los intereses organizados.⁸

El carácter multclasista de los partidos populistas tuvo uno de sus mejores exponentes en Di Tella (1973), quien considera que determinado movimiento debe ser considerado populista en la medida en que cuenta con el apoyo no sólo de la clase obrera, sino de individuos y grupos pertenecientes a estratos superiores de la sociedad. Llega a elaborar una tipología en función de si estos grupos incluyen únicamente a los estratos sociales medios o si a éstos se añaden elementos de la burguesía, así como el grado en que son aceptados o rechazados por las clases sociales de donde provienen. Esta caracterización conserva bastante vigencia en nuestros días; por ejemplo, en el estudio realizado por Burgess y Levitsky (2003), para explicar la adaptación de partidos populistas (el Partido Justicialista, el Partido Revolucionario Institucional, el APRA y Acción Democrática) a la nueva realidad económica de los 90, esta definición se da por asumida.

La cuestión del liderazgo personalizado está muy relacionada con el perfil de las bases de apoyo. Las perspectivas desarrollistas arriba mencionadas dejaron como herencia la caracterización de éstas últimas como coalición multclasista, bases heterogéneas y masas desorganizadas, ambas actualizadas para fenómenos recientes por Oxhorn (1998) y Weyland (1999). Esta caracterización está basada, en realidad, en intuiciones: se supone

⁸ Otro aspecto a destacar del cuidadoso estudio de Weyland (2001), es que reconoce que existen al menos dos opciones para definir el populismo desde la esfera exclusivamente política: el estilo y la estrategia política, optando por la segunda en virtud de su mayor potencial de delimitación. Como aquí yo mismo optaré por una definición a partir de las características del discurso, es conveniente adelantar dos consideraciones. En primer lugar, el estilo, como señala adecuadamente Weyland, incluye al discurso pero es mucho más amplio, tan amplio que no puede ser base adecuada para contrastar similitudes y diferencias. Sin embargo, la inutilidad analítica del estilo como tal no necesariamente se traslada a su componente discursivo, el cual, como mostraré en breve, puede proporcionar un gran poder discriminatorio.

que este tipo de bases son las apropiadas para el ejercicio de un liderazgo no institucionalizado.

Finalmente, llegamos al segundo grupo de definiciones políticas del populismo, aquellas que lo presentan como un discurso. El elemento anti-status quo o antiestablishment del discurso populista es notado en prácticamente la totalidad de los trabajos sobre el tema (con la notable excepción de los estudios sobre el populismo económico). Worsley (1970: 298-301), sostiene que el populismo implica la adhesión a los principios de supremacía de la voluntad del pueblo, identificada con la justicia y la moralidad, y de la deseabilidad de la participación política de éste. Al considerar que esta participación deseable puede ser tanto real como manipulada, explícitamente rechaza como definitoria la relación directa entre el líder y el pueblo, que evoca ideas de pseudo-participación. De estos dos principios deduce que el populismo puede estar presente en cualquier organización, ideología o sistema político, por lo que es “una suerte de énfasis” (p. 300). Sin embargo, es sólo con Laclau (1977) que esta característica adquiere un carácter definitorio del fenómeno, aunque esto no quiere decir que los estudiosos que después enfatizaron la dimensión discursiva se hayan apegado a los lineamientos de este autor.

En la siguiente sección, abordo esta perspectiva con mayor detenimiento que las anteriores. En ella, justifico el criterio discursivo como el adecuado para seleccionar casos de populismo y distinguirlo de otros, por lo que la exposición está orientada a la elaboración de una descripción del fenómeno.

El discurso populista

En este estudio, considero al populismo como una estrategia política de tipo discursivo (es decir, no organizativa). Al definir de esta manera al populismo, no pretendo descalificar necesariamente la totalidad del resto de las definiciones. En la selección del criterio, más bien, yacen motivaciones heurísticas. Así, no pongo en duda la existencia de proyectos estatales de incorporación política o políticas públicas cuyas características justifican agruparlas bajo la etiqueta “populista”, ni necesariamente cuestiono lo apropiado del uso de la etiqueta. Sin embargo, el recurso a esta caracterización es poco útil para efectos de clasificar candidaturas que se presentan a elecciones. En primer lugar, porque supone que el

objeto de estudio ya está en el gobierno, por lo que exigiría del investigador supuestos poco plausibles sobre lo que pretende hacer un gobernante a partir de las acciones observadas en la campaña, cuando es candidato. Una posible salida a este problema, consistiría en observar su plataforma y sus propuestas. Pero esto presenta un segundo conjunto de obstáculos. Por un lado, la probabilidad de que los candidatos mientan es muy real. Así, por ejemplo, si juzgamos a partir de las propuestas de políticas públicas, dos neopopulistas connotados, Menem y Fujimori, quedarían excluidos del cuadro (Stokes, 2001a). Por otro lado, si suponemos que la fragmentación étnica no es muy grande, es poco probable que un candidato cualquiera haga ofertas excluyentes, de la misma forma que es poco probable que un candidato que ofrece políticas redistributivas añada que no tienen sustento fiscal. Si no podemos inferir el grado de irresponsabilidad de la oferta de campaña, es prácticamente imposible que podamos distinguir entre una propuesta populista y una propuesta sencillamente de izquierda.⁹ Un ejemplo de este criterio prospectivo es el seguido por Hermet (2001: 19), para quien el populismo en su “exacto sentido” se propone “desestabilizar o derribar la democracia representativa”. Esta intención imputada, aunque sea política, presenta los mismos problemas que las intenciones económicas. Así, por ejemplo, ¿cómo saber, en campaña, si Fujimori pretendía acabar con la democracia representativa? Podría argumentarse que esta peregrina idea le surgió hasta enfrentarse con un congreso adverso. Menem no destruyó la democracia, pero no tengo forma de saber, a partir de sus actos y discursos de campaña, que no se lo propuso en todo momento pero se tuvo que conformar con algo menos que eso.

Finalmente, queda el hecho de que condicionar la definición al programa político perdemos la fuerza extensiva del concepto. La literatura sobre el neopopulismo tiene la gran virtud de destacar las similitudes de casos cuyos programas de gobierno tienen poco en común (sustitución de importaciones y neoliberalismo), permitiendo además comparaciones transregionales que son impedidas si sólo consideramos el programa (neopopulismo latinoamericano con neopopulismo de Europa del este, ambos con el populismo de Europa occidental). Incluso es posible dotar la consistencia en el tiempo de organizaciones individuales: así, Popescu (2001: 182-8) expone el tránsito en los partidos populistas

⁹ Véase *infra* para una justificación ulterior para la separación entre el discurso de izquierda y el discurso populista.

escandinavos desde las plataformas neoliberales de los setenta a las posturas anti inmigrantes de la actualidad, operación contradictoria con una definición atada al proyecto o programa –cualquiera que sea el contenido de la definición.

Las definiciones que reposan en las características organizacionales presentan sus propios inconvenientes. Por un lado, la política moderna es tal que la movilización de bases y los elementos emotivos son una propiedad de todas las organizaciones políticas, no sólo de las populistas, al mismo tiempo que empíricamente no tiene sentido suponer en el populismo ni en ninguna otra organización política la ausencia de redes de intermediación entre el liderazgo y las bases (Knight, 1998). Es muy difícil encontrar un elemento común en el populismo a partir de sus bases de apoyo. Si nos fijamos exclusivamente en América Latina, el carácter de clase de dichas bases es muy distinto aún entre los casos de populismo clásico, a la vez que el grado de organización (v.gr., agrupaciones sindicales vs. sectores informales desorganizados) varía entre los populismos clásicos y los neopopulismos (McKinnon y Petrone, 1998: 45; Knight, 1998). Así, cuando Papadopoulos afirma que las bases de apoyo de los partidos populistas de Europa occidental está constituida por los “grupos que han sufrido por la modernización”, añade inmediatamente que la heterogeneidad de estos grupos “es tal, que es poco lo que se puede saber de las bases sociales del populismo” (2001: 85).

En parte, el énfasis en el carácter multiclasista de las bases de apoyo se explica porque la apelación al pueblo ignora deliberadamente las divisiones clasistas. Sin embargo, esto no es lo fundamental del discurso populista, sino una derivación del carácter antagónico que éste postula en la relación entre la élite y el pueblo. Si el antagonismo se deshecha, cualquier partido que busque una mayoría electoral reposará en una “coalición multiclasista”, incluidos los partidos europeos a los que se supone representativos de una clase particular (Knight, 1998).¹⁰ Parece ser que, como con cualquier otro tipo de partido, la composición social de las bases de los partidos populistas es una cuestión a determinar empíricamente¹¹ y caso por caso, toda vez que las expresiones abstractas de las que disponemos para fines

¹⁰ La razón es aritmética. Si nos atenemos a la estructura de clases (a lo que obliga la referencia clasistas), todo partido que pretenda un potencial ganador tendrá que apelar a más de una clase si la clase a la que pretende representar no representa a la mayoría de la población. Este es el dilema que Przeworski (1988) destacó precisamente en los partidos socialdemócratas de la Europa occidental.

¹¹ Así lo hacen De la Torre (1996: 55), con Abdalá Bucaram en Ecuador, y Papadopoulos (2001: 88-9) y Mater (2001: 120-6), con los partidos populistas de Europa Occidental.

comparativos (“heterogeneidad”, “coalición multclasista”) no nos permiten distinguir al populismo de otras agrupaciones electorales ni señalan un rasgo común de los partidos populistas.

De esta forma, cuando hablo de candidatos o partidos populistas, así como de populistas a secas, lo que es propiamente “populista” en ellos es el discurso. Es decir, el término “populista” es un adjetivo que califica a un discurso, para distinguirlo de otras variedades.¹²

La definición por la que opto es deudora del trabajo de Schedler (1996). El discurso populista se distingue por: 1) presentar una relación antagónica entre el pueblo y la élite; al mismo tiempo que 1.1) existe una identidad de intereses y valores al interior de cada uno de estos grupos, y 2) el emisor del discurso se presenta como integrante del pueblo en su relación antagónica con la élite.

La relación antagónica entre pueblo y élite define los términos de la lucha política (Panizza, 2005). Por antagonismo no se debe entender una mera divergencia de intereses, sino lo que la teoría de juegos define como “juegos de suma-cero”: cuando uno de los términos obtiene ganancias lo hace a costa de infringir pérdidas en el otro y en la misma magnitud, de tal forma que la cooperación es, como mínimo, improbable.¹³

Al evaluar el discurso populista, no se debe subestimar la importancia de la identidad de intereses y valores al interior de los términos antagónicos en favor del antagonismo en sí.

¹² En Leaman (2004: 324-5) se recomienda explícitamente el uso de la etiqueta populista como calificativo. Loaeza (2001: 368) traza un camino similar al considerar al populismo como una “presencia”. Más adelante precisa que “el populismo es una *forma* ya sea de relación política, de hacer política o de entender la política” (*Ibid.*: 376). El uso de “populismo” como adjetivo presenta el riesgo de vaguedad si no se pone cuidado en dos cuestiones: 1) precisar cómo se transforma el sustantivo una vez que se le añade el adjetivo “populista”, y 2) mantener constante el sustantivo en el momento de comparar fenómenos; v.gr., no es lo mismo contrastar partidos populistas con partidos no populistas que contrastarlos con Estados no populistas. Nótese que la propia Loaeza (2001) entiende que en las elecciones de México en 1988 los tres candidatos importantes eran populistas. Esto se debe a la aplicación del mismo adjetivo a objetos de naturaleza distinta: Clouthier era populista en la dimensión organizativa, debido a su carisma; Cárdenas por las políticas económicas que favorecía, y Salinas, con un criterio *post hoc*, por la personalización del poder que tendría en su gobierno. Así, si el populismo es sólo una *presencia*, sin más especificaciones, deviene en omnipresente. Si atendemos en cambio a la naturaleza del discurso, estoy en condiciones de afirmar que no había nada de populista en el discurso de Carlos Salinas, en el sentido de plantear una confrontación entre élite y pueblo (*vid.* Adler Lomnitz, Salazar Elena y Lomnitz, 2004). Cárdenas, como se verá más adelante, no puede ser considerado populista por su preferencia por políticas distributivas con fuerte intervención estatal. En cambio, las características del discurso de Clouthier enfatizadas por Loaeza (2001: 387) corresponden punto por punto con lo que aquí llamo discurso populista.

¹³ Esta afirmación es compatible en buena medida con la postura de Laclau (1977) según la cual el populismo transforma en antagonismo lo que en la ideología dominante es sólo “diferencia”.

Asimismo, la identidad de intereses y valores entre los integrantes del pueblo no debe cobrar precedente sobre la identidad de intereses y valores al interior de la élite. Como veremos después, la operación lógica de ubicar a los miembros de la élite es mucho más sencilla que la de ubicar a los del pueblo, de tal forma que el pueblo es un residuo: todo lo que no es élite (De la Torre: 1996: 67).

En este punto se impone una aclaración. Los términos “pueblo” y “élite” son etiquetas que deben ser entendidas en sentido abstracto para incluir toda referencia a la distinción entre quienes no tienen poder y quienes sí lo tienen. En este sentido, Canovan (1999: 3) es muy precisa cuando define al populismo como “una apelación al ‘pueblo’ contra la estructura de poder establecida”. No es indispensable que los líderes en cuestión usen esta terminología específica. Así, por ejemplo, se puede utilizar el gentilicio para referirse a las mayorías, o, como Chávez, utilizar el término “soberanos” en forma tal que evocaba a las masas (Ellner, 2003: 145). Nótese que en su acepción jurídica, tanto el gentilicio como la ciudadanía aluden a una totalidad, de la que la muchedumbre o la mayoría o los de abajo son sólo una parte. Una situación similar ocurre cuando los movimientos populistas se refieren al campesino como pueblo (MacRae 1970; Minogue, 1970: 246-7), lo que es frecuente en países cuya estructura social es predominantemente agraria (Ionescu, 1970; Saul, 1970). Otras operaciones del mismo tipo son las que presentan al pueblo como una etnia determinada (frente a los inmigrantes extranjeros) o como gente común (frente a los privilegiados) (Canovan, 1999: 5).¹⁴ Por supuesto, otro grupo que puede hacerse pasarse por el pueblo está constituido por los “pobres” (Hermet, 2001: 22-3).

Para que se realicen estas sinécdoques (y hagan sentido), es necesaria una definición previa de lo que es la élite o, al menos, el no-pueblo. El conjunto de donde se puede elegir está constituido por los grupos que controlan de forma excluyente los recursos relevantes y escasos, especialmente los económicos, los políticos y la cultura (Bobbio, 1989). El discurso populista puede señalar a cualquiera de estos grupos como constitutivo de la élite,

¹⁴ En el caso de los países desarrollados receptores de mano de obra migrante, es de particular importancia para fines clasificatorios anteponer la separación pueblo/élite al contenido antiinmigrante. Si el discurso ha de ser populista, y no meramente racista o nacionalista, es necesario que se presente a los extranjeros como protegidos (si no aliados) de las élites políticas, que son quienes toman las decisiones necesarias para otorgar a los primeros beneficios (en forma de protección social) en mayor proporción a su contribución al bienestar colectivo. Esta forma de privilegio, entonces, es una de las vías por las que la élite atenta contra el pueblo; en este caso, amenazando su homogeneidad. *Vid.* Papadopoulos (2001: 76-8).

que en ocasiones puede ser una oligarquía (o “los ricos”), los centros urbanos, las potencias extranjeras, los intelectuales o bien sólo el *establishment* político. Una vez que se define quiénes integran la élite, el referente del término “pueblo” o de sus sustitutos queda relativamente claro.¹⁵

Cuando por élite el discurso populista alude a la clase política, la identidad de los intereses de sus miembros implica que las diferencias que los dividen en partidos políticos con programas distintos y entre partidos de gobierno y oposición son ficticias, una fachada para encubrir su común lejanía con respecto al pueblo, su disposición a sacrificarlo para promoverse a sí mismos y las prácticas conspirativas con las que, en secreto, rompen sus promesas públicas (Schedler, 1996: 3-6). Se verá que este aspecto es esencial para elevar las aspiraciones electorales del candidato populista.

El “pueblo” al que se refiere el populista es una “comunidad imaginaria” (Keren, 2000), en particular al suponerla homogénea, virtuosa y victimizada. Si la relación del pueblo con la élite es conflictiva, entre quienes conforman el pueblo se imagina el consenso, la ausencia de conflicto y la reconciliación (Schedler, 1997: 5-6). Saul (1970: 180), por ejemplo, caracteriza al populismo como un “llamado a la unificación”, que enfatiza las características que unen a la gente sobre las que la dividen. En el discurso, los individuos que integran el pueblo pueden estar constituidos por todos aquellos que son oprimidos por la élite (Mouffe, 2005; Panizza, 2005) o todos aquellos cuyas demandas (por lo demás heterogéneas) no son satisfechas por los mecanismos institucionales (Laclau, 2005).¹⁶ En todo caso, el discurso que apela al pueblo, haciendo caso omiso de divisiones que lo atraviesan como las clases sociales, tiene un mayor atractivo estratégico en la medida en que es lo más inclusivo posible (*vid.* Laclau, 1977: 194-6).

En el discurso, el líder tiende a identificarse con la totalidad del pueblo y a presentarse como vínculo entre los excluidos y la nación (Touraine, 1998: 356-8). El candidato populista representa a este pueblo, no a intereses sectoriales como son las clases

¹⁵ Laclau (1977) prefiere hablar de una contradicción entre pueblo y “bloque en el poder”. El problema con esta expresión es que, podría argumentarse, el bloque en el poder está constituido por las tres élites mencionadas. Siendo así, no podría decirse que la definición aplique a los neopopulistas, tan afectos por lo menos a los sectores financieros que promueven el neoliberalismo.

¹⁶ Mouffe y Laclau (no así Panizza), que se toman en serio los aspectos preformativos del discurso, parecen sugerir que estos criterios efectivamente constituyen al pueblo. En mi caso, sólo los retomo como parte de la estrategia retórica populista, sin suponer en ellos mayor poder.

económicas (Canovan, 1999: 4). Mientras que los partidos y las facciones son valorados negativamente como agentes extraños que imponen divisiones al pueblo (*Ibíd.*; Panizza, 2005: 22), el líder es capaz de representar por sí mismo los intereses y valores de la comunidad imaginaria (Laclau, 2005: 40; De la Torre, 1994a: 44-5).

Un ejemplo de la forma en que funciona la clasificación que propongo viene dada por los populismos originales: el ruso y el norteamericano de finales del siglo XIX y principios del XX. El populismo ruso era básicamente una corriente intelectual que exaltaba virtudes imaginarias de las comunidades campesinas frente a la occidentalización de las ideas, mientras que el norteamericano era un partido político con una base rural que enfrentaba una problemática muy concreta y con un discurso adverso a los políticos profesionales (Mackinnon y Petrone, 1998: 15-9). Mientras que este último cubre el requisito fundamental discursivo y el supuesto de orientación electoral, el populismo ruso no cumple ninguna de ambas. En las etapas iniciales del populismo ruso “no hay crítica a la política representativa, ni a los partidos, ni a los políticos, sencillamente porque no existen” (Meyer, 2001: 198). Los motivos populistas de la *intelligentzia* rusa posterior, particularmente en lo que se refiere al uso de la violencia y el objetivo de destruir al Estado tanto en su variante absolutista como en la reformada (*Ibíd.*: 199), así como su anticapitalismo, lo asemejan más (y de hecho preceden históricamente) con el socialismo revolucionario que con el populismo al que aquí me refiero.¹⁷

Hasta aquí, he presentado distintos criterios para definir el fenómeno populista, para después optar por una de ellas, la perspectiva del discurso. Habiendo desarrollado la forma en que utilizo esta perspectiva y cómo se distingue del resto, queda aún por aclarar cómo se distingue el discurso populista con respecto a otros discursos. Esto será abordado en la siguiente sección.

¹⁷ Véase Walicki (1970), sobre el énfasis anticapitalista del populismo ruso. El populismo ruso de principios de siglo XX no tuvo en realidad mucho éxito en su misión de “acercarse al pueblo”, pero contribuyó al desarrollo de la doctrina revolucionaria al argumentar, contra el socialismo de occidente, en favor de un tránsito al socialismo sin necesidad de pasar previamente por el desarrollo industrial capitalista. En la actualidad, los rusos usan el barbarismo *populizm* para traducir el término “populismo”, lo que expresa la separación de los populistas actuales con los *narodniki* (Meyer, 2001: 2000).

La especificidad del discurso populista

Lo específico del discurso político populista puede ser mejor entendido si formulamos sus características en comparación con otros. El análisis parte de la premisa de que todos ellos afirman que el mundo se divide en un nosotros/ellos. Los discursos políticos que aquí presento plantean una separación fundamental en la sociedad política (P).¹⁸ En principio, considérese que los datos disponibles de esa sociedad para todo tipo de discurso son individuos (i), cada uno de los cuales define sus preferencias en función de sus intereses materiales (m) y valores (v).¹⁹ Cada discurso propone una división de la sociedad en grupos adversarios, asignando a cada individuo en uno u otro grupo según las propiedades de m y v . Otro supuesto adicional es que los distintos discursos se dan en un contexto definido por la economía de mercado y la democracia electoral.

Para el discurso socialista, la sociedad política se compone de dos elementos, el Estado (E) y la sociedad civil (C).

$$P = \{E \cup C\}$$

Dentro de la sociedad civil, la posición de los individuos con respecto a los medios de producción determina una identidad de intereses que los agrupa dentro de clases sociales (CS). Así, para la clase social q , tenemos que

$$\{CS_q \mid m_k^q = m_l^q = \dots = m_n^q\}.$$

En principio, las clases sociales son dos: la burguesía (CS_b), que poseen los medios de producción, y la conformada por todos los individuos que no son propietarios de los medios de producción y venden su fuerza de trabajo para sobrevivir (CS_a). Así:

$$C = \{CS_b \cup CS_a\}.$$

¹⁸ En esta sección me interesan las separaciones que plantea cada discurso y las implicaciones de cada separación. Cada una de las tradiciones liberal y socialista tiene una vertiente política y otra científica, y ambas vertientes tienden a referirse a los mismos fenómenos, eventualmente con las mismas categorías. Es por esto que debo aclarar que no pretendo manifestarme por el valor de verdad de cada discurso político, a la vez que mis afirmaciones no necesariamente se aplican a las corrientes científicas de cada tradición.

¹⁹ Para lo que llamo discurso socialista sigo muy de cerca de Przeworski (1988 y 2001); para el discurso liberal me baso en Bobbio (1989) y Sartori (1992).

Pero a su vez, la clase asalariada presenta una división ulterior entre el proletariado (CS_p), que aplica directamente los medios de producción para producir todo lo que la sociedad necesita, y la formada por una mano de obra excedente que se dedica a actividades que no son necesarias para la producción (CS_e).²⁰ Como plantea la realidad el discurso socialista, los individuos pertenecientes a CS_p , como explotados (de ellos se extrae la plusvalía), tienen intereses antagónicos alrededor del beneficio con respecto a los intereses de los individuos pertenecientes a CS_b , de tal forma que

$$[m_{b,p} \mid \{CS_b \cap CS_p\} = \emptyset].$$

En cambio, los individuos pertenecientes a CS_e comparten con los integrantes de CS_p un interés en el fin de las relaciones de explotación. Sin embargo, los valores que detentan pueden ser consistentes con estos intereses o bien puedan ser tales que prefieran el mantenimiento del sistema capitalista. Los individuos que caen en el primer supuesto conformarán un subconjunto en interacción con los miembros de CS_p ; los que caen en el segundo, estarán en interacción con CS_b .

Finalmente, y de manera más relevante, el socialismo plantea que en la sociedad civil existe una clase social dominante d cuyos intereses son promovidos desde el Estado para toda la sociedad, de tal forma que el Estado es su “comité ejecutivo”. Esta clase dominante representa la intersección entre los dos elementos constitutivos de la sociedad política.

$$\{E \cap C\} = CS_d$$

El socialismo pretende que la clase social que en el capitalismo se sirve del Estado, CS_b , sea sustituida por CS_p , al menos como etapa previa necesaria para la supresión de las clases sociales, lo que implica que la dimensión del *status quo* atacada en este esquema es la identidad concreta de CS_d .

El liberalismo, por su parte, plantea que la sociedad política tiene los mismos componentes básicos, Estado y sociedad civil, pero hasta aquí llegan las similitudes. Una diferencia

²⁰ Esto incluye tanto a la llamada clase media como a los desempleados y, en fin, todas aquellas personas cuyas ocupaciones correspondan con esta definición. Marx reconoció claramente a este grupo y reconoció su diversidad: “de putas a papas –dijo– hay mucha mierda de esa” (cit. en Przeworski, 1988: 104). Lo incorporo como forma de enriquecer las posibles relaciones capturadas por un tipo de discurso que internamente tiene variantes distintas. El lector quisquilloso es libre de omitir las diferencias entre el proletariado y la fuerza de trabajo excedente, y concentrarse en las relaciones entre los conjuntos CS_d y CS_p .

crucial consiste en que la sociedad civil carece de agrupaciones intermedias entre los individuos y el conjunto más grande C . Los intereses de los individuos vienen determinados por sus dotaciones iniciales y los valores que lo hacen preferir unas mercancías sobre otras.

$$\text{En } C, \{m_k \neq m_l \neq \dots \neq m_n\}$$

Cada individuo pertenece a C por naturaleza, en la medida en que es capaz de resolver el conflicto ocasionado por la divergencia de intereses mediante intercambios voluntarios que incrementan el valor subjetivo de sus dotaciones iniciales. Como los individuos generan un orden espontáneo, libremente aceptado, en el que todos mejoran su situación una vez que realizan los intercambios, en principio el Estado es (o debe ser) extraño a las relaciones entre los miembros de la sociedad civil. Por otro lado, el discurso liberal otorga una valoración positiva a la variedad y el conflicto de intereses y valores entre los miembros de la sociedad, en la creencia de que la diversidad y la competencia son las fuerzas que permiten a los individuos desarrollar sus potencialidades. Así, por razones tanto éticas como de eficacia, el liberalismo prescribe la preservación de la diversidad de intereses y valores en la sociedad civil con respecto a las intervenciones del Estado, lo que se cumple siempre que el *status quo* venga definido por

$$\{E \cap C\} = \emptyset.$$

En estas condiciones, el Estado cumple con la función de garantizar el cumplimiento de los contratos y el respeto a los derechos de propiedad (esto es, proteger a cada individuo contra las intervenciones indebidas en su libertad por parte de otros individuos).²¹ La propensión del Estado a invadir la esfera de la sociedad civil es contenida mediante la división de sus estructuras y de sus integrantes. La división del Estado en sus estructuras, que es la técnica constitucional, reparte funciones en distintos órganos o poderes (P), de tal forma que

$$E = \{P_L \cup P_E \cup P_J\}.$$

²¹ Nótese que, mientras en el socialismo la intersección entre los conjuntos E y S estaba constituida por la clase social dominante, para el liberalismo, que no reconoce clases, dicha intersección está representada por un conjunto vacío. Se puede decir que esta relación es la que, en el pensamiento liberal, produce la vigencia de los derechos individuales –incluido el de propiedad.

Por otro lado, establece competencias compartidas entre los poderes de forma tal que se necesite su acuerdo mutuo para tomar decisiones. Es decir que, dependiendo de las reglas en operación y de las medidas específicas (D), tendremos que, para cualquier órgano l ,

$$D = \{P_l \cap P_{-l}\}.$$

La eficacia de la división de estructuras depende de que sus integrantes compitan por el poder dividiéndolos en gobierno (G) y oposición (O). Con esta división se consigue que los intereses de cada grupo sean distintos.

$$E = \{G \cup O\} \Rightarrow \{m_G \neq m_O\}.$$

Lo importante en este sentido es que los individuos concretos que ocupan los subconjuntos G y O no vienen fijos, sino que dependen de la distribución de preferencias determinada por los intereses y valores en la sociedad. Esto es,

$$\{G, O\} = f(m, v).$$

Se espera que esta función sea suficiente para mantener la separación entre el Estado y la sociedad civil (Riker, 1982; Radcliff, 1993; cfr. Weingast, 1997). La estrategia liberal consiste en mantener abierta la alterabilidad del *status quo* en E para mantener inalterado el *status quo* en C .

El liberalismo y el socialismo, tal como los he expuesto, pueden ser vistos como los puntos extremos de un continuo ideológico-programático, representando la derecha el primero y la izquierda el segundo. Si este continuo fuese el eje horizontal de una función lineal cuyo eje vertical representa la intervención del Estado en los intercambios de la sociedad civil, a medida que avanzamos desde el polo “derecha” hacia el polo “izquierda”, tendríamos una curva creciente que inicia con la intervención necesaria para garantizar el cumplimiento de los contratos y los derechos de propiedad, sin transferencias, para culminar con una expropiación total de los medios de producción en beneficio de la clase trabajadora.²² En medio, avanzando en la dirección de intervención creciente, tendríamos distintos puntos

²² Esta relación entre ideología e intervención estatal es posible gracias a que ambos discursos comparten una referencia a las instituciones políticas. No incluye los escenarios deseables por cada uno de las ideologías extremas; es decir, la sociedad sin Estado. No es difícil imaginar cómo sería la curva al incluirlo: partiendo del origen y, justo cuando se alcanza el máximo grado de intervención estatal, volviendo abruptamente a un nivel de intervención igual a cero.

programáticos representados por la provisión de bienes públicos, las intervenciones redistributivas y la intervención en el mercado con políticas anticíclicas y de bienestar.²³ Al alejarnos de los extremos, es indispensable que el programa relaje algunas de las características de cada discurso. Cuando avanzamos desde la derecha hacia la izquierda, las relaciones entre los miembros de la sociedad civil pierden en voluntariedad –hasta que, en el otro extremo, algunos, por lo menos, son forzados a renunciar a su propiedad sobre los medios de producción. Por otra parte, desde la izquierda hacia la derecha, se debilita el antagonismo de los intereses entre los productores directos y la burguesía, de tal forma que, a pesar de sus conflictos alrededor de los beneficios, pueden llegar a compartir un interés en el crecimiento continuo del producto hasta que, en el otro extremo, los trabajadores compiten entre sí por los puestos de trabajo, sin intereses de clase en absoluto, y acuerdan contratos de beneficio mutuo con los empleadores.

El discurso populista no es programático en este sentido. Puede ubicarse en cualquier punto del continuo sin perder sus características básicas. Comparte con el liberalismo la separación entre gobernantes y gobernados, pero invierte el signo valorativo de esta separación. Comparte con el socialismo el reconocimiento de la existencia de relaciones de dominación, pero niega que éstas provengan de la esfera de lo que en el último es la sociedad civil. Rechaza las divisiones que ambos discursos postulan al interior de los dos subconjuntos que componen la sociedad.

Para enfatizar las diferencias, utilizo una nomenclatura distinta. Para el populismo, la sociedad política se compone de una élite (O) y el pueblo (N).

$$P = \{O \cup N\}$$

Ambos términos tienen una relación separada y adversarial, tal que

$$\{O \cap N\} = \emptyset$$

A diferencia de la sociedad civil postulada por el liberalismo y el socialismo, los integrantes del pueblo comparten los mismos valores e intereses.

²³ Me apresuro a aclarar que esta sucesión no pretende reflejar un programa político que describa, digamos, los pasos para la transformación social. Más bien, es una guía para que el observador externo, dadas las características de un programa dado, ubique el programa en el punto del continuo en función de la intervención implícita.

$$\text{En } N, \{m, v_k = m, v_l = \dots = m, v_n\}$$

Ahora bien, en el conjunto N , existe un individuo i_s , tal que él y sólo él representan los intereses y los valores del conjunto. Entonces:

$$i_s \in N \text{ e } i_s \equiv N$$

La élite, por su parte, a diferencia de lo que en los otros discursos era el Estado, incluye a los integrantes del gobierno pero no se limita a ellos: puede abarcar a varios elementos que en el liberalismo y el socialismo integran la sociedad civil, perteneciendo o no a las clases económicamente dominantes. La adscripción a la élite se define porque sus intereses o sus valores son distintos a los del pueblo en tanto conjunto cuyo equivalente es el individuo antes señalado.²⁴ Es decir que,

$$m_j \neq m_{i_s} \Rightarrow j \in O,$$

o bien

$$v_j \neq v_{i_s} \Rightarrow j \in O$$

Una vez que el individuo i_s desplaza a la élite en los cargos de poder, la operación de equivalencia hace que sea el pueblo mismo quien esté a cargo de las decisiones. Así, al extremo, la dimensión del *status quo* que ataca el populismo es la separación misma entre élite y pueblo.

Una implicación del ejercicio es que el populismo no se distingue por ser un discurso anti-status quo, como quiere Panizza (2005). Los tres discursos pretenden modificar distintas

²⁴ La idea de equivalencia entre el líder y el conjunto del pueblo es explícitamente sugerida por Laclau (2005: 40), si bien yo la tomo como una mera propiedad discursiva y éste la maneja como una cuestión de hecho, además de que no exige que tal individuo se presente como un miembro del pueblo. La operación por la que el líder decide quién pertenece al pueblo y quién a la élite tomando como referencia sus propios intereses y valores fue destacada, desde la perspectiva del análisis de clase, en los siguientes términos: “la clase obrera fue conducida mucho más a luchas contra los enemigos de su enemigo” (Ianni, 1973: 118), refiriéndose a que los obreros eran inducidos a enfrentarse a clases que, en estricto sentido, eran antagónicas al liderazgo, a su vez representante de la burguesía industrial. Más adelante (*Ibid.*: 140-46), este autor hace una exposición clara de cómo las masas son manipuladas por este liderazgo y, finalmente, traicionadas. La idea (que más bien es una acusación) de masas manipuladas o “disponibles” fue muy difundida al referirse a los casos de populismo clásico. No me detengo en ella por dos motivos. En primer lugar, está en cierta forma subsumida en las definiciones del populismo basadas en las características organizativas. En segundo lugar, en esta idea subyace el supuesto de que la clase obrera tiene un interés en la revolución social de la que es desviada con las políticas reformistas. Como quedará claro en el siguiente capítulo, el marco teórico que desarrollo no requiere semejante supuesto.

dimensiones del status quo, con el fin de obtener (o preservar, en el caso del liberalismo) un estado del mundo deseable. Tampoco se distingue por ser antipolítico: el populismo es antipolítico porque pretende sustituir (simbólicamente) a la élite en el poder por el pueblo, elevando al individuo equivalencial, pero tanto el liberalismo como el comunismo consideran que el estado deseable es aquel en el que el Estado está ausente. De esta forma, se reitera que lo que distingue al discurso populista es un carácter anti-élite (i.e., una modalidad de la antipolítica).²⁵

De las propiedades centrales del discurso populista se derivan algunas implicaciones que se manifiestan como regularidades empíricas detectadas en diversas investigaciones. Estas implicaciones son consecuencia de la elección estratégica de un discurso con características determinadas, pero no se las debe confundir con un criterio de selección. Es decir que podemos esperar que las organizaciones que sostienen un discurso populista presenten frecuentemente las características que a continuación se enuncian, pero la presencia o ausencia de algunas de ellas no será suficiente para considerar que una organización o un candidato es o no populista:

- Maniqueísmo. El discurso es propenso a transformar “los problemas políticos en problemas éticos”, de tal forma que quien emite el discurso “se identifica con el bien y condena a los que defienden el mal” (Touraine, 1998: 357). Esta característica se deriva de la relación de conflicto entre el pueblo y la élite, unida a la consideración de que es esta última quien tiene el poder. “Debido a su sufrimiento y bondad natural, el pueblo es la encarnación de la nación auténtica, de la bondad, de la justicia y de la moral. El pueblo lucha contra la oligarquía que representa lo inauténtico, lo extranjero, el mal, lo injusto y lo inmoral” (De la Torre, 1996: 67; también Álvarez Junco, 1994: 21, 25). El populismo tiende a convertirse en un “credo” que sostiene que “la gente simple, que constituye la aplastante mayoría, y sus tradiciones colectivas son las depositarias de la virtud” (Wiles, 1970: 203). La oferta política tendrá un carácter “perfeccionista” (Keren, 2000), en el sentido de pugnar por un comportamiento en los gobernantes que maximice los ideales de trabajo desinteresado, orientación al interés público y rechazo a las concesiones. El pragmatismo de la práctica política es denunciado por líderes que

²⁵ Las distintas variedades de la antipolítica son revisadas por Schedler (1997).

prometen la renovación una vez que alcancen el poder (Canovan, 1999: 12), lo que pueden apoyar con un comportamiento que obedece claramente a sus convicciones personales (Hermet, 2001: 20).

- Preferencia por las formas participativas, espontáneas y directas de la democracia sobre los instituciones formales de la representación política (Schdler, 19996; 10; Canovan, 1999: 14; McKinnon y Petrone, 1998: 45). Como lo expone Papadopoulos (2001: 74-6), la abolición de las mediaciones entre la ciudadanía y los gobernantes es el remedio adecuado al egoísmo y la incompetencia de los detentadores del poder.
- Amor por lo simple. Los populistas tienden a reproducir el lenguaje popular en sus discursos y el tipo de razonamiento que consideran propio del “pueblo” (Álvarez Junco, 1994 y 1996). Denuncian el lenguaje evasivo de los políticos, los tecnicismos de los expertos y la complicación de los procedimientos. La complejidad es una trampa perpetuada por lo políticos profesionales, pues las soluciones a los problemas que le preocupan a la gente común son simples (Canovan, 1999). El sentido común, guía del pueblo en sus problemas prácticos, es suficiente para dar con las soluciones adecuadas (Brown, 1997).
- Propensión antisistémica. Cuando un candidato o partido ataca a los partidos establecidos y a sus miembros por su antagonismo hacia el pueblo (y además reúne las condiciones de credibilidad a las que me referiré más adelante), es posible que lleve este ataque al grado de dirigirlo a los valores ampliamente compartidos por la clase política y que, en buena medida, constituyen la base del sistema de partidos. En este sentido, la fuerza política con discurso populista tenderá a adquirir una posición antisistema en relación al resto de los partidos, aún si el contenido de su ideología no es incompatible con las reglas del juego democrático.²⁶

Estos elementos tienden a ser una consecuencia natural de la adopción de un discurso populista. Su ocurrencia frecuente lleva a algunos investigadores a tomarlos como características definitorias del populismo, sea en lo individual o en la combinación de dos o

²⁶ En esto retomo la distinción hecha por Capoccia (2002), quien llama “polarizadores” a los partidos que reúnen estas características. Este aspecto de los partidos populistas es también reconocido por Surel (2001: 156-7).

más.²⁷ Pero mi punto aquí es que el maniqueísmo, la preferencia por la democracia directa, el amor por lo simple y la propensión antisistémica, por sí mismos o en distintas combinaciones, pueden estar presentes tanto en partidos o candidaturas con un discurso populista como en otros que no esgrimen este tipo de discurso. La idealización del pueblo era una constante de los *narodniki* rusos y en el discurso de Fidel Castro en su etapa guerrillera (Hennesy, 1970). El énfasis en la participación directa es muy frecuente en la izquierda actual, mientras que la simplificación de los problemas es una estrategia retórica de las vertientes antipolíticas del neoliberalismo (Schedler, 1997).²⁸ La propensión antisistémica, de más está decirlo, no es exclusiva del populismo, sino que la comparte con diversos partidos radicales.

Finalmente, entre las características no necesarias pero que es posible esperar en el populismo, dadas las características del discurso, algunas se distinguen porque pueden impactar en el éxito de la estrategia discursiva. En la siguiente sección discuto por separado estas condiciones de credibilidad del discurso populista.

Condiciones de credibilidad del discurso populista

Un candidato populista puede ser muy convincente en su discurso, de tal forma que sus receptores sean convencidos de que todos los políticos son iguales y sus intereses y valores están en conflicto con los del pueblo. De hecho, incluso es posible que los electores ya estén parcialmente convencidos de que ese aspecto del discurso es descriptivo de la situación política. Sin embargo, tal nivel de convicción por sí mismo puede producir abstencionismo y no un voto a favor del candidato populista, si el discurso no es creíble en un aspecto: que los intereses y valores del emisor correspondan con los del pueblo.²⁹ Es decir, existen condiciones para la credibilidad del discurso cuyo cumplimiento es variable.

²⁷ Así, por ejemplo, para Loaeza (2001: 365), el populismo se distingue por una relación vertical entre el líder y las masas, una visión idealizada del pueblo y la aversión a las instituciones de la democracia representativa.

²⁸ Esto queda claro en la aplicación de un principio doméstico como no gastar más dinero del que se tiene al ámbito de las naciones y el presupuesto público. Agradezco a Benjamín Temkin haberme proporcionado este ejemplo.

²⁹ Poguntke (1996) argumenta que tanto el voto por los partidos con retórica antipartidista como el abstencionismo son expresiones de un sentimiento antipartidista en la población.

Una forma en la que el candidato populista puede hacer creíble su discurso es presentando atributos, ya sea físicos o de trayectoria, que produzcan en el electorado la sensación de que es “uno de ellos”, de tal forma que el cuerpo y la vida del líder se convierten en un símbolo (Panizza, 2005: 20; De la Torre, 1994a: 45). Así, por ejemplo, Evo Morales, Hugo Chávez y Lucio Gutiérrez comparten rasgos étnicos y origen social con los sectores subalternos de sus respectivos países. Esta forma de identificación por similitud, no obstante, tiene el inconveniente de no ser manipulable. La trayectoria personal, en cambio, puede ser presentada para producir una identificación con un *alter ego*. Ese fue el caso de Ross Perot, cuya historia de empresario exitoso por su propio esfuerzo, debidamente representada, evocaba el mito del *American dream* y la disposición a la acción (Brown, 1997). Una combinación de ambas formas viene dada por Fujimori (Ellner, 2003: 145), Max Fernández (Mayorga, 2001: 311-2) y Bucaram (De la Torre, 1996: 28), cuyos orígenes étnicos los distinguían con respecto a la élite blanca de sus países a la par que sus trayectorias profesionales remitían a la posibilidad de ascenso social mediante el esfuerzo.

Sin negar el efecto de estas condiciones de credibilidad, su poder discriminatorio es escaso. Por una parte, nos obligaría no sólo a fijarnos en las propiedades contextuales de cada nación en un momento dado, sino que probablemente encontraríamos que las dimensiones de identificación posibles son tantas, que sería imposible determinar de ellas cuál es relevante. Una candidatura que pretende explotar una característica determinada, un atributo de un candidato, en realidad está haciendo una apuesta. En el nivel más burdo, un candidato atractivo físicamente puede ser exitoso (Collor de Melo) o resultar un fiasco electoral (Irene Sáez). No se puede saber de antemano qué atributo elegirá la mayoría para identificarse. Aunque tres cuartas partes de la población boliviana tienen origen indígena, no parece autoevidente que la identificación habría funcionado, por decir algo, en las elecciones de 1997.

Ahora bien, aún si pudiéramos salvar este obstáculo en forma razonable, nos encontraríamos con que la presentación de candidaturas con atributos valorados por los electores es un fenómeno que se generaliza en las democracias modernas (Manin, 1998), y tendríamos que esperar su ocurrencia al menos en todos los partidos que Gunther y Diamond (2003) consideran de orientación electoral, que de ninguna forma se empalman

del todo con los partidos populistas.³⁰ Si es así, la credibilidad que gana un candidato populista con atributos de similitud es inmediatamente neutralizada cuando un partido tradicional presenta una candidatura con iguales atributos.

Aunque el discurso populista postula una homogeneidad esencial entre los elementos que integran el pueblo, en los hechos el “pueblo” es tan heterogéneo (aún más, yo diría, que la clase política) que las condiciones de credibilidad deben ser reducidas al mínimo común denominador. En este sentido, no es indispensable (aunque ayuda) que el candidato sea “igual” al pueblo para que se cumpla la condición de equivalencia arriba señalada. Basta con que no sea igual a la élite. Dado que el campo político se reduce a dos grupos mutuamente excluyentes y exhaustivos, no pertenecer a uno de ellos implica por necesidad que se pertenece al otro. Un candidato puede aducir con verosimilitud que no comparte los intereses y los valores de la élite cuando: 1) la organización partidista a la que pertenece es nueva o, de no serlo, es pequeña o marginal (Schedler, 1996: 8), o 2) su trayectoria previa se realizó por fuera del sistema de partidos tradicionales –es decir, es capaz de afirmar de forma verosímil que no es un político (Panizza, 2005: 20-1), lo que alude a la socorrida figura del *outsider*. Estas dos condiciones serán las únicas que atenderé, omitiendo los atributos personales.

Así, un político cualquiera, sea cual sea su adscripción partidista, puede optar por una estrategia discursiva de tipo populista, pero la credibilidad de su discurso será mayor en la medida en que cumpla uno de los requisitos señalados o ambos. Se puede notar que los dos criterios tienen mucha relación con los aspectos organizativos del populismo. Sin embargo, es muy distinto considerarlos atributos definicionales que tomarlos como criterios de credibilidad del discurso. Por ejemplo, Morales, Chávez, Perot y Fujimori no solo esgrimieron un discurso populista, sino que este discurso era creíble en sus dos condiciones. Muy cerca de ellos está Uribe, que creó un partido vehículo para su candidatura, aunque su trayectoria previa incluía cargos menores bajo el Partido Liberal.

³⁰ Hermet (2001: 15-7) destaca en los populismos latinoamericanos de los noventa el impacto mediático de las candidaturas, su atractivo televisivo, el lugar central de las características personales, el reclutamiento de figuras deportivas y del espectáculo, etc., de tal forma que el populismo, desde su punto de vista, es un mero asunto de *marketing*. Lo que yo argumento es que, en mayor o menor grado, todos los partidos orientados a los fines electorales recurrirán a éstas y otras formas de destacar a la persona, por lo que este supuesto “populismo mediático” no puede servirnos para distinguir entre diversas candidaturas a las populistas de las que no son parte del mismo fenómeno.

Caldera, por su parte, tenía un discurso populista y compitió por fuera de los partidos tradicionales, pero su papel predominante en la fundación del régimen venezolano y como líder máximo de uno de esos partidos mellaba su credibilidad.

Un caso de populismo sin condiciones de credibilidad es el de Menem. Asumiendo que su discurso de campaña hubiese sido populista, es insostenible que su partido, el Justicialista, sea una organización débil y que su trayectoria política sea la de un *outsider*: por el contrario, era la de un experto en las mañas y secretos de la política argentina (Panizza, 2000). Weyland (1999: 386) considera *outsiders* a Menem y a Carlos Andrés Pérez por haber obtenido sus candidaturas oponiéndose a los deseos del liderazgo partidista, pero eso es tanto como decir que cualquiera que no se somete a una tiranía partidista es un fuereño, no importa si se formó compartiendo la escuela de esos tiranos.³¹

Por otro lado, quedan descartados casos de clasificación que no cubren ninguno de los parámetros. Carlos Andrés Pérez (Venezuela) sólo comparte con otros populistas el haber mentido en su campaña, pero su discurso fue programático y carecía del contenido antielitista. Gonzalo Sánchez de Lozada (Bolivia) no sólo no cuenta con los requisitos de credibilidad de su discurso populista, sino que no los requería porque no tenía un discurso de ese tipo. Lazarte (1998) lo considera un neopopulista, al parecer, porque su liderazgo tendía a la personalización y porque alteró la relación de fuerzas al interior de su partido. En este caso resalta particularmente el problema de los criterios de clasificación organizativos. Sánchez de Lozada compartía estas características con otros pretendidos neopopulistas: Menem, Pérez y Salinas. Pero también con su antecesor Víctor Paz y con el laborista Tony Blair, cuyos liderazgos no son considerados populistas. De igual forma, Mario Vargas Llosa (Perú), cuya campaña tuvo un estilo muy personalista, no puede por esto ser considerado un populista, debido a que su discurso estaba enfocado en las virtudes de la economía de mercado y el ataque al gobierno de Alan García, sin referencias a divisiones entre pueblo y élite. Tanto Vicente Fox (México) como Alejandro Toledo (Perú)

³¹ En su artículo de 2001, Weyland aborda ambos casos desde las características de su ejercicio del poder, en el cual afirma, intentaron, con diversos grados de éxito, debilitar o desinstitucionalizar a sus respectivos partidos. Me parece que aquí se revelan las deficiencias del criterio organizacional. Sencillamente, no hay forma de considerar a Acción Democrática o al Partido Justicialista como organizaciones débiles, débilmente institucionalizadas o estructuralmente dependientes del liderazgo en turno. Por un lado, Pérez no resistió en el poder en cuanto AD le retiró el apoyo; por el otro, la idea de que Menem sólo dispuso del PJ no resiste la evidencia (Novaro y Palermo, 1997).

tienden a ser presentados como populistas en virtud de sus fuertes apelos a la identificación con sus electores, especialmente en el último caso. Sin embargo, dada la coyuntura que enmarcó sus campañas, sus baterías se dirigieron contra los representantes de los regímenes semiautoritarios que, respectivamente, pretendían destituir, no en contra de una élite u oligarquía. En ocasiones se considera neopopulista a Fernando Henrique Cardoso (Brasil), pero la única similitud que alcanzo a ver son manifestaciones externas del éxito de algunos populistas: uso de decretos, popularidad y reforma a la constitución para permitir reelección. Ni siquiera vale la pena comentarlo.

El cuadro 1.1 presenta una relación de los candidatos que, hasta donde tengo noticia, pueden ser considerados populistas estrictamente en virtud de las características de su discurso, para el período que va de 1989 a la fecha. Viene acompañado de un *checklist* que indica qué condiciones de credibilidad acompañaban este discurso.

Cuadro 1.1. Candidatos presidenciales populistas en América Latina. 1989-2006

Candidato	País/año	Condiciones de credibilidad	
		Partido nuevo/marginal	<i>Outsider</i>
Carlos Saúl Menem	Argentina/1989	No	No
Néstor Kirchner	Argentina/2003	No	No
Carlos Palenque Aviles	Bolivia/1993 y 1997	Sí	Sí
Max Fernandez	Bolivia/1993 y 1997	Sí	Sí
Evo Morales	Bolivia/2002 y 2005	Sí	Sí
Manfred Reyes	Bolivia/2002	Sí	No
Fernando Collor de Mello	Brasil/1990	Sí	No
Anthony Garotinho	Brasil/2002	Sí	No
Alvaro Uribe Velez	Colombia/2002	Sí	No
Ottón Solís Fallas	Costa Rica/2002 y 2006	Sí	No
Abdalá Bucaram	Ecuador/1996	No	No
Álvaro Noboa	Ecuador/1998	No	Sí
Álvaro Noboa	Ecuador/2002	Sí	Sí
Lucio Gutiérrez	Ecuador/2002	Sí	Sí
Alfonso Portillo	Guatemala/1995 y 1999	Sí	No
Andrés Manuel López Obrador	México/2006	No	No
Alberto Fujimori	Perú/1990	Sí	Sí
Ollanta Humala	Perú/2006	Sí	Sí
Rafael Caldera	Venezuela/1993	Sí	No
Hugo Chávez	Venezuela/1998	Sí	Sí

La lista incluye 20 candidatos populistas para un total de 21 elecciones celebradas en 10 países.³² De las 20 candidaturas, 8 reúnen las dos condiciones de credibilidad y otras 8 al menos una (de las cuales 7 corresponden a una etiqueta partidista nueva). Únicamente 4 no disponen de ninguna de las condiciones de credibilidad. Esto indica que existe cierta asociación entre el discurso populista y dichas condiciones.

Cuando un candidato es un genuino *outsider* o un escisionista de un partido político establecido, es altamente probable que la formación política que lo postula sea un mero vehículo electoral para sus aspiraciones políticas. Otra posibilidad, cuando el candidato responde a causas relativamente arraigadas, es que su formación del tipo “partido-movimiento”, cuya red de apoyo está más comprometida con la promoción de valores (aunque no necesariamente con un programa coherente).³³ En ambos casos, se trata de organizaciones débiles, altamente dependientes del liderazgo. En este sentido, el cumplimiento por quien emite un discurso populista de las condiciones de credibilidad estará asociado empíricamente con las características organizativas señaladas anteriormente, en particular lo relativo al liderazgo vertical y su relación conflictiva con otro tipo de organizaciones: internamente, el partido es una etiqueta a su disposición y con escasa capacidad para desarrollar y proteger sus propios intereses en forma tal que el partido funcione como contrapeso al líder, mientras que hacia fuera, es difícil que este líder, por sus orígenes y trayectoria, tenga los contactos, la experiencia y los intereses en común con organizaciones partidistas y sociales orientadas al poder político. Nótese que esta regularidad observada se deriva del caso específico en el que el candidato populista carece efectivamente de las credenciales de un político tradicional. Esto no implica que con el paso del tiempo estas organizaciones adquieran mayores niveles de autonomía con respecto al líder. Por el contrario, en la medida en que el liderazgo sea un factor de éxito electoral es de esperarse que la verticalidad y el personalismo se conviertan en las reglas institucionalizadas del partido en cuestión.³⁴

³² Álvaro Noboa aparece dos veces debido a un inusual cambio de estrategia. En 1998 compitió por el Partido Roldosista Ecuatoriano, bastante asentado en el sistema de partidos; para 2002, fundó el Partido Renovador Institucional Acción Nacional.

³³ Para una caracterización de este tipo de partidos políticos, véase Gunther y Diamond (2003: 185-9).

³⁴ Papadopoulos (2001) encuentra este tipo de liderazgo como característico de los partidos populistas de Europa occidental, cuya vida ya es larga en la mayoría de los casos. Mayorga (2001) da cuenta del mismo

Es por esto que, al observar los populismos, los aspectos discursivos tienden a aparecer como correlacionados con un perfil organizativo. Así, Surel (2001: 139), que infiere los rasgos de los partidos populistas europeos a partir de la observación de sus regularidades, presenta tanto la acusación a las élites políticas, económicas y culturales de haber despojado al pueblo de su soberanía como el carisma del líder. Considero que, al pasar al terreno definicional, si nos centramos únicamente en el aspecto discursivo encontraremos únicamente candidatos y/o partidos populistas, mientras que si definimos al populismo por las características organizativas que se encuentran frecuentemente en él, “contaminaremos” nuestro universo de estudios con organizaciones personalistas pero no populistas.³⁵

Invierto entonces el procedimiento utilizado por las definiciones basadas en las características organizativas (*supra*), las cuales toman la implicación por el fenómeno mismo y, en ocasiones, obligan a forzar al objeto con el fin de que se ajuste a los requerimientos definicionales.

En este capítulo sometí a evaluación diversas definiciones del fenómeno populista, con el objetivo de definir al objeto de estudio o variable a explicar de la manera más apropiada para los objetivos de la investigación. Opté por una aproximación al fenómeno desde la perspectiva del discurso. Considero “populista” a aquel candidato u organización que en su discurso afirma: 1) una relación antagónica entre el pueblo y la élite; al mismo tiempo que 1.1) una identidad de intereses y valores al interior de cada uno de estos grupos, y 2) el emisor del discurso se presenta como integrante del pueblo en su relación antagónica con la élite. La forma particular en que el populismo divide al mundo político (pueblo/élite) lo distingue de otros discursos políticos alternativos, lo que permite separar claramente la definición del populismo con respecto al eje programático de la dimensión izquierda-derecha.

fenómeno en los partidos Unión Cívica Solidaridad y Conciencia de Patria, de Bolivia, cuya existencia fue algo más que un paso fugaz.

³⁵ Nótese, por ejemplo, que Santiso (2001: 240-3) se refiere a los mismos políticos que Weyland considera neopopulistas, pero sin referencia a ninguna cualidad organizativa. Opta por una secuencia en la que una campaña *antiestablishment* es seguida por un gobierno neoliberal. Con esta opción, insisto, no perdemos casos importantes y reducimos el riesgo de incluir casos que no se ajustan al fenómeno de interés.

Por otro lado, distinguí los atributos del fenómeno populista de algunas regularidades empíricas que se derivan lógicamente de las características del discurso. Entre ellas destacan las condiciones de credibilidad de un discurso populista. En principio, cualquier candidato, incluso el del Partido Siempre en el Gobierno puede esgrimir un discurso populista. Pero este discurso será más creíble en la medida en que quien lo emite 1) pertenezca a una organización partidista nueva, pequeña o marginal, y/o 2) tenga una trayectoria previa ajena al sistema de partidos tradicional. Cuando estas condiciones de credibilidad se cumplen, es altamente probable que el liderazgo adquiera las características verticales y personalistas que por lo general se le atribuyen al populismo.

Una vez caracterizada la variable dependiente, corresponde plantear algunas hipótesis acerca de los factores que harán electoralmente más o menos exitosa una estrategia populista. Esta tarea se emprenderá en el siguiente capítulo.

II. La representación política como relación entre agente y principal

Un partido que ingresa al mercado electoral dirige su mensaje a los intereses y/o los valores de determinados electores, con la esperanza de que un número suficiente de ellos note la coincidencia y que ésta coincidencia los motive a votar en su favor. Tales intereses y valores no necesariamente tienen que estar concretados en una demanda específica por parte del electorado; puede ser suficiente su latencia para que el partido o candidato en cuestión obtenga una proporción de votos considerable. Por supuesto, esto no lo hace de manera de aislada. Compite con otros mensajes que se dirigen, en términos amplios, al mismo cuerpo electoral.

Dado el mensaje característico del discurso populista, ¿qué factores determinan que su contenido sea bien recibido por los electores? Está claro que tales factores no pueden ser los que determinan el éxito o fracaso de los partidos ubicados en el eje programático izquierda-derecha, dado que el populismo es ajeno a esta dimensión (*vid.* cap. I). Por otro lado, debido a razones que se aclararán más adelante, el estudio únicamente comprende a candidaturas populistas que se presentan desde la oposición. Por esta razón, si se quiere dar cuenta del grado de su éxito electoral, se tienen que buscar factores que únicamente afecten a la oposición populista y no al resto de los partidos de oposición.

En este capítulo me propongo deducir teóricamente qué tipo de factores son éstos y qué relación debemos esperar que tengan con el voto a favor de los candidatos populistas. En primer lugar, presentaré una relación de las causas del populismo esgrimidas por diversas investigaciones. Intento cubrir todo el abanico disponible desde la investigación de los populismos “clásicos”, en virtud de que la hipótesis que expondré después de esta revisión pretende ser válida para toda situación en la que una candidatura con discurso populista se someta a veredicto electoral desde la oposición. Así que la única restricción de aplicabilidad es la relativa vigencia de una democracia representativa formal.

Las características del discurso populista, particularmente sus afirmaciones sobre el comportamiento y las motivaciones de las élites políticas, son en muchos aspectos relevantes a las expectativas esperadas de la democracia representativa, de tal forma que el grado en que el discurso populista es persuasivo tiene que estar correlacionado de manera negativa con el cumplimiento de dichas expectativas. Esta observación me lleva a sostener

que la teoría del éxito electoral del populismo debe ser insertada en el marco más general de la teoría de la representación política. Sostendré que la medida en que los mecanismos de la representación son tales que la correspondencia entre su funcionamiento efectivo se corresponde con las expectativas que desata es una cuestión de confianza. En ausencia de esta confianza, los candidatos populistas incrementan sus expectativas de éxito electoral.

Explicaciones del fenómeno populista

La relación de explicaciones al populismo que presentaré a continuación tiene un carácter muy heterogéneo. En primer lugar, cada explicación está determinada por la forma en que se define al objeto de estudio (*vid.* cap. I), por lo que no es posible afirmar que todas se refieran al mismo fenómeno. Por otro lado, las explicaciones varían en el grado en que son verificadas empíricamente. Algunas son meras intuiciones o lugares comunes, otras tienen un carácter de meras hipótesis, unas más son desarrolladas para explicar un solo caso o un número limitado de ellos; algunas otras, finalmente, son producto de una verificación sistemática. Tras exponerlas, donde sea posible intentaré transformarlas en su equivalente para efectos de causas de éxito electoral de candidaturas con discursos populistas.

El estudio de los casos que conforman el populismo clásico dio lugar a algunos de los trabajos que llegaron más lejos en la incorporación de la explicación del populismo dentro de un marco teórico más general. Para Germani (1973), el populismo (clásico) es una consecuencia de la modernización rápida. El cambio de una mentalidad prescriptiva a una deliberativa en América Latina produjo la activación política por parte de masas antes pasivas, cuyo carácter abrupto impidió que los canales institucionales existentes desarrollaran la capacidad para integrarlas. “Los movimientos ‘nacional-populares’ aparecieron... en cuanto el grado de movilización *rebasa* la capacidad de los mecanismos de integración” (Germani, 1973: 30). Este proceso contrasta con el seguido en los capitalismos desarrollados, donde la activación política fue gradual y en cada momento la correspondiente a la que podían absorber las instituciones políticas y la economía. Siguen muy de cerca esta hipótesis Saul (1970), que considera al populismo un producto de la modernización o el capitalismo y Stewart (1970), que reproduce básicamente el argumento

de Germani. Es necesario enfatizar que el factor causal observable que desencadena todo este proceso es la modernización acelerada (como quiera que sea medida).

El tratamiento del tema es muy similar en Di Tella (1973), para quien la modernización juega el mismo papel, si bien desatando un proceso ligeramente distinto, al producir una “revolución de las expectativas” en masas que, impacientes por salvar la brecha entre lo que desean y el nivel de satisfacción, quedan disponibles para su movilización por liderazgos con una ideología anti-*status quo*. Di Tella, extendiendo lo que en Germani sólo está implicado, que el populismo solamente es posible en países de desarrollo bajo o medio, no en condiciones de capitalismo desarrollado. Esto se debe a que, al centrarse en las motivaciones que podrían tener los elementos de estratos medios y superiores para adoptar ideologías adversas al status quo, encuentra que 1) es menos probable que éstos existan cuando el nivel de desarrollo permite un incremento de los niveles de vida y de las perspectivas de movilidad social, y 2) los países desarrollados, por definición, carecen de la condición periférica que explica el surgimiento de expectativas insatisfechas, a la vez que en sus etapas iniciales de desarrollo no había naciones más avanzadas a las cuales imitar.

Minogue (1970: 250-7), por su parte, relaciona al populismo con una conciencia, por parte de sectores periféricos, de que su situación es desventajosa en lo que se refiere a la riqueza y Hermet (2001: 24-6) reproduce en la actualidad algunos de los argumentos de Di Tella. Nótese que en ambas variantes de la hipótesis modernizadora se asume una incompatibilidad entre el populismo como régimen y la democracia procedimental.

En esta misma vertiente, están los estudios que asocian el populismo (como proyecto estatal) con las necesidades de acumulación capitalista. Esta concepción elude el problema de vincular fenómenos políticos como el populismo con tendencias de largo plazo (y por tanto inaprensibles) como la modernización. Sin embargo, existe de todas formas la misma asociación del populismo con momentos de cambio originados en el ambiente extrapolítico. Para Cardoso y Faletto (1969), Ianni (1973) y O'Donnell (Collier, 1985) el populismo (o los liderazgos del populismo clásico) es una respuesta a la crisis del modelo oligárquico y agroexportador, mediante la conformación de una alianza multclasista para fortalecer el mercado interno que, en la práctica, constituyó una transformación del Estado. Todas estas perspectivas asocian el populismo con una fase específica en el desarrollo de las relaciones

capitalistas en países dependientes. Por esta razón, presentan límites no sólo en cuanto a ámbitos de aplicación (los casos correspondientes al populismo clásico), sino que se trata de modelos de interpretación histórica, elaborados *post factum*, que en estricto sentido no constituyen hipótesis falsables.

Más allá de las diferencias de matiz, en todas estas perspectivas asocian el populismo clásico con la política de industrialización por sustitución de importaciones. Sin embargo, esta asociación es suficientemente falsada por De la Torre (1998) y Knight (1998), quienes presentan casos de populismo clásico en países que no pasaron por este proceso. Esto, añadido a los varios casos de neopopulismo en América Latina y Europa (Weyland, 1999), deja sin efecto cualquier unión (sea causal, correlacional o definitoria) entre el populismo y el contenido específico de las políticas públicas.

Mackinnon y Petrone (1998) intentan generalizar las experiencias de populismo clásico y neopopulismo adjudicando su surgimiento a coyunturas de crisis y cambio estructural (crisis del Estado oligárquico y crisis económica de 1929; crisis de la deuda externa en los ochenta y reformas neoliberales). Dentro de esta perspectiva, un caso especial podría ser el del populismo económico, que es desatado por una situación de estancamiento o depresión económica producida por programas de estabilización, que sin embargo mejoraron el presupuesto y la balanza externa (Dornbusch y Edwards, 1992: 17-8). Alternativamente, Kaufman y Stallings (1992: 28-32) vinculan estas políticas a las luchas distributivas en un contexto de desigualdad y capacidad organizativa superior por parte de ciertos sectores subordinados, lo que atañe a causas más estructurales que coyunturales. Finalmente, para Oxhorn (1998) el populismo más recientemente responde, en primer lugar, a la heterogeneidad de los sectores excluidos, pero se activa en la medida en que la crisis los lleva a recurrir al populismo para evitar una mayor marginalidad. Las hipótesis de crisis presentan la ventaja de una mayor falsabilidad, en la medida en que su operacionalización y contrastación parecen ser relativamente sencillas. Loaeza (2001: 379) plantea que el populismo emerge en situaciones de “crisis institucional que exige una salida de emergencia”, favoreciendo la personalización de la autoridad presidencial.³⁶

³⁶ Loaeza (2001: 390-1) piensa en particular en las crisis en la relación entre el presidente mexicano y su partido, el PRI, pero es una afirmación con potencial de generalización a título de hipótesis.

Otro conjunto de hipótesis/explicaciones se centra en ciertas propiedades de la sociedad civil. Para Touraine (1998) el modelo populista surge en virtud de la ausencia de actores o clases sociales definidos al margen de su vinculación con el Estado. Mientras que los actores no se definen por su función socioeconómica (por lo que son “masa”, “pueblo”, y no “clases”), el Estado es un actor más que no está separado ni de fuerzas políticas ni de actores sociales. Esto introduce “la predominancia de las categorías políticas sobre las categorías sociales y... la ausencia de diferenciación entre el sistema político y el Estado” (p. 333). Esta hipótesis de indiferenciación se ajusta a la visión de las bases de apoyo del populismo como masas desorganizadas y carentes de autonomía. Tendría que ser medida como ausencia de organizaciones clasistas. Sin embargo, resulta curioso que es totalmente opuesta a la anteriormente revisada, pues la diferenciación funcional es un aspecto central de todo proceso de modernización.

En la misma vertiente centrada en la sociedad, están las explicaciones referidas a la cultura política de las naciones que registran fenómenos populistas. En su célebre artículo sobre las democracias delegativas, O'Donnell (1997) vincula el surgimiento en América Latina de líderes a los que se atribuye la capacidad (y el mandato) de “salvar a la nación” con tradiciones patrimonialistas arraigadas. De la Torre (1994a y 1998) y Oxhorn (1998), por su parte, relacionan el populismo con el clientelismo. Desarrollando esta línea de argumentación, Prud'homme (2001) sostiene que la democracia representativa requiere de un sustrato individualista en la sociedad, el cual es obstruido cuando las personas se hayan adscritas a redes sociales que se expresan en obligaciones de reciprocidad, al mismo tiempo que las desigualdades socioeconómicas se prestan al intercambio clientelar como forma de acceso a los servicios públicos para amplios sectores; en estos casos, afirma, las prácticas sociales son propensas a generar liderazgos populistas. Loaeza (2001: 377-8) sostiene que los métodos populistas son favorecidos cuando la cultura política coincide con los planteamientos del discurso populista, específicamente en lo que se refiere a idealización (como víctima) del pueblo.

De la Torre también nota que en los actos de campaña de dos populistas muy separados en el tiempo (Velasco Alvarado y Bucaram), los asistentes adquirirían un sentido de pertenencia que, por ser previamente excluidos, no obtenían con los partidos dominantes, así como de dignidad al ser halago lo que en las élites es mencionado en forma peyorativa (De la Torre,

1994a, 1994b y 1996; también Álvarez Junco, 1994: 27 y Panizza, 2005: 26-7). Este tipo de incorporación y de reivindicación subjetivas puede ser un motivo de apoyo, una de cuyas vertientes es, sin duda, la electoral. Por su parte, Lazarte (1998) atribuye a la desconfianza hacia las instituciones de intermediación el éxito de los partidos populistas, tratando a la desconfianza como un factor cultural. Finalmente, el populismo puede estar asociado con la difusión en la población de parámetros excesivamente moralistas para evaluar el comportamiento de los políticos y de criterios muy exigentes en cuanto al tipo de problemas que es posible resolver y al tiempo que debe pasar para que se resuelvan (Keren, 2000).

Una hipótesis interesante por su originalidad es la Ernesto Laclau (1977). El populismo clásico, argumenta, emerge cuando el discurso dominante entra en crisis en el sentido de que pierde su capacidad para absorber las demandas popular-democráticas (i.e., neutralizar las contradicciones del pueblo con el bloque en el poder), creando las condiciones para la emergencia de un discurso de antagonismo. Aunque Laclau explícitamente distingue esto de las crisis de desarrollo, la evidencia que proporciona (el proceso que llevó al peronismo en Argentina) es más en el sentido de ejemplificación que de demostración.³⁷ Adicionalmente, él mismo señala que esta crisis del discurso es paralela a la crisis económica de los 30, que imposibilitó la continuación de las políticas distributivas. Esto nos deja sin capacidad de verificar si el populismo proviene realmente de una crisis discursiva o de una simple crisis económica, como las hipótesis arriba señaladas.

Sin embargo, una forma simple de evaluar una hipótesis de este tipo consiste en suponer que el discurso dominante actual es del tipo “fin de la historia”: democracia representativa y libre mercado. El populismo tendría que estar correlacionado de forma negativa con una operacionalización razonable del discurso así definido.

Una vertiente de explicaciones del fenómeno populista se relaciona con lo que se podría llamar “fallas de representación”, destacando el papel del sistema de partidos en la representación de los intereses sociales o bien las percepciones de los ciudadanos sobre el

³⁷ Podría contar como evidencia para este tipo de argumentación el esfuerzo que realiza Braun (2001: 254-67) en la reconstrucción del *ethos* de las oligarquías latinoamericanas de mediados del siglo XX, asentando los valores y la visión del mundo que justificaban (en términos de necesidad y deseabilidad) la exclusión de los sectores sociales subordinados.

desempeño de las instituciones representativas. La mayoría de estas explicaciones proviene del estudio de casos específicos, y son elaboraciones *ad hoc* o bien generalizaciones basadas en intuiciones que en el adecuado control de las condiciones necesarias para extender la explicación a otros ámbitos.

Lazarte (1998) y Roberts (1998) vinculan el neopopulismo de Bolivia y Perú, respectivamente, con el debilitamiento de las funciones de intermediación (afirmación que no prueban de manera sistemática). Para Roberts (1998), las crisis económicas y los ajustes neoliberales debilitan los intereses organizados y las formas institucionales de representación (sindicatos, partidos políticos), creando un contexto político en el que los patrones de autoridad y los referentes institucionales pierden la capacidad para estructurar la conducta política y las identidades de los sectores populares, por lo que los líderes personalistas pueden movilizar en forma directa a las masas atomizadas, con autoridad por encima de los intereses organizados y del control público. Así, el populismo clásico surge cuando la industrialización y la urbanización erosionaron los controles sociales del orden oligárquico y crearon un nuevo sector de masas dispuestas a la movilización. La crisis económica de los 80 y el ajuste estructural socavaron las formas institucionales de representación del estado desarrollista (partidos, sindicatos), fragmentando la sociedad civil, desestructurando los vínculos institucionales y debilitando las identidades colectivas. Nótese que este mecanismo se separa del enfoque de crisis en el sentido de que el impacto de las crisis es sobre la representación, y el vínculo causal directo es entre desinstitucionalización de la representación y populismo.

Para Lazarte (1998), el populismo surge ante la falla del sistema de partidos como estructura de mediación, que se expresa en que la población percibe que no es representada por los partidos, quienes expresan demandas que responden a sus propios intereses más que los de los electores, y no está persuadida de que sus opiniones y demandas sean recogidas, canalizadas y transmitidas al sistema político. En esta línea, Owen y Dennis (1996) presentan evidencia de asociación entre el apoyo electoral a Ross Perot y el sostenimiento de opiniones antipartidistas, en las elecciones norteamericanas de 1992.

Desde una perspectiva comparada, Kaufman y Stallings (1992) traen a colación la inclusividad del sistema de partidos para explicar el populismo económico. Los sistemas en

los que uno o dos partidos multiclasistas han proporcionado mayorías electorales estables a las élites gubernamentales desincentivan la formación de coaliciones populistas, más probables cuando “los grupos del sector popular se han relacionado con partidos sistemáticamente excluidos de la competencia electoral y en los sistemas multipartidistas... donde las élites políticas rivales no pueden organizar mayorías electorales estables” (p. 32). Para los partidos excluidos y los partidos de clase trabajadora de base estrecha, la distribución permite movilizar apoyo para acceder a la escena electoral o consolidar el poder, mientras que, en los sistemas fragmentados, los partidos rivales apelan a los intereses distributivos de la clase trabajadora para fortalecer su posición electoral. En los sistemas con conjuntos electorales más estables, a los políticos populistas les resulta más difícil llegar al poder, pues compiten con partidos gobernantes que ya tienen un apoyo amplio de la clase trabajadora.

También recurriendo a la comparación sistemática, Weyland (1999), considera que una condición necesaria (pero no suficiente) del neopopulismo es la baja institucionalización de los partidos políticos, toda vez que los partidos fuertes imponen en las cuadros el recorrido de una carrera interna antes de ascender a los altos cargos (evitando el surgimiento de *outsiders*) y crean lealtades sólidas en el electorado. En presencia de partidos institucionalizados, sigue Weyland, la única posibilidad para que un líder populista alcance el poder es haciéndose de la candidatura de un partido también populista.³⁸ Cumplida esta condición, sostiene, se requiere adicionalmente que la campaña sea por una presidencia fuerte, centrándose así la atención en las características personales de los candidatos (lo que excluye evita el neo-populismo a los sistemas parlamentarios)³⁹, y una crisis inflacionaria que vuelque al electorado contra los partidos establecidos.

³⁸ Tomando en cuenta que Weyland se basa en el ejercicio de un liderazgo vertical para definir al populismo, me parece que todo partido que postula a un líder personalista es populista por definición, por lo que no queda claro a qué se refiere con partido populista en el contexto de un sistema de partidos institucionalizados. El problema no es menor, pues de no salvarse la condición necesaria queda muy debilitada. Los casos a los que se refiere son Acción Democrática (Venezuela) y el Partido Justicialista (Argentina), a los que atribuye una propensión a los liderazgos personalizados, lo que nos devuelve al mismo sitio, pues la particularidad de los liderazgos personalizados es que se ponen en el extremo opuesto a institucionalizados; por lo tanto, tendría que decirse que estos partidos nunca se han institucionalizado.

³⁹ Este criterio se debe a que los casos considerados por Weyland son países de América Latina y Europa del Este, distinguiendo los casos en donde candidatos neopopulistas obtuvieron el poder. De haber ampliado las unidades para incluir populistas no necesariamente neoliberales, así como países de Europa Occidental, habría encontrado notorios populismos en sistemas parlamentarios (Austria, países escandinavos).

Otra perspectiva apela al grado en que los partidos políticos operantes son claramente distinguibles entre sí. Para Mouffe (2005), el éxito de los partidos populistas de derecha se explica por el consenso alrededor de las políticas neoliberales, que afectó a los partidos socialdemócratas en forma tal que dejaron de representar una alternativa para los sectores populares. Mayer (2001: 132-6) presenta el mismo razonamiento, al plantear que la convergencia en el centro de los partidos de izquierda y derecha genera el espacio electoral para los partidos populistas de Europa occidental.⁴⁰ Si se atiende a que los partidos populistas de los países escandinavos surgieron en un contexto de consenso alrededor del Estado de bienestar (Popescu, 2001),⁴¹ es posible generalizar esta afirmación considerando al populismo como una función de la cercanía ideológica (en el eje izquierda-derecha) entre los partidos políticos dominantes.

En el nivel deductivo, Canovan (1999) y Hindess (1997) postulan que un régimen democrático genera la expectativa en la población de que los gobernantes cuidarán de sus intereses. Cuando el desempeño efectivo no satisface estas expectativas, se dan las condiciones para el éxito de quienes atribuyen la brecha a la entrega del gobierno a los intereses poderosos a costa del pueblo. Papadopoulos (2001) sugiere que el populismo encuentra cabida donde las promesas de campaña no se corresponden con las acciones efectivas de los gobiernos. Una línea lateral es la seguida por Laclau (2005), para quien la acumulación de demandas insatisfechas por el sistema institucional constituye la precondition del discurso populista. Nótese que en estas perspectivas no se toma en cuenta si existen restricciones materiales (estructurales o coyunturales) a lo que es posible atender por el sistema. Así, estos autores se acercan a quienes atribuyen a las crisis un factor causal preponderante en que asumen que los electores no consideran las restricciones que enfrentan los políticos para satisfacer demandas.

El siguiente grupo de investigadores parece tener en cuenta esta consideración, al menos implícitamente. Lucardie (2000: 81) señala que, más importante que la existencia objetiva

⁴⁰ Por ejemplo, el partido One Nation, de Australia, centra sus ataques en el consenso de los partidos Liberal y Conservador alrededor de la globalización económica (Mughan, Bean y McAllister, 2003). El Movimiento al Socialismo, para desacreditar a los partidos que se han alternado en el gobierno de Bolivia, se refiere a los tres como “partidos neoliberales”.

⁴¹ La convergencia en determinadas políticas, por parte de partidos de distinto signo ideológico, no es fenómeno propio del neoliberalismo: “La afirmación en el sentido de que los partidos no significan una diferencia fue generalizada y apasionada en los decenios de 1960 y 1970” (Przeworski, 2001: 26).

de una coyuntura de crisis es la percepción subjetiva de éstas y la creencia en que son responsabilidad de los gobiernos. Panizza (2005: 12) destaca la percepción de que la élite se sirve a sí misma sin rendir cuentas. En esta vertiente, en su estudio sobre los aspectos que llevaron al poder a Chávez, Coppedge (2005)⁴² destaca el hecho de que el deterioro económico produjo un efecto magnificado por la indignación por la indignación moral, pues se consideró que éste era innecesario, producido por la corrupción de la partidocracia. Al establecer los electores una conexión clara entre los partidos dominantes y la corrupción, tales partidos fueron castigados en favor de la candidatura populista. En un sentido muy similar, en un análisis multivariado de los determinantes del voto en las elecciones de Venezuela de 1998, Weyland (2003a) encontró que una evaluación negativa del desempeño económico del gobierno incrementó la probabilidad de voto por Chávez, pero este impacto viene mediado por la insatisfacción de los electores con la democracia. Por su parte, Webb (1996) encontró que los sentimientos de hostilidad y rechazo hacia los dos partidos dominantes del Reino Unido vienen condicionados por evaluaciones negativas sobre el desempeño económico y por la circunstancia de encontrarse desempleado.

En su trabajo sobre el populismo en los países escandinavos, Popescu (2001: 171-6) vincula este fenómeno con la crisis de la democracia. Plantea que dicha crisis se expresa en dificultades objetivas enfrentadas por el electorado (recesión, desempleo, pobreza, inmigración); una clase política incapaz de resolver en forma adecuada estas dificultades; las fallas en general de los partidos políticos por centrarse en la dimensión electoral de sus funciones y para mantener su tutela sobre los grupos de interés; la transferencia de competencias hacia las estructuras europeas, percibidas como ajenas a los intereses de la población, y una pérdida de legitimidad del sistema de representación, en la que se unen el recelo a los políticos profesionales con la colusión entre las élites y la omnipotencia del Estado benefactor, que afecta a la percepción de los partidos como mediadores genuinos.

La hipótesis que a continuación desarrollo se inserta en este último conjunto de investigaciones que explican el populismo a partir del desempeño de las instituciones

⁴² Para ser justos, Coppedge se pregunta sobre las causas del debilitamiento de la dimensión liberal de la democracia venezolana. Sin embargo, la secuencia de la cadena causal comienza con los factores que en seguida mencionaré y sigue con un deterioro de la democracia que corre paralelo al ascenso político de Chávez. No será difícil concederme que la misma causa pudo haber tenido en Venezuela los dos efectos, y el mismo Coppedge no es muy cuidadoso en separarlas (a pesar de que su trabajo es una lección de innovación metodológica al combinar métodos cualitativos y cuantitativos).

representativas. Sin embargo, encuentro que aún falta integrar los diversos hallazgos en un marco teórico que dé cuenta de las condiciones generales en las que el populismo tendrá un mayor éxito electoral. Este marco tiene que incluir, como mínimo, dos consideraciones: 1) cómo funciona la representación política, entendida como un mecanismo que relaciona a los electores con los gobernantes a partir de las elecciones competitivas, y 2) cómo impacta el diagnóstico discursivo que el populismo hace sobre la representación política. El populismo es, finalmente, una estrategia de persuasión (Panizza, 2005: 8; De la Torre, 1994a: 47). Aplica para el discurso populista en general lo que señalan Poguntke y Scarrow (1996: 258) sobre una de sus dimensiones: “El estudio de la política antipartidista es... el estudio de la interacción entre los argumentos de la élite y los sentimientos de las masas”. La relevancia de este último aspecto no ha sido destacada adecuadamente, pero puede ser ilustrada con un hallazgo reciente. Al predecir las probabilidades de voto por el partido populista One Nation, de Australia, Mughan, *et al.* (2003) encontraron que éstas eran sensiblemente mayores cuando los electores, de manera independiente, coincidían con la muy particular interpretación de los efectos de la globalización sobre el empleo que este partido proponía. Ahora bien, este caso se refiere a la más o menos idiosincrásica cuestión de las políticas públicas, que no es compartida por todos los partidos populistas. Pero por otra parte, Gidengil *et al.* (2001) reportan que los sentimientos antipartidistas son más claramente expresados por el electorado canadiense mediante el voto al Partido de la Reforma que mediante la abstención, lo que no deja de llamar la atención cuando se considera la naturaleza antipolítica del discurso de este partido. Si nos remitimos a la definición general del discurso populista, que atañe al funcionamiento efectivo de las instituciones representativas, es posible probar que este discurso estimulará el voto entre los electores que comparten, de forma independiente, el diagnóstico populista sobre las instituciones, lo que se refleja en los distintos niveles de confianza en las instituciones políticas.⁴³

⁴³ Esta convergencia independiente tiende a reproducir, si bien en términos menos dramáticos, el efecto liberador que produce entre los grupos dominados cuando alguien dice en voz alta lo que todos pensaban en silencio (Scott, 2000).

La representación política desde la perspectiva de las relaciones agente-principal

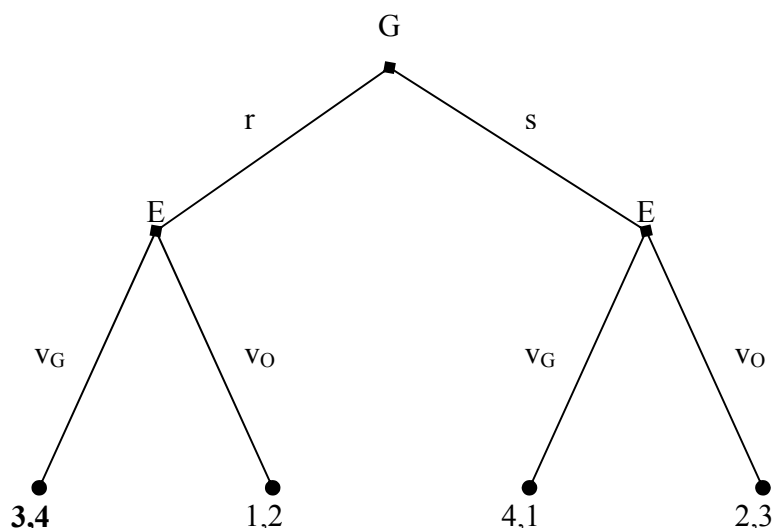
La representación política es una relación que vincula las acciones de los gobernantes con los deseos de los gobernados. Se supone que las instituciones de la democracia representativa, asumiendo que existen elecciones competitivas, garantizan que este vínculo sea al menos posible. De acuerdo con el tratamiento clásico del tema realizado por Pitkin (1985) y después por Sartori (1992a), cuando hay elecciones competitivas, los electores votan en función de los resultados en términos de desempeño gubernamental, evaluando si sus intereses fueron bien atendidos y no si el político que se presenta a reelección cumplió o no sus promesas de campaña. El político en cuestión tiene en todo momento la oportunidad de defraudar a sus electores sirviendo a sus propios intereses, pero como sabe que será juzgado por sus acciones, y que de ese juicio depende su permanencia en el cargo, intentará que su desempeño sea evaluado positivamente, utilizando la libertad que tiene en la toma de decisiones para que éstas sean lo más favorables a los intereses de los electores. Si efectivamente se comporta de esa forma, éstos lo reelegirán. A esto también se le conoce como “ley de las reacciones anticipadas”.

La figura 1 presenta la forma en que la rendición de cuentas produce representación vía la ley de las reacciones anticipadas. Supóngase que el gobernante (G) quiere ante todo ser reelecto. Sin embargo, prefiere hacerlo de una forma no representativa (s) a una representativa (r), sea porque es incompetente, porque está comprometido con una minoría poderosa, porque se le ocurrió una política que le interesa poner a prueba pero no está muy seguro de sus resultados o porque, en general, es mejor no tener obligaciones que tenerlas. Su peor escenario es comportarse en forma representativa y perder las elecciones, pues habrá invertido en representación sin obtener ningún beneficio.

Llegado el momento de la rendición de cuentas, el elector (E) evalúa las acciones del gobierno y decide si vota a favor del gobernante (V_G) o si lo cambia por su oponente (V_O). Lo peor que puede hacer es votar por una persona que no cuidó sus intereses, pero tampoco está en su interés castigar a alguien que gobernó bien. Ambas acciones debilitan el mecanismo de rendición de cuentas haciendo poco creíble la amenaza de sanción. Así que

votará en contra de un mal representante y, en el mejor de los escenarios, reelegirá a aquel que promovió sus intereses.

Figura 1. Representación por rendición de cuentas



El número de la izquierda representa el pago que obtiene G y el de la derecha el pago recibido por E. El resultado de equilibrio es el que aparece en negrita. Si G no actúa en forma representativa, E votará en su contra, pues el pago que obtiene por hacer creíble su amenaza de sanción es mayor que premiando a un mal representante. Si G gobierna favoreciendo los intereses de E, el pago que este último recibe por reelegirlo es el mayor posible, así que votará por él. Como G obtiene una mayor ganancia comportándose en forma representativa que haciendo lo contrario, dadas las acciones que puede anticipar en E, sus políticas serán tales que eviten la sanción retrospectiva y E lo reelegirá.

Nótese que la secuencia es importante⁴⁴. Como los electores tienen la última palabra, y su juicio es independiente y correcto, están capacitados para sancionar a un gobernante no representativo. El gobernante lo sabe y, por lo tanto, toma las medidas necesarias para evitar la sanción antes de que se produzca. Así, la misma potencialidad del conflicto hace

⁴⁴ Para probar la importancia de la secuencia, el lector interesado puede plantear el mismo árbol de decisiones de la figura 1 en forma estratégica. Si el representante y los electores deciden, *al mismo tiempo*, el contenido de las políticas y la orientación de su voto, respectivamente, la estrategia dominante del representante es actuar siempre en forma no representativa, y en vista de esto el elector hará bien en votar siempre en su contra.

que éste nunca se produzca, y el juicio de los representantes termina por coincidir con los deseos de los representados (Pitkin, 1985).

Lo expuesto hasta ahora da cuenta de lo que suponemos único en las instituciones representativas, aquello que lleva a los gobiernos a tomar sistemáticamente en cuenta los deseos de los gobernados. Sin embargo, en las democracias reales las desviaciones del comportamiento representativo son muchas, casi hasta hacernos dudar sobre qué es exactamente lo sistemático. Thomas Carothers (2002) utiliza la expresión “pluralismo fútil” para referirse a un subconjunto de las poliarquías que se distingue porque la alternancia sirve a los políticos pero no a los electores. Su descripción es muy vívida:

la política es ampliamente vista como un terreno rancio, corrupto, dominado por las élites, que entrega pocos bienes al país e inspira igualmente poco respeto. Y el Estado permanece persistentemente débil. La política económica a menudo es pobremente concebida y ejecutada, y el desempeño económico es frecuentemente malo o aún calamitoso. Las reformas sociales y políticas son similarmente tenues y los gobiernos sucesivos son incapaces de hacer progresos en buena parte de los grandes problemas que enfrenta el país, desde el crimen y la corrupción hasta la salud, la educación y el bienestar público en general (Carothers, 2002: 10-1).

Un camino fértil para ubicar los problemas que pueden impedir que la función representativa se cumpla consiste en plantear los términos de la relación entre el representado y el representante por analogía con el modelo principal-agente, en el que se asume que el elector (el principal) otorga su voto a un representante (el agente) “encomendándole” la tarea de maximizar su bienestar.

Una aplicación revisada del modelo principal-agente

El modelo principal-agente (MPA) surge de la economía para entender el origen de las relaciones jerárquicas en las empresas. Además de considerarse aplicable a la relación entre gerente y accionistas, el paciente y su médico o el abogado y su cliente, el modelo se ha aplicado de forma constante a la relación entre los electores y los políticos electos. Sin embargo, tal y como fue desarrollado, el MPA implica supuestos que, sin son llevados a sus últimas consecuencias, restringen su aplicabilidad a sólo algunos casos específicos, además de forzar inútilmente la naturaleza de las relaciones que pretende abordar. Para aclarar este

punto, divido los seis supuestos del MPA⁴⁵ en dos bloques: uno correspondiente a la etapa precontractual de las relaciones y, el otro, relativo a las condiciones que se tienen que dar para que los problemas surgidos del primer bloque tengan una solución mutuamente satisfactoria. Sostengo que los supuestos del primer bloque son plenamente aplicables a las relaciones entre electores y políticos en todas las condiciones imaginables, mientras que los del segundo sólo aplican a casos restringidos, y llevando demasiado lejos la analogía.

El primer bloque consiste en tres supuestos: 1) el impacto de las acciones del agente (en conjunto con una variable aleatoria) sobre el bienestar del principal; 2) la información asimétrica o la incapacidad del principal para observar las acciones del agente, las condiciones en las que se desempeña esta acción y las características personales del agente (disposición al trabajo, honestidad, talento), como no sea a un costo prohibitivo, limitándose a la observación de los resultados de dichas acciones, y 3) las acciones que elevan el bienestar del principal pueden ser costosas para el agente. La problemática expuesta por el modelo se deriva estrictamente de estos supuestos. Dicha problemática consiste en que, mientras que el bienestar del principal depende de las acciones del agente (supuesto 1), este último, en principio, puede tener la motivación (supuesto 2) y los incentivos (supuesto 3) para no realizar las acciones necesarias para maximizar el bienestar de aquél. La posibilidad de elusión (*shirking*) por parte del agente, en contra de los intereses del principal, determina los dos grandes riesgos que enfrenta el principal: la selección adversa y el riesgo moral.

Todos los potenciales agentes pretenden poseer las aptitudes y la motivación para desempeñar bien el trabajo de incrementar el bienestar del principal, pero éste no puede observar directamente las motivaciones reales de los postulantes –ignora si pertenecen al tipo elusivo o al tipo responsable. Por ello, recurre a indicadores aproximados de la productividad del postulante, como son la educación y los antecedentes laborales y asigna un salario que refleja las variaciones en la productividad de los individuos que nominalmente califican para el puesto. La expresión “selección adversa” se refiere al hecho de que este salario sólo será atractivo para quienes se encuentran infracalificados, por lo que el empleador contratará desproporcionadamente a postulantes del tipo elusivo. Por otro

⁴⁵ Para las seis características definitorias del modelo principal-agente, sigo a Miller (2005: 205-8), complementando con Kiewiet y McCubbins (1991: cap. 2).

lado, una vez realizada la contratación, el empleador desconoce la contribución específica del trabajador sobre el producto, lo que incentiva a éste a la elusión, problema caracterizado con la etiqueta “riesgo moral”. Estos problemas destacados por el modelo son los que enfrenta el empleador (por extensión, el principal) mediante el diseño de contratos que hacen que el agente vea en su propio interés atender en forma adecuada los intereses de su principal (Moe, 1984).

Los tres siguientes supuestos del MPA sirven para explicar las soluciones contractuales en las empresas frente a los problemas de selección adversa y riesgo moral. Podrían plantearse en los siguientes términos: cuando 4) el principal tiene la iniciativa y 5) conoce la función de utilidad del agente, entonces 6) ofrece un contrato al agente que resulta óptimo para ambos, con un carácter de “tómalo o déjalo”, y éste acepta (habría que añadir el supuesto de múltiples personas compitiendo por obtener la agencia). Se espera, en estas condiciones, que el contrato contenga una serie de incentivos condicionados a los resultados. Como existen factores que influyen en los resultados y que son ajenos al control del agente, los cuales son además transferidos a éste, el contrato incorpora dicho factor en la forma de un bono de compensación para el agente (nótese que una adecuada supervisión haría innecesario este bono, toda vez que el principal podría observar el comportamiento del agente y reducir el riesgo moral).

El MPA ha sido llevado al análisis político, con la totalidad de sus supuestos, con particular éxito al caso de los Estados Unidos (Key, 1966). Parece ser que el sistema de elecciones en circunscripciones uninominales con posibilidad de reelección y un sistema bipartidista asemeja a una situación en la que los electores ofrecen un contrato de desempeño a sus representantes y los premian con la reelección si satisfacen el criterio una vez concluido su período. Esta interacción es la sintetizada con el término *accountability* (rendición de cuentas). Sin embargo, el supuesto de que son los electores quienes ofrecen un contrato, que es aceptado por los políticos, no parece muy realista (Ferejohn, 1999), y apelar a él implica que el MPA se aplica únicamente a naciones con características institucionales muy específicas.

En cambio, si asumimos que la situación normal es que el elector se enfrenta a situaciones y arreglos institucionales que le vienen dados, podemos retomar del MPA los aspectos que

realmente aplican a las relaciones políticas y en donde, con propiedad, debe terminar la analogía. Nótese que los numerales 1 a 3 del modelo no requieren de ninguna iniciativa por parte del elector y parecen aplicar plenamente a las relaciones de éste con sus representantes políticos. Como las acciones que éstos realizan tienen incidencia sobre el bienestar del elector (si bien no controlan todas las variables que podrían afectarlo), se justifica un interés por parte de este último en que tomen las acciones adecuadas; sin embargo, el ambiente en que realiza dichas acciones es relativamente opaco para el ciudadano común, quien además tiene todos los motivos para suponer que, si el funcionario electo carece de las motivaciones adecuadas, y en ausencia de incentivos en contra, puede usar el poder del que dispone para mejorar de su propio bienestar, aún a costa del bienestar de sus electores (Kiewiet y McCubbins, 1991: 26).

Nótese que no se generaliza sobre el comportamiento de los políticos. Si son del tipo elusivo aprovecharán su puesto para beneficiarse; pero pueden ser del tipo que, aún sin ser supervisado, hará su mejor esfuerzo por servir a los intereses de sus electores. La posibilidad de variación en el carácter es necesaria teóricamente en el sentido de que, si todos los políticos son iguales, no existen problemas de selección adversa. Empíricamente, Thorbecke y Matzelevich (1995), presentan evidencia mostrando la variabilidad del comportamiento de los políticos, lo que depende de características de su personalidad que les son idiosincrásicas. Para el elector que desconoce esas características personales, el dilema consiste en elegir, de la mejor forma posible, para incrementar la proporción de políticos correspondientes al tipo que no elude.

La presencia de estos elementos, entonces, justifica el recurso analítico al modelo (siempre que hacerlo conduzca a problemas interesantes). Como decía, los problemas de selección adversa y riesgo moral se derivan de estos supuestos precontractuales. Antes de atender a los incentivos de los políticos para satisfacer los requisitos de desempeño que le imponen los electores, los cuales son tan variados como modalidades institucionales existen, el primer bloque de supuestos del MPA es suficiente para presumir que en todas las elecciones democráticas existen problemas de selección adversa y riesgo moral.

Propongo que a esto debemos añadir que el elector común es concebido como incapaz de ofrecer un contrato o cualquier cosa análoga a sus políticos. Como individuo, las

decisiones, los programas partidistas, el comportamiento de los políticos y las instituciones, le son dados y él debe juzgar si sus intereses son atendidos debidamente por quienes se dicen sus representantes.

En ciertas condiciones específicas, dada la generalización de cierto comportamiento electoral y la existencia de determinadas instituciones, la situación de los electores es como si hubiera propuesto un contrato a sus políticos y éstos los cumplieran. Sólo en estas condiciones tendremos la operación efectiva del modelo de rendición de cuentas (Powell, 2000: 10-2). En el resto de los casos, no podremos suponer que para los electores el mecanismo funciona como si dispusiera de iniciativa contractual (lo que no implica que los problemas de selección adversa y riesgo moral desaparecen). Sin embargo, argumentaré que incluso en el mejor de los casos existe un grado de incertidumbre suficiente para que los electores, en última instancia, tengan que recurrir a la confianza para considerar que está siendo debidamente representado.

Selección adversa y riesgo moral en la representación política

La discusión subsiguiente parte de un supuesto sobre la naturaleza de la competencia electoral en las democracias. Si la política en general, según una definición clásica, asigna valores a la sociedad (Easton, 1969), en la democracia las fuerzas que compiten entre sí exponen valores (operacionalizados en políticas públicas) que convienen al menos a una mayoría de la sociedad. Aunque desconozco si existe fundamento empírico para este supuesto, me parece en sí mismo suficientemente plausible. Los valores que finalmente se impondrán tienen fuerza de aplicación obligatoria para todo el territorio de la nación de que se trate, pero el efecto de cada grupo de valores sobre el bienestar de las distintas personas no es igual. Si cada una de las fuerzas en competencia busca obtener una ventaja sobre el resto, es necesario que en su propuesta convenza a la mayor parte posible de los electores de que los valores específicos que ella promueve mejorarán su bienestar.⁴⁶

⁴⁶ En este punto no cabe añadir “o al menos le serán indiferentes”, pues esto deja espacio a que otra fuerza política ofrezca valores con efectos positivos, haciéndola preferible a la que ofrece valores sin efectos sobre el bienestar.

La función de bienestar del elector está conformada por dos términos: 1) su ingreso y 2) sus ideas relativas a lo que es bueno para la sociedad; i.e., sus valores morales.⁴⁷ Es posible, e incluso haríamos bien en esperar que sea lo usual, que ambos términos concurren en el mismo conjunto de propuestas de políticas, que el elector considere que lo que es bueno para él en términos de su ingreso también es bueno para la sociedad en su conjunto, pero no se debe descartar la posibilidad de que electores concretos piensen que determinadas medidas que lo afectarían negativamente tendrían efectos sociales que le parecen deseables, viéndose en la necesidad de elegir. Por esto, conviene mantener ambos términos separados analíticamente. El elector individual tiene dos formas de maximizar su bienestar (Powell, 2000; Manin, Przeworski y Stokes, 1999b): 1) votando por la persona que, en su opinión, propone las medidas que mejor promueven su bienestar, recurriendo a una evaluación comparativa de las propuestas, o 2) recurriendo a la amenaza de sólo votar por la persona que ocupa un puesto de autoridad si, para el momento de la elección, “entrega” al elector un nivel determinado *ex ante* de bienestar. Los criterios son, respectivamente, prospectivo y retrospectivo, correspondiendo este último al mecanismo contractual de la rendición de cuentas.

La incapacidad de observar directamente las acciones que llevan a cabo los políticos electos y las condiciones exógenas que, en conjunto con dichas acciones, determinan el bienestar de los electores, introduce un elemento de incertidumbre que da la oportunidad para la elusión bajo cualquiera de los criterios de votación que utilice el elector. Si un político es electo ofreciendo determinado programa, ni el mantenimiento de la oferta en sí ni el cambio de rumbo son garantía de que se está maximizando el bienestar de una mayoría, pues se desconoce el estado del mundo que indica la política adecuada a seguir; el nivel bienestar en el momento de la elección tampoco es buen parámetro, pues si éste alcanza el estándar preestablecido no sabemos si se pudo haber hecho más y, si es inferior, se desconoce si las condiciones fueron tales que no se pudo haber alcanzado más (Manin, Przeworski y Stokes, 1999a). Nótese, sobre este último aspecto, que aún bajo las condiciones institucionales más favorables, la incertidumbre hace posible que el modelo de rendición de cuentas falle: los electores pueden negarle la reelección a buenos gobernantes u otorgársela a malos gobernantes, sin poder decir con alguna certeza que tomaron la decisión correcta.

⁴⁷ Aquí abandono el lenguaje eastoniano y restrinjo el uso de la palabra “valores” a esta acepción.

Asimismo, el modelo de rendición de cuentas da por sentado que el cuerpo electoral es un agente unificado que, como si fuera un solo contratante, utiliza el mismo criterio para evaluar al gobernante. Sin embargo, por un lado, el nivel de bienestar obtenido depende de las diversas utilidades que cada elector asigna a un ingreso determinado. Esto en sí mismo no es un problema, pues sólo conduce a que el nivel de bienestar que el gobernante entrega resulta de la agregación de las funciones individuales de los electores, si bien a algunos no les parecerá suficiente. El problema surge cuando tomamos en cuenta los dos términos de la función de bienestar del elector y la posibilidad de que no sean consistentes entre sí. Brennan y Lomasky (1993) prueban formalmente que, cuando se descuenta lo suficiente el efecto esperado sobre el ingreso proveniente de una plataforma o de un gobierno que repite, habrá un grupo de electores que votarán por decisiones de políticas que ellos mismos no tomarían porque afectan negativamente sus intereses materiales, y todo esto sin violar ningún principio de racionalidad. Piénsese, por ejemplo, en un profesional que está a favor de una mayor igualdad en el mundo. Para manifestar este deseo vota por el partido de izquierda. Este partido gana y le descuenta en impuestos un 40% de su salario que sólo es compensado parcialmente por el crecimiento económico subsiguiente. Aunque en su bienestar el saldo es negativo, si el valor expresivo de su voto es superior al valor que otorga al bienestar, su utilidad sigue siendo positiva. Como señala Manin (1998: 168-85), la soberanía del elector implica que éste es libre de recurrir a cualquier criterio al tomar su decisión, y, aunque las condiciones institucionales faciliten el uso del voto retrospectivo, nada lo obliga a recurrir a las consideraciones retrospectivas. El carácter colectivo de la agencia dificulta que el cuerpo electoral llegue a un acuerdo único respecto de las preferencias sobre las acciones del agente (Kiewiet y McCubbins, 1991: 26-7), y las diferencias en el peso otorgado a las dimensiones instrumental y expresiva del bienestar debilita, en última instancia, ambos criterios para incentivar al agente.

Por tanto, la incertidumbre y la inexistencia de un elector unificado hacen imposible asegurar que se cumple la expectativa de que, inducidos por el voto retrospectivo, los gobernantes hacen todo lo que está en sus manos para maximizar el bienestar de los electores.

Asumiendo explícitamente las dificultades de esta naturaleza, Fearon (1999) propone un modelo en el que el elector se centra en seleccionar prospectivamente gobiernos, tomando

en cuenta que los políticos varían entre sí en sus motivaciones, integridad y competencias. En el modelo de Fearon, los electores utilizan señales diversas que les permitan distinguir entre el carácter de los políticos, señales que incluyen consideraciones de prospectivas tanto como retrospectivas: medidas del bienestar de los electores, para inferencias sobre el tipo del político en funciones; programas promovidos y medidas apoyadas, afiliación partidista; información sobre el carácter personal del candidato (historia de vida, forma de hablar, lenguaje corporal, sentido del humor, escándalos, grupos a los que pertenece) (p. 59).⁴⁸ De esta perspectiva, para efectos de la selección de un buen gobernante, toda información que sirva como señal es pertinente, y esto incluye el récord de desempeño de quienes hayan ejercido cargos públicos, entre otros factores. En este caso, el programa y demás atributos de quien o quienes se presentan desde la oposición son comparados con el desempeño pasado del gobernante (utilizado como señal de qué tan bien gobernará en el próximo período). Pero este mecanismo, muestra Fearon, convierte el problema del riesgo moral en uno de selección adversa: si la supervisión de las acciones del gobernante es inadecuada, la probabilidad de que sea electo un candidato con los atributos deseados tiende a ser igual.

Los electores no necesariamente tienen que renunciar al uso de criterios retrospectivos cuando las condiciones institucionales no son las adecuadas. Por ejemplo, cuando un representante se encuentra en su último período, se da por descontado que tiene todos los incentivos para eludir. Sin embargo, con anterioridad los electores pueden adoptar la regla de castigar y premiar a la etiqueta partidista por las acciones de la persona, generando una “agencia indirecta” entre los correligionarios de la persona en funciones interesados por ser electos para el próximo período, quienes podrían recurrir a los instrumentos de presión a su alcance para forzar a éste a minimizar la elusión. Por supuesto, los electores que emprendieran este curso de acción añaden a la incertidumbre y la heterogeneidad del principal el debilitamiento del mecanismo originado en que el control electoral es indirecto. Adicionalmente, aún si este criterio reduce los problemas de riesgo moral, lo hace a costa de incrementar los de selección adversa. La coalición temporal de políticos interesados en la sucesión puede estar formada por personas con motivaciones tanto favorables como desfavorables al bienestar del elector, y cualquiera de ellos podría, posteriormente, ser premiado por el buen desempeño del gobernante en turno.

⁴⁸ De manera menos explícita, Alesina *et al.* (1999) siguen un camino similar.

Esta última observación puede ser considerada como un caso específico de un problema general de selección adversa que representan las etiquetas partidistas. Dichas etiquetas, a la manera de las marcas comerciales (Kiewiet y McCubbins, 1991: 39-42; Aldrich, 1995: 45-50; Mainwaring y Scully, 1995b; Jones y Hudson, 1998), resumen para el elector información variada sobre el contenido de sus propuestas, la calidad de sus políticas y el carácter de sus integrantes. Para un elector racionalmente ignorante, la etiqueta de los partidos le ahorra la búsqueda de información sobre las personas específicas que compiten bajo tales etiquetas. Sin embargo, la generalización de la inferencia a partir de la etiqueta, también le ahorra a los candidatos la necesidad de invertir en competencia y reputación personales, y como resultado se eleva a la alza la disposición promedio a la elusión.

En conclusión, el MPA, una vez descompuesto, es aplicable a todas las situaciones en las que existe una competencia democrática por el poder político y, en esa medida, señala el riesgo de elusión por parte de quien accedió al poder con la promesa de maximizar el bienestar del mayor número posible de electores. Como vimos, la literatura que aborda las relaciones de representación política desde esta perspectiva propone que el elector puede usar su voto para obligar al representante a maximizar el bienestar o para seleccionar al candidato que parezca más propenso a hacerlo.

Aunque desconozco de estudios sistemáticos al respecto, parece convincente la impresión de que buena parte de las campañas versan sobre las características personales de los candidatos, que por esta vía intentan enviar señales de que son del tipo confiable o creíble. Asimismo, existe evidencia que indica que las etiquetas partidistas son buenos predictores de las políticas que seguirá el gobierno. Esto encontraron Johnson y Crisp (2003) en América Latina; y Boix (1996) y Alesina *et al.* (1999) en los países desarrollados. Las plataformas de campaña también son indicativas en el mismo sentido (Stokes 2001b). Finalmente, también existen pruebas de que existe un voto retrospectivo especialmente sensible al crecimiento económico (Stokes 2001b) y a las variaciones en el nivel de empleo (Stokes 2001a; Cheibub y Przeworski, 1999). Estos hallazgos empíricos son consistentes con la idea de que los criterios retrospectivos y prospectivos son usados por los electores —y que éstos tienen buenos motivos para recurrir a ellos.

Sin embargo, estos mecanismos no disminuyen la incertidumbre producida por la inobservabilidad de acciones, condiciones y carácter. Si el MAP, aplicado a la representación política, busca las condiciones en las que se garantiza que el bienestar de la mayoría de la población será efectivamente maximizado, me parece que el esfuerzo será inútil. Bajo esta perspectiva, los electores jamás tendrán la certidumbre necesaria para sentirse representados. Sin embargo, en el siguiente apartado argumentaré que, como experiencia subjetiva de la acción de las instituciones democráticas, los electores se sentirán más o menos representados en la medida en que sustituyan la incertidumbre con confianza o desconfianza.

La confianza en las instituciones

La función de la confianza ha sido explorada en términos de sus efectos sobre las posibilidades de cooperación en situaciones que asemejan a dilemas del prisionero (Hardin, 1982) y dilemas de acción colectiva (Olson, 1992). Muchas veces los términos del debate son confusos, y en ocasiones no queda claro si el término es un sustituto para “capital social” (Putnam et al., 1996) ni en quién o en qué se confía al entablar relaciones cooperativas (v.gr. Durston, 2000), si bien el trabajo de Crawford y Ostrom (1995) resulta enormemente esclarecedor. Por otro lado, los efectos y los determinantes de la confianza en las instituciones políticas son temas de amplio estudio, a tal grado que se pregunta sobre el grado de confianza en diversas instituciones en proyectos de gran escala como la Encuesta Mundial de Valores (Inglehart et al., 2004). Sin embargo, se ha hecho poco por definir a qué nos referimos con semejante expresión, de forma tal que difícilmente se puede decir que tiene un estatus teórico definido.

Para los efectos de las relaciones entre representante y representado, tal como se definió en el párrafo de arriba, la confianza es un estado subjetivo del elector que tiene invariablemente como objeto a la persona de un político determinado. Esto es, sólo se puede confiar en personas, ya que son éstas las que toman las decisiones que podrían afectarnos. En los términos expresados por Hardin (1999: 26), la confianza de una persona en otra es una expectativa racional sobre las acciones futuras de otra persona, fundamentada en motivos: “Decir que yo confío en ti con respecto a algún asunto significa que tengo

razones para esperar que *tú actúes en mi interés* con respecto a ese asunto porque tienes buenas razones para hacerlo así, *razones que están* [a su vez] *ancladas en mi interés*... que tengo razones para esperar que tú actúes, por tus propias razones, *como mi agente* con respecto al asunto relevante”. La sensación subjetiva de confianza en una persona reconoce implícitamente el riesgo de que la expectativa sea frustrada con las acciones futuras, en perjuicio de quien confía, de ahí que la confianza es una creencia que es mejor expresada en términos de probabilidad asignada a que otra persona realice o no una acción determinada (Offe, 1999; Dasgupta, 2000; Luhmann, 2000).

Aquí conviene acotar el ámbito de la confianza al que me refiero. Por un lado, la confianza es con respecto a personas a las que no se conoce directamente: por lo general, el representado hace o no objeto de su confianza a representantes sobre los que no sabe nada por conocimiento directo (ni siquiera a través de alguien con quien tenga relación directa). Esto excluye los mecanismos de confianza contruidos en comunidades pequeñas y por relaciones densas (Durstun, 2000), en los que la posibilidad de supervisión directa juega un papel muy importante (*vid.* Ostrom, 2000), o bien la interacción continua otorga bases suficientes para estimar si una persona es confiable o no (Axelrod, 1984). Por otro lado, aunque el objeto de la confianza o desconfianza es una persona desconocida, ésta sigue siendo una persona específica en la medida en que ocupa un *rol* del que se esperan comportamientos determinados. Esto quiere decir que la confianza referida a los representantes no equivale a la confianza generalizada o capital social, que en principio consiste en confiar prácticamente en cualquiera. Esta última puede ser una apoyo para la primera, pero siguen siendo cosas distintas.

El estado subjetivo de confianza puede variar por la fuente de donde proviene. Éstas pueden ser: las acciones observadas en la persona; los valores compartidos en la subcultura a la que pertenece la persona, y las reglas formales que norman el comportamiento de esa persona. Por mantener el uso estándar, califico cada tipo de confianza por su origen, siempre manteniendo presente que, en última instancia, se confía en personas. Así, tenemos:

- Confianza personal. Este tipo de confianza proviene de la observación que se tiene de la conducta pasada de una persona y que constituye su reputación (Hardin, 1982; Ostrom

y Ahn, 2003; Nahmad et al., 2004). La reputación de una persona nos indica la probabilidad de que ésta sea honesta y de que cumpla sus promesas y amenazas (Elster, 1997), aún si es en su interés hacer lo contrario. La reputación de un político nos indica la probabilidad de que sea del *tipo* (en el sentido de la teoría de juegos) que cumple sus promesas de campaña, de manera competente y con honestidad (Fearon, 1999), lo que puede ser muy útil para distinguir entre dos políticos que ofrecen exactamente lo mismo. La reputación es usada como para minimizar los problemas de selección adversa. Aunque puede llevar a una confianza tal que el principal decida no supervisar su desempeño, de todas formas exige el desembolso de costos de información sobre antecedentes personales.

- Confianza valorativa o “categórica”. Las personas que pertenecen a un mismo grupo son propensas a compartir los mismos valores. De esta forma, si A y B pertenecen al mismo grupo, A puede confiar en B aunque no lo conozca, pues estima que comparten las mismas preferencias (Dunleavy, 1988), o bien, porque B sufriría un costo por la exclusión del subgrupo si obrara en contra de las normas compartidas (Hardin, 1995). La lógica consiste en que al conocer la tradición, cultura y valores de un grupo particular, puedo generalizar la confianza a todos aquellos que pertenecen a ese grupo, particularmente (pero no exclusivamente) si pertenezco a dicho grupo y me identifico con él (Offe, 1999: 63-5). En las relaciones entre representante y representado, los miembros y simpatizantes de un mismo partido pueden ser vistos como pertenecientes a una misma subcultura (Adler-Lomnitz y Melnick, 2000), de tal forma que los representados otorgan su confianza a los representantes del partido con el que se identifican –pero exclusivamente a éste, porque al promover los valores del partido de manera automática promueven sus valores. Es posible por esto que, para los electores con preferencias partidistas definidas, la distancia de sus propias preferencias sobre las políticas con respecto a las políticas efectivamente puestas en práctica sea una medida de desconfianza (Alesina y Wacziarg, 2000).
- Confianza en las instituciones. A puede confiar en B, aunque no sepa nada de él ni comparta sus preferencias partidistas porque B actúa bajo reglas tales que le impondrán un costo si no se promueve los intereses de A. La operación de las instituciones se traduce en confianza en un extraño en la medida en que se cuente que los agentes de

monitoreo y sanción realizarán su trabajo (Crawford y Ostrom, 1995) o, en términos más generales, con que B es sujeto de una estructura de incentivos que lo lleva actuar en el mejor interés de A (Hardin, 1999: 28) Nótese que, cuando se cuenta con que un conjunto de reglas funciona de esta forma, la identidad de la persona y su adscripción partidista dejan de adquirir importancia. Si los mecanismos funcionan, los ciudadanos pueden contar con que, en promedio, los distintos agentes que componen la clase política ven en su propio interés el comportarse de una forma representativa, al margen de sus intereses partidistas y de su propensión personal al comportamiento inadecuado. La desconfianza en las instituciones indica precisamente lo contrario: una clase política depredadora que se sirve de su puesto, a costa de los intereses de los ciudadanos, sin importar quienes hayan sido favorecidos por el voto popular.

Una tradición de los estudios sobre la confianza interpersonal, originada en el planteamiento seminal de Putnam *et al.* (1996), toma a la confianza en las instituciones políticas como un elemento de la cultura de un país que define el vínculo de la ciudadanía con sus gobernantes (Catterberg y Moreno, 2003: 18; también Mateo Díaz y Zovatto, 2005: 27). La implicación de esta forma de categorización es que la confianza hacia las instituciones sólo presentaría cambios a largo plazo, en la medida en que la cultura se fuese modificando con el tiempo, de tal forma que durante períodos de tiempo prolongado la relación de confianza de los electores hacia sus instituciones estaría predefinida y sin responder a los cambios contextuales de corto plazo. Mishler y Rose (2001), sometieron explícitamente estas implicaciones a prueba en los países de Europa del Este, confrontándolas con la sensibilidad de la confianza a variables referidas a la evaluación del desempeño político y económico de las instituciones, encontrando que la capacidad explicativa de éstas es muy superior a la proporcionada por las variables referidas a la cultura. Otras investigaciones han confirmado la relación entre confianza y desempeño de las instituciones en América Latina (Moisés y De Oliveira, 2005) y Estados Unidos (Hetherington, 1998; Chandley, Rudolph y Rahn, 2000).

Al respecto, Newton (2001: 203) ha argumentado que la confianza es “menos una expresión de un rasgo interno e invariante de la personalidad que una respuesta de los individuos al cambiante mundo externo que los rodea. Las respuestas a la pregunta sobre la confianza [en las encuestas] nos informan no sobre la disposición de la gente a ser confiada

o desconfiada, sino sobre cómo evalúa la confiabilidad del mundo en que vive”. Y añade: “La baja confianza sugiere que se piensa que algo en el sistema político... está funcionando mal. Puede ser que el desempeño es pobre o que las expectativas son muy altas, pero de cualquier forma la baja confianza nos dice que algo anda mal” (Newton, 2001, p. 205).

Cuando los ciudadanos se forman juicios sobre la confiabilidad de sus instituciones, tienen que llegar a la conclusión (o rechazarla) de que los políticos de todo tipo, al margen de sus preferencias políticas y personales, hacen su mejor esfuerzo para otorgar los mejores resultados posibles, dadas las condiciones. Esto implica que los juicios sobre confianza dependen de su evaluación de dos variables distintas. Por un lado, los ciudadanos evalúan el desempeño como resultados; es decir, hasta qué punto la influencia de las decisiones políticas sobre el bienestar propio está a la altura de las expectativas o de un mínimo indispensable. Por el otro, una evaluación del comportamiento de los políticos, que es tomado como señal de su disposición a hacer su mejor esfuerzo, sean las condiciones exógenas buenas o malas. La evaluación del comportamiento es, así, un atajo frente a la incertidumbre sobre las condiciones. Si, dada la información disponible, el elector llega a la conclusión de que los políticos son honestos, interesados en su bienestar y sinceros, es posible que su confianza en las instituciones sea alta aún si los resultados son inferiores a sus expectativas, pues tenderá a atribuir los malos resultados a malas condiciones exógenas. En cambio, la percepción de desinterés, corrupción y cinismo por parte de los políticos llevará a concluir que, si los resultados son buenos, posiblemente pudieron haber sido mejores.⁴⁹

La separación del comportamiento de los políticos con respecto a los resultados está empíricamente validada en el hallazgo de la influencia sobre la confianza política de factores como la percepción de que el país es gobernado en interés del pueblo frente al gobernado por unos cuantos intereses (Catterberg y Moreno, 2003), la corrupción (Mishler y Rose, 2001; Moisés y De Oliveira, 2005), la sensibilidad del gobierno a la influencia ciudadana (Mishler y Rose, 2001) y los escándalos políticos (Hetherington, 1998; Chanley, Rudolph y Rahn, 2000; Pharr, 2000). Todos estos resultados indican que es posible esperar

⁴⁹ “Los ciudadanos pueden tolerar la corrupción si la economía está creciendo con rapidez, y pueden tolerar una contracción si creen que sus representantes han hecho todo lo posible para evitarla o pararla. Pero cuando la contracción coincide con la corrupción conocida, las consecuencias políticas son magnificadas” (Coppedge, 2005: 316).

que los electores juzguen a sus gobernantes en función de parámetros de comportamiento con un efecto sobre la confianza independiente de los resultados que logren entregar.⁵⁰

Ahora corresponde mostrar la relación, para efectos de la representación, entre evaluaciones retrospectivas, voto expresivo y confianza. Retomo el modelo de Albert Hirschman (1977) para distinguir entre los electores “leales” (con adscripción partidista) y los “retrospectivos”. Las diferentes reacciones de estos electores a distintos desempeños de políticas públicas están expresadas en la gráfica 2.1. Sobre el eje horizontal, se presenta la proporción de electores por el partido en el gobierno. El eje vertical representa el “contenido representativo” de las políticas públicas actuales o calidad de la representación (Q). Esta calidad de la representación es una función de dos variables: el desempeño o resultados de la gestión, operacionalizado como un nivel determinado en el ingreso de los electores (y) y del comportamiento del gobernante efectivamente orientado hacia el bienestar del representado (c). Nótese que, al hacer del bienestar una función del comportamiento, estoy descartando como centro de interés las implicaciones morales de “mal” comportamiento. Por el contrario, presumo que cuando un político, por ejemplo, incurre en actos de corrupción, los intereses de los ciudadanos se ven perjudicados. En otras palabras, el mal comportamiento, más allá de sus implicaciones éticas, es elusión.⁵¹

La curva de “decisiones” representa la función de utilidad de los políticos. Se asume que todo esfuerzo por representar “bien” constituye un costo de oportunidad (en términos de dinero que no roban, ocio perdido, esfuerzos de negociación para producir políticas de calidad e incluso de sacrificio de ideales cuando éstos son abiertamente antieconómicos). Así, otorgarán el nivel de representación mínimo que maximice la probabilidad de ser reelegidos. Cuando pueden dar por descontado una probabilidad de obtener el voto, darán niveles de representación mínimos; a la inversa, si dicha probabilidad es muy baja, se esforzarán por producir mejores políticas.

⁵⁰ Para una demostración de la influencia de ambos elementos sobre las variaciones en los niveles de confianza en el público mexicano, véase Salazar y Temkin (2006).

⁵¹ Por supuesto, tal comportamiento es tan opaco para el elector como para el investigador, por lo que es muy difícil someter a prueba empírica esta presunción. Encuentro, en este sentido, muy estimulante la investigación de Della Porta (2000), quien argumenta en forma convincente que la corrupción afecta al bienestar material de los representados reduciendo la eficiencia y la calidad de los servicios públicos, presentando evidencia de investigaciones judiciales realizadas tras los escándalos en Italia.

Lo determinante es qué tanto peso otorgan los electores al desempeño. Las curvas correspondientes a los electores “leales” y a los “retrospectivos” muestran que la sensibilidad (valor de la pendiente) de los primeros al desempeño es mucho menor que la de los segundos. Los leales otorgan mayores niveles de aprobación electoral con menores niveles de atención a sus intereses que los retrospectivos.⁵²

Esto nos da dos resultados de equilibrio: si todos los electores fueran retrospectivos, el nivel de representación obtenido sería el punto A, mientras que el punto B corresponde a una situación en la que todos los electores tienen una identidad partidista y, desde la perspectiva del político, el nivel de representación que otorga es menor a cambio de un apoyo electoral más elevado. Dependiendo de las proporciones en que se distribuyan ambos grupos de electores, existe una curva de electores agregados que pasará por en medio de las señaladas, resultando en un equilibrio C, en el que habrá un nivel de representación Q_C , tal que $Q_A \geq Q_C \geq Q_B$.

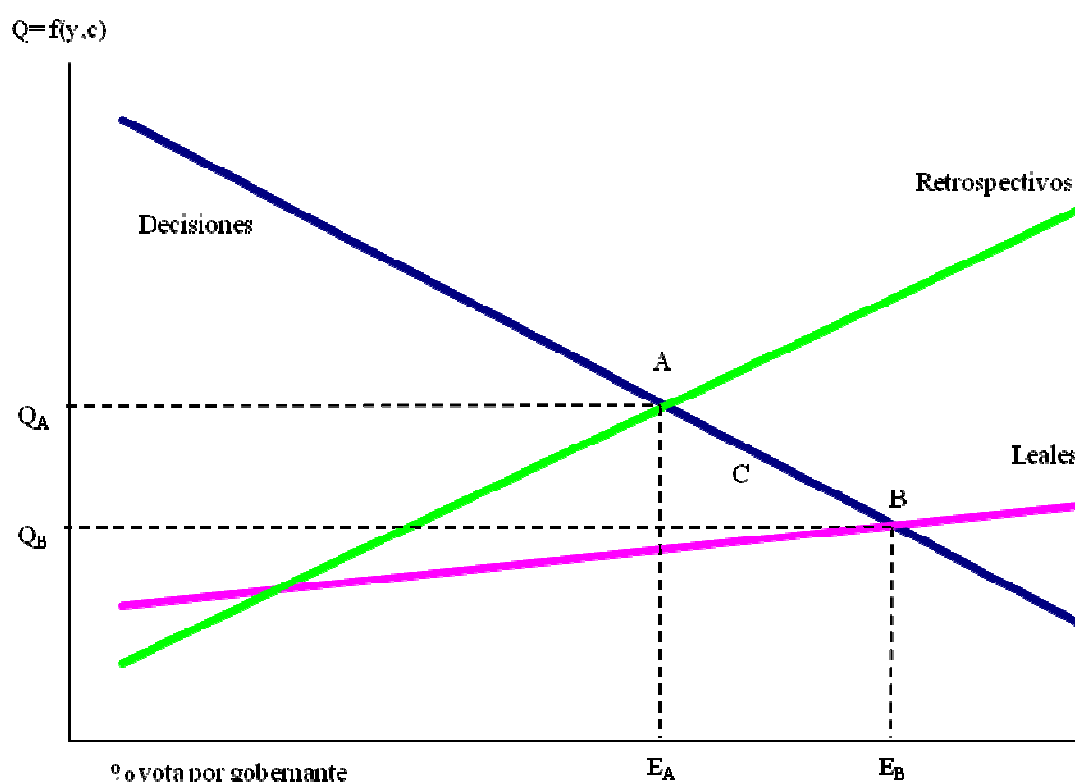
Una consecuencia del modelo que presento es, entonces, que los electores leales siempre están mejor que los electores retrospectivos. Si bien éstos ayudan a elevar la representación efectivamente obtenida, al menos un grupo de ellos tendrá incentivos para abstenerse.

Dados los problemas de selección adversa y riesgo moral, el elector desconoce hasta qué punto su bienestar pudo o no ser mayor del que observa. El elector puede relativamente fácil asignar un valor a y , pero no sabe realmente si el gobernante hizo todo lo que estaba en sus manos para maximizar este valor (i.e., desconoce el valor de c , que siendo mayor, eleva el punto donde la curva de decisiones se cruza con la de los electores). Ignora si su bienestar podría ser superior (de haber tenido un mejor agente) o si pudo haber sido inferior (de haber tenido un peor agente). La idea que se haga el elector sobre su situación actual en comparación con la situación alternativa hipotética (si está por encima o por debajo lo que podría estar) depende de la confianza que tenga en el funcionamiento de las instituciones.

⁵² En el modelo simplificado que presento, lo único relevante es que la pendiente de las rectas correspondientes a los electores prospectivos es mayor que la de los partidistas, sin mayores especificaciones, en un momento dado. El mismo modelo podría utilizarse para ilustrar patrones en el tiempo. Por ejemplo, Deschouwer (1996) explica la creciente desconfianza hacia los partidos políticos en las democracias desarrolladas como una función de cambios sociales de largo plazo que han hecho a los electores cada más atentos a los resultados del gobierno que al contenido de los programas partidistas. En el modelo de la gráfica 1, esto querría decir no sólo que la recta agregada tiende a comportarse más como la correspondiente a los electores retrospectivos, sino que con el tiempo su pendiente es mayor (o que adquiere la forma de una función cuadrática).

La confianza es, a su vez, una función de la información disponible sobre el nivel actual de bienestar y el comportamiento de los políticos.⁵³ El elector sabe que, si los políticos actúan en forma representativa, *tendría* que observar mayores niveles en el bienestar medio y un comportamiento honesto por parte de los políticos. Por supuesto, como los riesgos de elusión siguen presentes, la percepción de que alguno o ambos términos está presente no incrementa su certeza, pero sí su confianza.

Gráfica 2.1. Representación obtenida bajo criterios prospectivos y retrospectivos de voto



Es necesario precisar ahora que nuestro elector no está juzgando a un gobierno en particular, sino los resultados de la operación de un conjunto de instituciones. Así, por ejemplo, puede considerar que las políticas en vigor favorecen en poco la dimensión

⁵³ Contra esta idea, Hardin (1999: 29-30) sostiene que el concepto mismo de la confianza en las instituciones carece de sentido, porque el común de la gente carece de toda la información que es necesario tener para hacerse una idea de las características de las personas que están en el gobierno y de las múltiples disposiciones institucionales que estructuran los incentivos de estas personas. Por el contrario, mi postura es que es precisamente esta falta de información lo que lleva al estado subjetivo de confianza o desconfianza. Si el elector supiera todo lo que hay que saber, su estado sería el de certeza, frente al que la confianza es irrelevante. Véase Offe (1999) para un tratamiento similar, en el que la posibilidad de elusión es suficiente para eliminar cualquier referencia a la confianza.

material de su función de bienestar particular o que otras políticas promoverían mejor los valores correspondientes a la dimensión expresiva. Sin embargo, aún así puede considerar que las instituciones operan maximizando el bienestar de la mayoría en la medida en que percibe buenos resultados y buen comportamiento. Por lo tanto, el elector de nuestro ejemplo se limitará a votar en contra del gobernante o del candidato del partido en el gobierno, pero sin perder la confianza en las instituciones políticas.

En consecuencia, sostengo que la confianza es una función de la percepción de los resultados o efectos de las políticas públicas y de la conducta de los funcionarios en el desempeño de sus funciones. La sensación subjetiva de confianza es en buena medida ajena a la voluntad del sujeto, dada la información que dispone. Cuando dicho sujeto tiene la iniciativa contractual que supone el segundo bloque de los supuestos del MPA, y le es indispensable que la persona que elija para relacionarse goce de su confianza, es posible que invierta en recabar información de fuentes certeras. En cambio, en el caso del elector individual, para quien las decisiones, las instituciones y la ausencia del principal unificado le vienen dados, la sensación de confianza estará sustentada en la información que tiene a la mano, sin importar su naturaleza. Esto es importante porque, cuando no existe una correlación alta entre los datos objetivos de bienestar y comportamiento, los últimos tendrán mayor relevancia para efectos de la confianza.

Posiblemente una mejora en los niveles de bienestar material de la mayoría requiere de incrementos en las tasas de crecimiento económico, pero a iguales tasas de crecimiento existen variaciones en la proporción de beneficiarios. Por lo tanto, lo relevante es que el individuo observe mejoras en el bienestar, en mayor medida que el dato objetivo (Rose, Mishler y Haerpfer, 1998: 164-5; Putnam, Pahrr y Diamond, 2000: 23-5). En el caso del comportamiento, precisamente el más delicado debido a su opacidad, no existe ni siquiera algo parecido a un dato objetivo para hacernos una idea del carácter de la clase política en general. Sin embargo, el elector dispone de datos dispersos para hacer inferencias, los cuales pueden provenir de su trato directo con autoridades menores, de los relatos que otros hacen de este trato, del grado de interés que los políticos aparentan tener por las necesidades ciudadanas y, de manera muy destacada, los escándalos de corrupción.

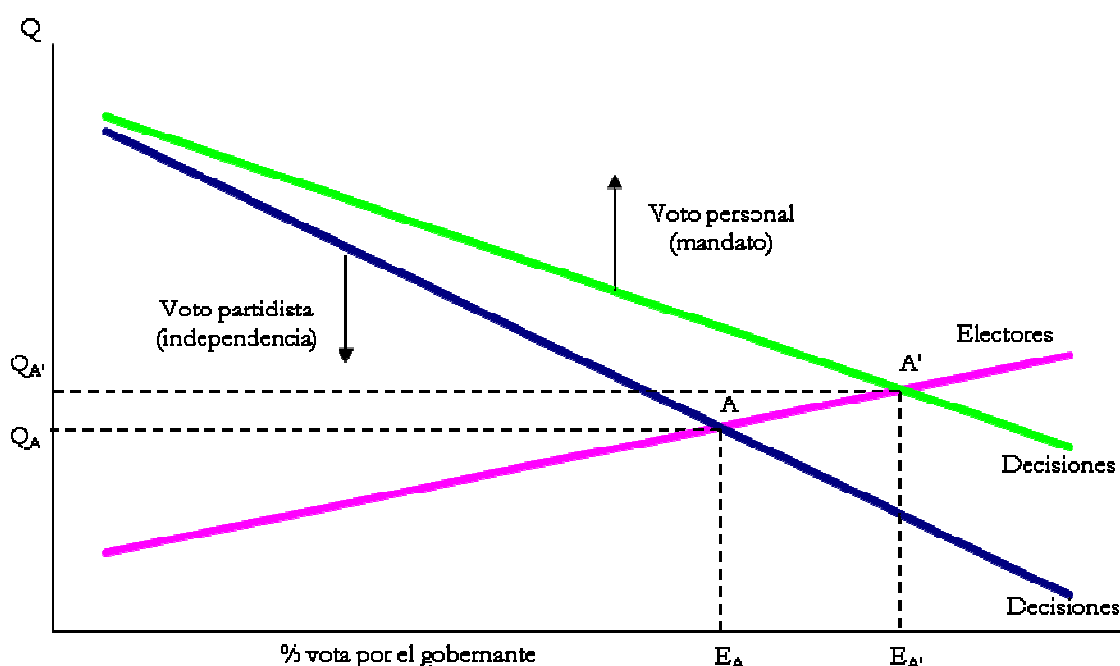
Ahora es necesario considerar posibles variaciones en la curva de oferta correspondiente en las decisiones. En particular, los mismos políticos (al margen de sus preferencias personales) pueden ser más o menos sensibles a las variaciones en el apoyo electoral. Esto es una función de las reglas que definen la integración de los espacios representativos. En particular: ¿de quién es principal el político en funciones? La grafica 5.2 muestra las posibles variaciones de sensibilidad, asumiendo una curva de electores agregados.

Existen dos condiciones que determinan los cambios en la pendiente de la curva. La primera es el carácter del político en cuestión: la mayor o menor disposición que personalmente tiene el gobernante a maximizar el bienestar de sus electores. Pero adicionalmente, la literatura sobre los sistemas electorales ha destacado que las reglas de integración de los órganos representativos, además de condicionar el grado de proporcionalidad con que se distribuyen los escaños, determinan también el grado en que los políticos electos se sienten atados a sus electores o, por el contrario, responden a los intereses del liderazgo partidista. En general, el político electo depende, para llegar al puesto, del liderazgo partidista o de los electores que votan por su desempeño como representante. Desde una perspectiva (Shugart 2001, y Shugart y Haggard, 2001), que tiende a ser la dominante, se entiende que los políticos se verán más orientados a sus electores cuando compiten por el voto mayoritario en circunscripciones uninominales (asumiendo posibilidad de reelección), pues la responsabilidad personal es clara y la asignación de premios y castigos se facilita. A esta perspectiva se añade el argumento de Cox y MacCubbins (2001) y de Moreno *et al.* (2003) según el cual lo determinante en este sentido es si las disposiciones impulsan la competencia intrapartidista, toda vez que la necesidad de distinguirse con respecto a los miembros de su propio partido obliga a los candidatos a invertir más en los aspectos personales de su oferta. Así, según este razonamiento, los sistemas de representación proporcional con listas abiertas (en los que los electores inciden en el orden en que los miembros de una lista de partido obtienen escaños) y el voto único no transferible (en donde los partidos presentan listas y los electores votan por uno de sus integrantes, siendo electos los candidatos con más votos, al margen de su etiqueta partidista), presentan mayores incentivos para responder a los electores. Comoquiera que sea, ambas líneas de razonamiento coinciden en señalar que cuando el liderazgo partidista domina la selección de candidaturas y determina la probabilidad de

cada candidato de obtener el escaño (v.gr., sistemas de representación proporcional con listas cerradas, en distritos con magnitud grande), el diputado sigue sus instrucciones e ignora los deseos de sus electores.

En síntesis. Dados los problemas irresolubles de incertidumbre que enfrenta el elector, el grado en que éste pueda considerar que las instituciones democráticas funcionan de forma tal que maximizan el bienestar de la sociedad, equivale a la confianza que sienta con respecto a sus mecanismos. La confianza, a su vez, es una función de las percepciones sobre los resultados de las decisiones políticas y el comportamiento de los políticos a cargo de estas decisiones. Existen, adicionalmente, factores institucionales que pueden inducir a los políticos a mejorar sus decisiones, lo que presuntamente se traducirá en comportamientos observables que podrían mejorar los niveles de confianza.

Gráfica 5.2. Incentivos a la representación de sistemas electorales



Modelo de decisión electoral

Supóngase un elector que tiene que elegir entre dar su voto al partido en el gobierno (G) y darlo a un partido de oposición (O). En ambos casos, obtiene un determinado valor por

expresar su coincidencia ideológica o con los valores que promueve el partido. Por otro lado, espera una utilidad determinada de las propuestas que provienen de cada plataforma (i.e., dada su situación, la propuesta le produce un incremento proporcional determinado). Para el caso del partido en el gobierno, los electores pueden tomar en cuenta el desempeño durante el período que culmina, al que prestarán mayor o menor atención al calcular su utilidad.⁵⁴ Para el caso del partido de oposición, existe una asimetría de información debida a que ese criterio no puede estar presente (*Alesina et al.*, 1999), por lo que únicamente puede juzgar, a partir de sus características personales y antecedentes, la probabilidad de que el candidato cumpla las promesas que plantea en su plataforma.

Así, la utilidad de votar por el partido en el gobierno es

$$U_G = E_G + Pr_G + \beta(\Delta y). \quad (1)$$

La de votar por un partido de oposición es

$$U_O = E_O + Pr_O. \quad (2)$$

En ambas:

E_i es la utilidad expresiva de votar por el partido i ;

Pr_i es la utilidad individual que se espera obtener como efecto de la aplicación del programa ofrecido por i , y

Δy es el diferencial proporcional en el ingreso del elector observado durante el período gubernamental corriente.

En el caso del partido de oposición, la oferta Pr_O debe ser ponderada por una probabilidad p de que el candidato sea del *tipo* que cumple con lo que ofrece. Los valores posibles de p van de 0 a 1. Si el valor es de 0, el elector considera que la persona que compite, dados sus antecedentes y características personales, con certeza eludirá maximizar su bienestar; cuando el valor es de 1, considera que la persona que compite, dados sus antecedentes y características, con certeza maximizará su bienestar.

⁵⁴ Véase Nannestad y Paldam (1994) para una revisión de las investigaciones que verifican la hipótesis según la cual el voto por el partido en el gobierno (o el gobernante que se somete a reelección) es una función, al menos parcialmente, de su desempeño económico.

Las unidades de Pr_i y Δy son claramente monetarias. La unidad de E_i no lo es. Sin embargo, se puede justificar su inclusión en la ecuación si se razona de la siguiente forma.⁵⁵ Supóngase un elector para el que $E_i > 0$, en unidades expresivas. A éste se le aproxima un político con recursos ilimitados y de un partido político distinto al preferido por el elector. El político le ofrece una cantidad de dinero a cambio de su voto por él. Si el elector rechaza la propuesta, el político ofrece una cantidad adicional, prosiguiendo de esta forma cada vez que el elector se niega al intercambio. Existe una cantidad s en la que el elector será indiferente entre votar por el partido de su preferencia y votar por el partido del político que le ofrece el trato. Así, asumiendo que un elector prefiere, expresivamente, al partido i sobre el partido $-i$ ($E_i > E_{-i}$), ausencia de consideraciones retrospectivas ($\beta = 0$) e indiferencia con respecto al efecto de los programas sobre el ingreso personal ($Pr_i = Pr_{-i}$), el valor de s será

$$s = E_i - E_{-i}, \quad (3)$$

y para el valor expresivo de votar por un partido podemos establecer que

$$E_i \equiv s + E_{-i}. \quad (4)$$

Al plantear esta equivalencia, no pretendo exclusivamente ganar en consistencia formal.⁵⁶ La conversión del valor expresivo en unidades monetarias nos permite incorporar sistemáticamente el peso de las consideraciones de este tipo cuando el elector compara utilidades antes de decidir su voto. En particular, aceptamos la posibilidad de que un elector sensible al desempeño pasado, que observa un incremento en su bienestar durante la gestión del gobierno y que considera que la plataforma del partido en el gobierno le proporcionaría un mayor bienestar que la ofrecida por el partido de oposición ($Pr_G > Pr_O$), de todas formas vote por el partido de oposición si se cumple

$$E_O - E_G > (Pr_G - Pr_O) + \beta(\Delta y). \quad (5)$$

Podemos esperar que los electores que tienen una identificación fuerte con algún partido (i.e., un elevado valor de indiferencia) sean relativamente inmunes a los efectos esperados de las plataformas políticas, a las consideraciones retrospectivas y a la confiabilidad de los

⁵⁵ La siguiente formulación proviene de una sugerencia hecha por Juan Carlos Salazar Elena en comunicación personal.

⁵⁶ Para una exposición crítica de la aplicación de este procedimiento a valores políticos, en particular en lo que se refiere al supuesto subyacente de que “todo tiene un precio”, véase Riker (1982: 95-97).

candidatos (*vid. infra*), sin necesidad de que éstas estén ausentes. Más aún, en sociedades muy partidistas, es posible esperar que las consideraciones expresivas basten para explicar la mayor parte de las decisiones electorales.

Ahora vayamos un paso más adelante y supongamos que se presentan a elecciones dos partidos de oposición. Uno es “tradicional” (OT) en el sentido de que plantea un programa distinto al del gobierno (supóngase $Pr_{OT} > Pr_G$). El otro es “populista” (OP). El candidato del partido populista también presenta su propio programa (Pr_{OP}) que a su vez debe ser sometido a la misma ponderación probabilística que el otro candidato opositor (expesada con q). Cuando el candidato de la oposición tradicional o el populista son del tipo que no cumple, la utilidad esperada de la oferta (expresiva y material) disminuye.

En principio, la credibilidad de cada candidato es independiente de la calidad del otro; esto es, los valores de q y p no están correlacionados. Sin embargo, recordemos que un aspecto importante del discurso populista es que los políticos pertenecientes a la élite, por definición tienen intereses opuestos a los del pueblo, por lo que sus promesas de producir incrementos en el bienestar son necesariamente falsas; por el contrario, sigue el argumento, un candidato de entre el pueblo por definición también comparte los mismos intereses y valores, por lo que sus promesas de mejora en el bienestar son necesariamente creíbles. De esta forma, si el candidato de la oposición populista dice la verdad, el candidato de la oposición tradicional necesariamente está mintiendo; i.e., $q = 1-p$ y, por lo tanto $1-q = p$.

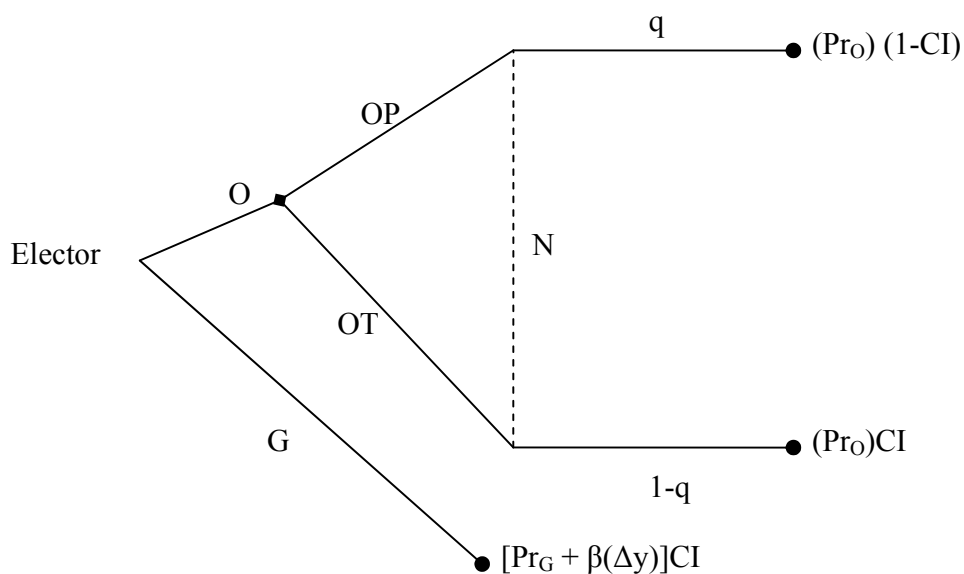
Adicionalmente, por implicación, la democracia no es un mecanismo suficiente para corregir las tendencias a la elusión compartidas por todos los miembros de la clase política tradicional. Gane el gobierno o gane la oposición, los electores deben descontar de su utilidad esperada una porción considerable que será apropiada indebidamente aprovechando la opacidad de las acciones de los gobernantes. Este argumento, para el elector, se compara con sus propias creencias sobre la operación de las instituciones democráticas. Por lo tanto, las propuestas de la oposición tradicional y del partido en el gobierno vienen descontadas por un factor CI indicativo de la confianza en que las instituciones políticas operan en beneficio de los electores. Los valores posibles de CI van de 0 a 1. Cuando el valor es de 0, el elector entiende que no importa el origen partidista ni las características personales de quienes ocupan la autoridad política, siempre habrá elusión

por parte de los gobernantes; cuando el valor es de 1, considera que no importa el origen partidista ni el carácter personal del político en el gobierno, siempre se hace lo posible para maximizar el bienestar.

Ahora tenemos los elementos suficientes para exponer el modelo de decisión electoral con candidatos populistas. Con el fin de simplificar, supóngase a un elector apartidista y que toma en cuenta consideraciones retrospectivas; esto es que $E = 0$ y $0 < \beta \leq 1$. El efecto sobre el bienestar de los programas ofrecidos por los candidatos tiene también un valor mayor que 0 y hasta 1. Supóngase también que el candidato populista ofrece un programa cuyos efectos sobre el bienestar del elector son exactamente iguales a los del programa ofrecido por el candidato de la oposición tradicional: $Pr_{OP} = Pr_{OT} = Pr_O > Pr_G$. Los pagos que obtiene votando por cada candidato están reflejados en la figura 2.1.

El elector puede votar por el partido en el gobierno y terminar el juego o votar por uno de los dos partidos de oposición. Desconoce cuál de los candidatos de oposición dice la verdad sobre sus intenciones una vez que llega al gobierno, de tal forma que se modela esta incertidumbre como una jugada en la que participa la naturaleza (N). El pago correspondiente a los partidos del gobierno y a la oposición tradicional es mayor a mayores niveles de confianza en las instituciones, los que a su vez reducen este pago al voto por el partido de la oposición populista.

Figura 2.1



Para determinar la decisión que tomará el elector, procedemos por inducción hacia atrás. El primer paso para él consiste en determinar qué candidato prefiere entre los que se oponen al gobierno. El elector es indiferente entre votar por OP y votar por OT cuando:

$$q * Pr_o * (1 - CI) = (1 - q) * Pr_o * CI, \quad (6)$$

que se resuelve

$$q = CI \quad (7)$$

Es decir, el elector obtiene el mismo pago votando por cualquiera de las alternativas opositoras cuando la credibilidad del candidato populista es igual a su nivel de confianza en las instituciones políticas. Esto conduce a la siguiente regla de decisión 1:

$$\text{Elector} = \begin{cases} \text{OT si } q < CI \\ \text{OP si } q > CI \end{cases}$$

El elector optará por el candidato de la oposición tradicional cuando el nivel de confianza en las instituciones sea superior al nivel de credibilidad en el candidato populista; mientras que preferirá a este último cuando su credibilidad personal esté por encima de la confianza que siente hacia las instituciones. El siguiente paso consiste en comparar la utilidad esperada de votar por cualquiera de los partidos de oposición, según los niveles relativos de q y CI , con la utilidad de votar por el partido en el gobierno. Consideremos las dos posibilidades.

Cuando $q < CI$, el elector prefiere la oposición tradicional a la populista y compara la utilidad de votar por ésta con la de votar por el partido en el gobierno. Es indiferente cuando

$$Pr_o = Pr_g + \beta(\Delta y).^{57} \quad (8)$$

⁵⁷ Al compartir ambos términos el factor CI , se anula. La regla de decisión previa implica que el elector ya decidió que el candidato opositor es del *tipo* sincero. Esto se refleja al plantear el lado izquierdo de la ecuación en términos de utilidad espera, ponderando Pr_o con q y $1-q$; q es anulada.

Supóngase que los programas y la sensibilidad del elector al desempeño (β) son valores fijos. Resolviendo por Δy tenemos:

$$\Delta y = \frac{Pr_o - Pr_G}{\beta}. \quad (9)$$

La ecuación indica que, cuando el gobierno enfrenta a la oposición tradicional, será reelecto en la medida en que haya sido capaz de producir un incremento en el ingreso que compense la distancia entre el efecto sobre el bienestar del programa ofrecido por la oposición y el efecto que se espera de su propio programa. El incremento en el ingreso requerido será mayor a medida que el voto del elector sea menos sensible a las variaciones en el ingreso.

Cuando $q > CI$, el elector prefiere al partido de oposición populista sobre el tradicional y compara la utilidad de votar por el primero con la de votar por el partido del gobierno. Es indiferente cuando

$$(1 - CI)Pr_o = CI[Pr_G + \beta(\Delta y)]. \quad (10)$$

Resolviendo por Δy tenemos:

$$\Delta y = \left(\frac{Pr_o}{CI * \beta} \right) - \left(\frac{Pr_o - Pr_G}{\beta} \right). \quad (11)$$

Llamemos $\Delta y'$ al valor de indiferencia para el incremento proporcional en el ingreso durante el gobierno, con los subíndices T y P cuando se compara a los partidos de oposición tradicional y populista, y llamemos Δy_R al valor observado efectivamente. De esto surge la regla de decisión 2:

$$\text{Elector} = \begin{cases} \text{OT si } \Delta y_R < \Delta y'_T \text{ y } q < CI \\ \text{OP si } \Delta y_R < \Delta y'_P \text{ y } q > CI \\ \text{G si } \Delta y_R > \Delta y' \text{ para cualquier valor de } q \text{ y } CI \end{cases}$$

Dado el efecto de añadir el primer término al segundo lado de la igualdad, tenemos que siempre $\Delta y'_P > \Delta y'_T$. La estática comparada muestra que los mayores niveles de

sensibilidad al desempeño observado y de confianza en las instituciones reducen esta distancia, pero la desigualdad se sostiene para todos los valores posibles de estos parámetros. Lo importante a destacar de la ecuación 11 es que el gobierno, si quiere ser reelecto, debe pagar al elector una compensación por el riesgo de que, en su percepción, la clase política incurra en elusión (expresado en altos niveles de desconfianza).

El efecto favorable de la desconfianza en las instituciones sobre el voto favorable al populismo es producto del grado en que el discurso populista es efectivamente persuasivo; i.e., coincide con las evaluaciones independientes de los electores sobre el desempeño de las instituciones representativas. Algunos hallazgos empíricos se ajustan a esta conclusión deductiva. Se ha encontrado que, en Canadá, niveles reducidos de confianza en las instituciones políticas favorecen a partidos con este tipo de discurso (Bélanger y Nadeau, 2005) y en Estados Unidos (Hetherington, 1999). Los hallazgos de Weyland (2003a) y Coppedge (2005) sobre el caso venezolano, si bien no evalúan directamente la confianza, tienden también destacar algunos aproximados como factores explicativos. Otro tanto puede decirse de investigaciones sobre Japón (Ōtake, 2000) e Italia (Bardi, 1996).

La generalización de la desconfianza entre los electores bien puede ser creada por el mismo discurso de candidatos populistas, pero una estrategia de este tipo bien puede ser de eficacia muy limitada. Así, en 1992 y 1993, se dio una discusión muy intensa sobre la desafección con los partidos políticos en la República Federal Alemana, desatada por declaraciones del presidente von Weizsäcker. Sin embargo, esta discusión se desarrolló fundamentalmente en los medios de comunicación, sin que reflejara el ánimo del electorado o lo influyera, de tal forma que no tuvo mayores consecuencias electorales (Scarrow, 1996). Por tanto, es posible que los niveles de confianza en las instituciones sea un factor exógeno con respecto a la estrategia de los candidatos populistas, condicionado no tanto por el discurso como por las idas que por su parte se hacen los ciudadanos del desempeño de las instituciones.

Efectos sobre la calidad de la representación

Ahora supongamos que el gobernante se presenta a reelección por su partido, quiere repetir en el puesto y decide anticipadamente sobre el valor de Δy_R . Siendo así, su mejor respuesta a cada relación entre q y CI es $\Delta y_R > \Delta y'$. Para simplificar los equilibrios, supóngase que

Δy es una variable discreta y que el gobernante descuenta el esfuerzo que le produce cada unidad marginal de incremento. Así, el gobernante asignará en cualquiera de los dos casos una $\Delta y_R = \Delta y' + .1$ y será reelecto. Como $\Delta y'_P > \Delta y'_T$, el elector está mejor cuando $q > CI$ en comparación a cuando $q < CI$.

Yendo un paso más adelante, supóngase que los resultados económicos son en parte una función del desempeño gubernamental, pero también de las condiciones externas que escapan al control del gobernante. Supóngase también que cuando las condiciones son buenas, con una probabilidad de r , el gobernante puede garantizar $\Delta y'_T + 0.1 \geq \Delta y_R \leq \Delta y'_P + 0.1$. Cuando las condiciones son malas, con una probabilidad de $1-r$, sólo puede garantizar $\Delta y_R \leq \Delta y'_T + 0.1$. Descuenta un factor $\pi(\Delta y_R)$ al esfuerzo necesario para lograr el incremento observado. Puede decidir entre esforzarse por obtenerlo ($\pi > 0$) o no hacerlo ($\pi = 0$). Si es reelecto obtiene un pago de w , y si no es reelecto obtiene un pago de 0. Finalmente, conoce la relación relativa entre q y CI , pero no la puede manipular.

Así, el siguiente cuadro muestra los pagos (gobernante, elector) para $q < CI$.

		Condiciones	
		Buenas (r)	Malas ($1-r$)
G	$\pi > 0$	$w - \pi(\Delta y_R), \Delta y'_T + 0.1$	$w - \pi'(\Delta y_R), \Delta y'_T + 0.1$
	$\pi = 0$	$0, \Delta y_R < \Delta y'_T + 0.1$	$0, \Delta y_R < \Delta y'_T + 0.1$

en donde $0 < \pi(\Delta y_R) < w$.

Para todo valor de r , el gobierno está mejor esforzándose que no esforzándose, pues puede obtener el incremento en el ingreso necesario para ganar las elecciones. Los electores reciben con certeza el mejor pago gracias a esta estrategia dominante. La diferencia en este juego consiste en el monto del pago que recibe el gobernante. Si asumimos, realistamente, que alcanzar el mismo nivel de incremento económico requiere un mayor esfuerzo cuando las condiciones son malas que cuando las condiciones son buenas ($\pi' > \pi$), y que el gobernante minimiza costos, entonces, cuando las condiciones son buenas elegirá π y no π' . Para que el gobernante sea indiferente entre las condiciones se requiere que

$$r[w - \pi(\Delta y_R)] = (1-r)[w - \pi'(\Delta y_R)]. \quad (12)$$

Resolviendo tenemos que el exceso obtenido por el gobernante para distintas condiciones viene dado por

$$\pi' - \pi = \frac{w}{r(\Delta y_R)}, \quad (13)$$

de tal forma que quien se beneficia de los mayores valores de r no es el elector, sino el gobernante que sólo hace “lo mejor que puede, dadas las condiciones” cuando las condiciones son malas.

Para $q > CI$, el siguiente cuadro muestra los pagos correspondientes.

		Condiciones	
		Buenas (r)	Malas ($1-r$)
G	$\pi > 0$	$w - \pi'(\Delta y_R), \Delta y'_P + 0.1$	$-\pi'(\Delta y_R), \Delta y'_T + 0.1$
	$\pi = 0$	$0, \Delta y_R < \Delta y'_T + 0.1$	$0, \Delta y_R < \Delta y'_T + 0.1$

en donde $0 < \pi(\Delta y_R) < w$.

En este caso, el gobernante no tiene estrategia dominante. Está mejor esforzándose si las condiciones son buenas, pues el esfuerzo invertido en incrementar el ingreso es acompañado del triunfo, si bien en este caso requiere que el esfuerzo sea el mejor (π'). Pero si las condiciones son malas, está mejor no esforzándose que esforzándose, pues ni con su mejor esfuerzo (que es un costo) podrá obtener el triunfo. El valor de r que lo deja indiferente entre enfrentar condiciones buenas o malas proviene de la ecuación

$$r[w - \pi'(\Delta y_R)] = (1-r)[\pi'(\Delta y_R)]; \quad (14)$$

entonces,

$$r = \frac{\pi'(\Delta y_R)}{w}. \quad (15)$$

Si tomamos como fijos los valores del esfuerzo requerido para lograr el nivel de crecimiento máximo dadas las condiciones y el pago como satisfacción por ser reelecto, tenemos, entonces, que un mayor valor de Δy_R hace que el gobernante sea menos propenso a esforzarse para obtener ese valor y prefiera, en cambio, dejar a los gobernados con un pago inferior incluso al que obtendrían con un candidato opositor tradicional.

Comentarios

A continuación, resumo las principales implicaciones que se desprenden del modelo de decisión presentado en este capítulo:

- La presencia de un candidato populista se ve favorecida por la falta de credibilidad de la clase política “tradicional” y la falta de confianza en la eficacia de las instituciones políticas (ecuación 7 y regla de decisión 1).
- El populismo, con su sola presencia en la competencia electoral y sin necesidad de ser gobierno, incide en el ciclo económico: el incremento en el bienestar que se pide al gobierno para votar por él es mayor entre quienes prefieren al candidato de la oposición populista que entre quienes prefieren al opositor tradicional (ecuaciones 9 y 11). Por lo tanto, si el gobierno controla todas las variables que determinan el crecimiento (y le interesa la reelección), el populismo producirá incrementos en el bienestar de los electores superiores a los que tendrían si favorecieran a la oposición tradicional, pero no llegará al poder.
- Si existen factores exógenos que impactan el crecimiento, los electores están mejor prefiriendo a un populista que a un opositor tradicional solamente si las condiciones son buenas: no sólo incrementan su bienestar comparativamente, sino que los gobernantes siempre hacen su mejor esfuerzo. Sin embargo, aún cumpliéndose este requisito, los gobernantes retienen un excedente que no transfieren a los electores, que puede ser visto como compensación por su esfuerzo (ecuación 13).
- Si las condiciones son malas, los electores están mejor prefiriendo a un opositor tradicional que a un populista. Si las condiciones son malas y, por la relación entre confianza en las instituciones y la credibilidad de la clase política, los electores prefieren al candidato populista sobre el tradicional, el populista será probablemente electo porque el gobernante invertirá el esfuerzo necesario para obtener los mejores resultados posibles, ya que ni aún así conseguirá su elección (ecuación 15). Por lo tanto los resultados en términos de bienestar serán los peores de todos los escenarios considerados.

Finalizo mencionando un último aspecto a considerar en el análisis empírico. Hasta el momento, sólo he mencionado las condiciones de éxito de las candidaturas y partidos populistas. Así, una situación en la que se cumple la condición $q > CI$ puede generar en un político determinado la expectativa razonable de que, si entrara en la competencia, tendría buenas oportunidades. Este aspecto no es menor, puesto que en general los sistemas de partidos estables generan expectativas tan bajas que pueden bastar como para disuadir al potencial competidor de todo intento (Zielinski, 2002). Sin embargo, como demuestra Hug (2000), esto es muy distinto a evaluar las condiciones institucionales de entrada de los partidos. Suponiendo que un político anticipa condiciones relativamente receptivas a un discurso populista, las condiciones de entrada pueden definir si presentará efectivamente su candidatura y, en este caso, si preferirá utilizar una etiqueta partidista nueva o lo hará bajo un nuevo partido. Las condiciones institucionales tienen dos vertientes: 1. Las reglas que norman el registro y la financiación de los partidos: los requerimientos de petición (firmas, asambleas), el costo del registro, la existencia y el monto de financiamiento público y el sistema de electoral prevaleciente (Hug, 2000; Lucardie, 2000). 2. La mayor o menor competencia interna de los partidos establecidos, que influye en la decisión de los liderazgos emergente sobre la viabilidad de impulsar su candidatura, desde dentro, frente a hacerlo con una nueva etiqueta (Cox, 1997).

En este capítulo pretendí desarrollar un modelo que explicara al populismo de la forma más exhaustiva posible, utilizando la mayor cantidad de variables que, a mi juicio, tuviesen alguna relevancia en el marco de una teoría más amplia sobre la representación política y la incertidumbre del elector. Asimismo, a la vez que hice del populismo una variable dependiente de la credibilidad de los políticos profesionales y la confianza en las instituciones, desarrollé a partir del modelo, las consecuencias del populismo sobre la representación política, asumiendo variaciones en la capacidad de los gobernantes para anticiparse a los efectos del voto retrospectivo. Por último, mencioné algunos aspectos institucionales que se deben tomar en cuenta para la “entrada de candidatos populistas” a la competencia electoral.

Lamentablemente, existen limitaciones de datos y tiempo que me impiden evaluar empíricamente la totalidad de estas transformaciones. En los siguientes capítulos me ocuparé de los aspectos que considero más importantes. En el capítulo III, presentaré

evidencia en favor de las afirmaciones que hice sobre la dependencia de la confianza en las instituciones con respecto al ingreso y el comportamiento observado en los gobernantes. En el capítulo IV, analizo la relación entre la confianza en las instituciones y el voto individual en favor de candidatos populistas. El capítulo V, finalmente, retoma el aspecto de la anticipación, por parte de la clase política, a los efectos electorales de la desconfianza en las instituciones políticas. Sin embargo, en los casos observados los esfuerzos de los dirigentes no se encaminaron a incrementar el ingreso o el bienestar de los electores, sino que la respuesta se dio a través de la reforma al propio marco institucional.

III. La confianza en las instituciones políticas

En el capítulo anterior establecí una serie de factores que determinan la confianza en las instituciones electorales. Sostuve que ésta es una función tanto del nivel del ingreso percibido por los electores como de la idea que éstos se hagan del comportamiento de los políticos. Asimismo, establecí que el nivel de confianza no es indiferente al diseño del sistema electoral aplicable a la integración del poder legislativo en una nación dada. Por último, también postulé que la identificación partidista está relacionada con el grado de confianza. En este capítulo presento evidencia en apoyo a estas afirmaciones.

En este momento de la argumentación cabe precisar que aquí se distinguen dos niveles de análisis, el objetivo y el de las percepciones. En cada momento determinado, los ciudadanos observan un nivel de riqueza o ingreso que es superior o inferior al que esperaban para reelegir al gobernante en turno (dependiendo éste, en parte, de sus adhesiones partidistas previas). Entienden que el nivel de ingreso es, al menos parcialmente, una función del grado en que los gobernantes tengan un comportamiento representativo en el sentido de que estarán dispuestos o motivados a encargarse de los intereses de los electores como si fueran los suyos propios. La calidad de la representación depende, entonces, del ingreso y el comportamiento objetivos.

El supuesto de los electores es el siguiente: si los políticos consiguen ingresos altos, están haciendo bien su trabajo; si roban, están viendo por sus intereses y no por los míos. Sin embargo, las dificultades de monitoreo dejan a los electores en una situación de incertidumbre con respecto a este comportamiento objetivo. Sencillamente, no saben qué hacen los políticos cuando desempeñan sus tareas. Ante esto, tienen la opción de confiar o no en que su comportamiento será el adecuado. Para fundamentar esta confianza, recurrirán a la percepción que tienen del ingreso y a la que tienen del comportamiento, echando mano de cualquier fuente de información que esté disponible. La calidad de esta fuente puede variar mucho: pueden ser los periódicos o las noticias de radio y televisión, los comentarios con la familia o con los amigos, que a su vez se pueden informar de cualquier manera. Lo importante es que con base en esto se hacen una idea de lo que “realmente” ocurre. Entonces, si la calidad de la representación es una función de datos objetivos, la confianza en que el nivel de calidad obtenido corresponde a un comportamiento representativo

sistemáticamente difundido, es una función de las percepciones sobre el desempeño institucional (en términos de riqueza) y sobre el comportamiento de los políticos.

Una última precisión remite al nivel de análisis necesario para sustentar estas afirmaciones. Tal como se presentó en el capítulo II, el nivel objetivo de la calidad de la representación es un equilibrio resultante de la agregación de disposiciones individuales, exactamente en la misma forma en que el precio de los bienes resulta de variables agregadas. Por lo tanto, el análisis tiene que respetar este nivel y verificar la confianza en las instituciones políticas tomando como unidad el grupo directamente afectado por el desempeño de estas instituciones: el Estado-nación.

A continuación, defino tanto las unidades a analizar como las medidas con las que operacionalizaré las variables relevantes, para efectos de la confianza política. En la exposición iré aclarando el comportamiento que es esperable observar en cada una de ellas dados los elementos teóricos expuestos en el capítulo II.

Datos y unidades de análisis

El análisis que a continuación expondré, utiliza datos tanto objetivos como de opinión pública a nivel agregado. Los datos cubren los años 1996, 1997, 1998, 2000, 2001 y 2002, y corresponden a los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. La unidad es el país-año; es decir, cada uno de los 17 países para cada uno de los seis años, de tal forma que la base consiste, en principio, en un total de 102 datos.

El período y los países seleccionados se deben a la disponibilidad de datos. Las variables con las que operacionalizo tanto la confianza como las percepciones son de opinión, por lo que sólo es posible medirlas a través de encuestas. La Corporación Latinobarómetro viene realizando desde 1996 (salvo 1999) una encuesta anual en todos los países mencionados con la ventaja de aplicar el mismo cuestionario en cada uno de ellos, a la vez de que

presenta una tasa aceptable de repetición de preguntas año tras año.⁵⁸ La disposición de estas encuestas condiciona el período y los países para los que se buscaron datos provenientes de otras fuentes.

Variables

Variable dependiente

La variable a explicar es la confianza en las instituciones políticas, refiriendo por ellas a las que responden de una forma u otra a la lógica de la competencia electoral, a la que se le imputan propiedades conducentes al comportamiento representativo por parte de los gobernantes.

Esta variable es capturada con las preguntas sobre confianza en el congreso, los partidos políticos y el gobierno (para 1996 y 2001) o la presidencia (para 1997, 1998, 2000 y 2002).⁵⁹ Las respuestas posibles son mucha confianza (con un valor de 1), algo de confianza (2), poca confianza (3) o ninguna (4). Con base en las respuestas construí un índice de desconfianza en las instituciones políticas, consistente en la puntuación obtenida por análisis de componentes principales a la de los datos de la totalidad de los países y los años. El índice así obtenido tiene una media de 0 y expresa unidades de desviaciones estándar con respecto a la media. Todos los datos son comparables entre sí. Se utiliza la media de cada país correspondiente a cada uno de los años. Los datos varían de un mínimo de -.825 (Honduras-1997), siendo el mayor nivel de confianza registrado, hasta un máximo de .868 (Argentina-2002), lo que representa el mayor nivel de desconfianza.

⁵⁸ Tuve acceso a las encuestas de Latinobarómetro gracias a la intervención de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, en su calidad de organismo perteneciente a la red CLACSO. Véanse detalles del tamaño de la muestra y el margen de error en el Anexo III.2.

⁵⁹ Los resultados que se mostrarán más adelante no se alteraron en lo esencial al utilizar un índice que utilizó únicamente los datos correspondientes a los partidos y el congreso.

Medidas objetivas de desempeño

Como variables independientes utilizo dos medidas económicas objetivas. Una consiste en el cambio del PIB per cápita real en términos porcentuales para cada país; la otra, el cambio porcentual en el índice de precios al consumidor. Para los dos indicadores, se utilizó la medida correspondiente al año de la encuesta si ésta se realizó entre julio y diciembre. Cuando la encuesta se aplicó entre enero y junio, se utilizaron los datos correspondientes al año anterior. Los datos provienen de WB (2004b).

Si la confianza en las instituciones reacciona de manera inmediata al desempeño objetivo, estos indicadores presentarán una asociación negativa con el índice de desconfianza en éstas sin intervención de medidas de percepción.

Evaluación subjetiva del desempeño

El indicador utilizado para la percepción del desempeño económico consiste en el porcentaje de encuestados que califica a la situación económica actual del país como “mala” o “muy mala”. Presenta un nivel de asociación de $r = -.369$ con el incremento del PIB (significativo al 1%), lo que da espacio suficiente para divergencias. Si la hipótesis de percepción es correcta, su efecto sobre el índice de desconfianza no sólo tendrá que ser positivo, sino que debe superar al efecto de cualquiera de los indicadores objetivos.

Añado un indicador adicional de percepción, consistente en el porcentaje que reporta estar “muy satisfecho” y “más bien satisfecho” con el funcionamiento de la democracia. La intención de incluirlo se basa en que la preocupación de los electores por el bienestar económico es sólo un aspecto de los resultados que esperan de un gobierno democrático. El nivel de satisfacción con la democracia puede ser entendido como evaluación subjetiva dirigida a todo lo que da la democracia, además de bienestar material.⁶⁰ Si es así, estará asociado de forma negativa con el índice de desconfianza, pero si este resultado implica

⁶⁰ La asociación entre ambas variables es relativamente fuerte ($r = .464$) y se podría armar un caso en favor de la dependencia de la satisfacción con la democracia con respecto a la evaluación de la situación económica del país. Un modelo de regresión simple (no reportado) arroja que cada punto adicional de incremento en el porcentaje de quienes consideran que la situación económica es “mala” o “muy mala” produce una reducción de .5 puntos en el porcentaje de los satisfechos con la democracia. El valor de la R^2 ajustada (.207), si bien alto para ser una sola variable, justifica la intuición de que hay “algo más” que ofrece la democracia.

que la relación de la evaluación de la economía nacional desaparezca con la desconfianza, entonces tal relación es sólo parte de una concepción más amplia del desempeño democrático y no se sostiene el efecto independiente de la dimensión material de la función de bienestar.

Evaluación subjetiva del comportamiento

La corrupción es fácilmente presentable como una forma extrema de riesgo moral. El gobernante corrupto, a quien se le delegó poder para ver mejor por los intereses de los representados, lo utiliza para beneficiarse a sí mismo y a costa precisamente de esos intereses. El porcentaje de encuestados que considera que la corrupción ha aumentado en el último año tendría que estar relacionado positivamente con el índice de desconfianza en las instituciones políticas.

Datos de corrupción

La corrupción que efectivamente ocurre es imposible de observar, pero, argumentaba en el capítulo anterior, existen múltiples señales para inferir generalizaciones sobre el comportamiento promedio de la clase política. Tal vez la más importante consista en los escándalos de corrupción difundidos en los medios de comunicación. Estos escándalos permiten a los ciudadanos observar lo que hacen los políticos cuando ellos creen que no son observados.

Con el fin de capturar esta importante fuente de evaluación, construí una variable *dummy* en la que se asigna valor de 1 cuando ocurrió un escándalo de corrupción en el país durante el año anterior a la realización de la encuesta, y de 0 en caso contrario, utilizando como referencia los respectivos volúmenes del *Latin American Weekly Report*. La variable debe presentar una asociación positiva con el índice de desconfianza.

Confianza generalizada

Aunque la relación causal no es clara, aún no es posible descartar de antemano que la confianza en las instituciones sea influida por el nivel previo de confianza social. Con el fin de controlar por este posible efecto, incluyo, siguiendo el uso, el porcentaje de encuestados que consideran que “se puede confiar en las demás personas”.⁶¹

Independencia de las observaciones

La forma en que está construida la base de datos presenta el riesgo de que no se respete el supuesto de independencia mutua de las observaciones. Al incluir mediciones correspondientes al mismo país a lo largo de distintos años, existe el riesgo de que el valor en una observación esté condicionado por el valor que adquirió el año anterior. Para que el modelo dé cuenta de esta posibilidad y corrija su efecto, incluí una variable *dummy* para cada uno de los países y otra para cada uno de los años en los que se realizó la encuesta.⁶²

Al recurrir a un modelo con estas características, conocido como regresión de mínimos cuadrados con variables *dummy* (LSDV, por sus siglas en inglés), se intercambia la mayor precisión en la estimación de los coeficientes y del nivel de significancia por una sobreestimación en el valor de la R^2 , producida por el alto número de variables incorporadas.

Dado que no tengo motivos teóricos para preferir un año o país determinado como grupo de control, dejo que el programa estadístico (SPSS) “escoja”.

Determinantes de la confianza en las instituciones

El cuadro 3.1. muestra los resultados del modelo LSDV, destinado a verificar el efecto sobre la confianza en las instituciones de las variables previamente descritas. Se reportan los resultados una vez que fueron eliminadas las unidades que, por sí mismas, tenían un

⁶¹ Los estadísticos descriptivos de cada una de las variables pueden ser consultados en el anexo III.1.

⁶² Véase, para detalles, Stimson (1985). Agradezco a Diego Reynoso sus oportunas sugerencias en el diseño del modelo de regresión.

peso desproporcionado en el valor de los coeficientes de regresión. Me detengo a explicar el procedimiento utilizado.

Para cada variable del modelo se calculó el valor de la diferencia (estandarizada) en el valor del coeficiente que resulta de la exclusión de un caso particular. Se considera que un caso tiene una influencia indebida cuando su valor absoluto es superior a $\frac{2}{\sqrt{N}}$, siendo N el número de casos.⁶³ El cuadro 3.1 muestra el resultado al ser eliminados 13 casos a partir de su influencia desproporcionada sobre los coeficientes correspondientes a las variables de crecimiento económico e inflación. La eliminación posterior, tomando como referencia el resto de las variables, no produjo cambios en el signo de los coeficientes ni en su nivel de significancia.

Un aspecto relevante del modelo consiste en que la evaluación económica subjetiva es un buen predictor de la desconfianza, mientras que los indicadores objetivos de desempeño no presentan ninguna asociación. Aunque la evaluación subjetiva, claro está, no es ajena a los datos objetivos, el crecimiento económico no impacta en la confianza si no es percibido en la experiencia de los ciudadanos. Por otro lado, el análisis sugiere que el impacto de la evaluación subjetiva sobre los niveles de desconfianza incluye aspectos distintos a los materiales. La satisfacción con la democracia tiene una relación negativa y significativa con la desconfianza.

La evaluación del comportamiento de los gobernantes, tal como se expresa en la percepción de incremento de la corrupción, también afecta a los niveles de desconfianza en la forma en que se había predicho. Por otro lado, la publicación de escándalos también incrementa la desconfianza, en comparación a una situación en la que no se producen escándalos de corrupción. En cualquier modalidad, las instituciones son menos confiables cuando se piensa que los individuos que ocupan las posiciones de poder delegado las convierten en puestos de privilegio privado.

⁶³ Dado que N = 102, el valor crítico a considerar fue .198.

Cuadro 3.1. Determinantes de la confianza en las instituciones políticas. Regresión LSDM.

	β	Error estándar
Constante	-.360	.365
Crecimiento del PIB per cápita	-.003	.006
Inflación	.002	.003
Situación económica actual del país: mala/muy mala	.004*	.002
Satisfecho/muy satisfecho con democracia	-.009**	.002
Corrupción ha aumentado	.008*	.004
Escándalo de corrupción	.088*	.041
Se puede confiar en las demás personas	-.007*	.003
1996	-.057	.070
1997	-.171**	.053
2000	-.002	.054
2001	-.049	.061
2002	.275**	.058
Argentina	-.054	.099
Brasil	-.343**	.102
Colombia	-.205*	.089
Costa Rica	.086	.114
Chile	-.349**	.094
Ecuador	-.040	.138
El Salvador	-.245**	.080
Guatemala	.036	.091
Honduras	-.549**	.097
México	-.127	.109
Nicaragua	-.052	.099
Panamá	-.007	.082
Paraguay	-.395**	.083
Perú	-.208*	.093
Uruguay	-.222*	.115
Venezuela	-.244*	.123
F: 16.217**		
R ² ajustada: .829		
N: 89		

* $p < .05$ ** $p < .01$

Los grupos de control son 1998 y Bolivia

Fuente: calculado con base en datos de Latinobarómetro; WB (2004b) y *Latin American Weekly Report* (1995-2002).

Variable institucional

En el capítulo anterior argumenté que cierto tipo de diseño de los sistemas electorales tiene un efecto equivalente al de una reducción en la disposición personal a la elusión por parte de los representantes. Si esto fuese así, los sistemas electorales que incentivan a los candidatos a orientarse hacia los electores (en vez de hacia la dirigencia partidista), podría influir en los niveles de confianza a través de su influencia en las evaluaciones del

comportamiento de los representantes. Este argumento podría ser sometido a prueba utilizando como variable dependiente el indicador sobre las percepciones de corrupción que usé anteriormente.

Lamentablemente, realizar una prueba sistemática requeriría, a su vez, de una teoría completa sobre la corrupción, tarea que en estos momentos excede a mis posibilidades. Por lo tanto, en este capítulo me limitaré a presentar evidencia de que existe un nivel de asociación suficiente que alienta a profundizar el trabajo sobre esta línea de investigación.

Para ello, divido a las unidades de país-año en dos grandes grupos. Uno se forma por las unidades con sistemas de representación proporcional con listas cerradas; el otro, por todos los demás. En los casos de bicameralismo, utilizo únicamente el sistema aplicado en la cámara baja. Con este criterio, en el primer grupo están los sistemas electorales de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador (1996-1997), El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezuela.⁶⁴ Las unidades correspondientes a este grupo suman 62, que representan el 60.8 por ciento del total.

Los otros casos son muy variados. Brasil y Perú utilizan la representación proporcional con voto preferencial, permitiendo a los electores incidir en los diputados individuales que ingresarán en la cámara con preferencia sobre sus compañeros de partido. Ecuador cambió en 1998 a un sistema electoral de esta modalidad. México utiliza el sistema mixto segmentado, de tal forma que una parte de su cámara legislativa se integra mediante representación proporcional con listas cerradas y otra parte con diputados electos por mayoría simple en circunscripciones uninominales, sin que el número de los diputados electos por lista, dependa del número de diputados que ingresan por el principio mayoritario. Panamá también combina la elección por mayoría con la representación proporcional, pero adicionalmente existe voto preferencial en este último nivel.

Chile y Uruguay, en principio, utilizan la representación proporcional con listas cerradas, pero con mecanismos especiales. En Chile, todas las circunscripciones son binominales y el voto, si bien se cuenta para la lista, se deposita por uno de los dos candidatos, de tal forma

⁶⁴ Bolivia y Venezuela reformaron sus sistemas electorales cambiando de la integración por representación proporcional con listas cerradas a la variedad conocida como “proporcional personalizada”, precisamente con la intención de reforzar el vínculo directo entre diputados y representados. El capítulo V de este estudio es íntegramente una argumentación sobre la conveniencia de considerar a ambos tipos de sistemas electorales como estrictamente equivalentes.

que el elemento personal es considerable. El sistema electoral uruguayo puede ser considerado como una variante del voto preferencial. Cada partido presenta, por decirlo de alguna forma, una lista de listas o sublemas. El elector deposita su voto por uno de los sublemas. A cada partido le corresponden escaños en proporción a los votos que obtuvieron todos los sublemas, y éstos, a su vez, obtienen una fracción de escaños correspondiente a su contribución en la votación total del partido. De esta forma, al mantener la etiqueta partidista constante, los candidatos agrupados en facciones son obligados a distinguirse de sus compañeros de partido, lo que promueve al menos un nivel de competencia intrapartidista que acerca a estos grupos hacia sus electores. Estas razones me parecen suficientes para incluir ambos sistemas como distintos a la categoría de listas cerradas en representación proporcional.⁶⁵

Para evaluar la asociación entre tipo de sistema electoral y percepción de corrupción, calculo el promedio para cada grupo de dos medidas de percepción. Una es el porcentaje promedio que considera que la corrupción ha aumentado. La otra es el índice de corrupción de Transparencia Internacional (TI, 2006). Este índice es tan subjetivo como el indicador que usé anteriormente, pero tiene algunas ventajas. Por un lado, se compone de una multiplicidad de fuentes, que incluyen no sólo encuestas de opinión sino la evaluación de analistas de riesgo y empresarios nacionales y extranjeros. Aunque, por supuesto, en todos los casos se trata de percepciones, la combinación de indicadores da como resultado, si no una medida más objetiva, al menos sí una percepción más cualificada. Por otro lado, el índice se basa en una definición de la corrupción muy parecida a la que utilizo aquí desde la perspectiva del agente-principal: el mal uso del puesto público con fines de beneficio privado. Finalmente, mientras que en el indicador de Latinobarómetro se pregunta sobre el incremento temporal de la corrupción, en el de TI se mide la percepción sobre la frecuencia y la intensidad de la corrupción actual. El índice tiene valores que van de 0 (indicando incidencia de corrupción muy alta) a 10 (que señala una incidencia muy baja). Por tanto, espero que una mayor integridad actual en la sociedad se relacione negativamente con la desconfianza en las instituciones. Aunque Transparencia realiza el cálculo desde 1996, para

⁶⁵ Los datos para la construcción de esta variable fueron tomados de IPU (2006). Para el sistema electoral chileno véase Siavelis y Valenzuela (1996) y Nohlen (1998: 281-3). Para el sistema electoral uruguayo, véase Aguirre (2000).

varios países únicamente se contabiliza desde años más recientes, por lo que los datos sólo están disponibles para 71 casos de los considerados.

En ambas medidas, la percepción de corrupción promedio es mayor para el grupo con sistemas de representación proporcional y listas cerradas que en el resto, y la diferencia alcanza la significancia estadística. Como puede verse en el valor del coeficiente η , la asociación entre el tipo de sistema electoral y los indicadores de percepción de corrupción no es muy impresionante pero tampoco es desdeñable. Por lo tanto, existe evidencia como para explorar de forma más controlada la relación hipotetizada.

El cuadro 3.2. presenta los promedios para cada tipo de sistema electoral.

Cuadro 3.2. Comparación de medias. Percepción de corrupción según tipo de sistema electoral.

Sistema electoral		Corrupción ha aumentado (%)	Índice de corrupción (TI)
RP Lista cerrada	Media	88.806	3.017
	N	62	40
	Desviación est.	9.288	.857
Otro	Media	83.078	4.315
	N	40	31
	Desviación est.	7.321	1.525
Total	Mean	86.560	3.584
	N	102	71
	Desviación est.	8.983	1.351
	Sig. de F	> .01	> .01
	η	.313	.480
	η^2	.098	.230

Fuente: calculado con base en datos de Latinobarómetro (1996-2002) y TI (2006).

En este capítulo presenté evidencia empírica en favor del argumento avanzado en el capítulo 2, en el sentido de que la confianza en las instituciones políticas responde a evaluaciones subjetivas del desempeño de dichas instituciones y del comportamiento de los políticos, todo esto sin menoscabo del efecto que se debe esperar de las posiciones ideológicas predominantes en la población y las adhesiones partidistas. En el próximo capítulo la confianza dejará de ser una variable dependiente y será tratada como factor causal. En especial, veremos cómo la confianza en las instituciones es un aspecto que debe

ser tomado en cuenta al momento de evaluar las potencialidades de éxito de los partidos populista.

Anexo III.1.

Cuadro A.1. Variables incluidas en modelo de cuadro 3.1. Estadística descriptiva.

Variable	Media	Desv. estándar	Coefficiente de asimetría
Índice de desconfianza en las instituciones políticas	-.004	.331	.105
Incremento PIB per cápita	.806	3.235	-.203
Inflación	12.855	15.221	2.831
Situación económica actual del país: buena/muy buena	54.2	14.133	.116
Satisfecho con la democracia	32.789	15.668	.654
Corrupción ha aumentado	86.560	8.983	-1.750
Se puede confiar en las demás personas	18.949	8.228	.557

% de unidades con escándalos de corrupción: 39.2%

Anexo III.2. Ficha técnica – LATINOBARÓMETRO.

LATINOBARÓMETRO es una encuesta de opinión pública que se realiza anualmente desde 1995. Esta encuesta representa las opiniones, actitudes, comportamientos y valores de 17 países de América Latina, representando aproximadamente a 400 millones de habitantes desde el Río Bravo (Grande) hasta la Antártica.

Año	Casos	Margen de error
1996	18,719	2.8% - 5%
1997	17,767	2.8% - 5%
1998	17,901	2.8% - 5%
1999/2000	18,038	2.8% - 5%
2001	18,135	2.8% - 5%
2002	18,522	2.8% - 4.16%

La encuesta LATINOBARÓMETRO es realizada por la CORPORACIÓN LATINOBARÓMETRO, corporación de derecho privado sin fines de lucro, con sede en Santiago de Chile. www.latinobarometro.org.

IV. Desconfianza en las instituciones y propensión a votar por candidatos populistas

En el capítulo 2 afirmé que los candidatos populistas tendrían mayores posibilidades de éxito en la medida en que su discurso antielitista presentase una coincidencia relativa con el diagnóstico que hacen los electores en lo individual del desempeño de las instituciones democráticas. De forma más precisa, la conclusión del análisis deductivo fue que un candidato populista cualquiera se verá favorecido cuando, a ojos del elector, la confianza en las instituciones fuese inferior a la credibilidad personal del candidato.

Este capítulo está destinado a dar sustento empírico a tal afirmación. Como el modelo del que parte la hipótesis respectiva se refiere a una decisión individual de votar, el nivel de análisis adecuado es precisamente el individuo. Para ello, utilizaré los datos de las encuestas de Latinobarómetro aplicadas en Bolivia, Ecuador (ambas en 2002) y Venezuela (1998). Antes de presentar los datos, considero importante señalar cuál sería la manera más adecuada de contrastar empíricamente mis afirmaciones.

Un primer problema con la hipótesis es que el nivel de confianza en las instituciones no es comparable con la credibilidad personal, al menos como para decir que uno de los términos es mayor, menor o igual que el otro. Por ello, una primera modificación consiste en replantearla en la siguiente forma: la probabilidad de voto a favor de un candidato populista tiene una relación negativa con la confianza en las instituciones políticas y positiva con su credibilidad personal.

El nivel de confianza en las instituciones políticas, a mi juicio, no presenta problemas. El tema de la credibilidad es más problemático, pues por sí mismo tiende a ser tautológico. De primera instancia, parece razonable sostener que los candidatos populistas, y sólo ellos, se benefician de la desconfianza en las instituciones. Pero los rendimientos de la credibilidad de un candidato no son exclusivos del populismo: todos los candidatos tienen que ser creíbles. Por eso es necesario hacer algunas precisiones. Por un lado, cada discurso impone sus exigencias de credibilidad. Mientras que a un candidato obrerista le queda mal poseer una inmensa fortuna, así sea honestamente adquirida, a un candidato populista le queda mal tener antecedentes en el sistema de partidos establecidos. Aunque es posible hacerlo, un candidato perteneciente al *Jet Set* político tendrá problemas para hacer creíble su discurso.

Esa es una parte del argumento. La otra me parece más relevante. Uno de los pasos clave para la resolución del modelo de decisión electoral desarrollado en el capítulo II consistía en establecer una regla de relación inversa entre la credibilidad del candidato populista (q) la de su competidor (p), tal que $q = 1 - p$. Esta regla se fundamenta en el siguiente razonamiento: a) todos los miembros de la clase política establecida tienen por definición intereses opuestos a los del pueblo, y si dicen otra cosa, es porque mienten; b) si el candidato de la oposición pertenece a la clase política, y ofrece promover los intereses del pueblo, necesariamente miente; c) sólo un candidato *del* pueblo dice la verdad cuando ofrece promover los intereses del pueblo. El razonamiento imputa la credibilidad de las promesas electorales que realizan individuos concretos a su adscripción (también imputada) a cualquiera de los dos grupos en los que el discurso populista divide a la sociedad.

Por ello, contrastar la segunda parte de la hipótesis con indicadores de la credibilidad de los candidatos particulares resultaría trivial. Para que la variable “credibilidad” esté directamente vinculada con el discurso populista, es necesario que se refiera a la credibilidad de la clase política en su conjunto. Dada la relación entre la credibilidad de cada discurso y el razonamiento que la sustenta, este indicador basta y sobra para la prueba empírica, sin necesidad de referirse a la credibilidad de los candidatos particulares.

Por lo tanto, la versión definitiva de la hipótesis sería: la probabilidad de voto a favor de un candidato populista tiene una relación negativa con la confianza en las instituciones políticas y con la credibilidad de la clase política establecida en general.

A esto debe añadirse el papel jugado con los aspectos retrospectivos del voto. El voto económico retrospectivo tiende a favorecer al partido en el gobierno y a afectar a los candidatos populistas, según se deduce del marco teórico utilizado en este trabajo. Asimismo, como también fue explícitamente reconocido en el mismo marco, la identificación partidista debe forzosamente ser incorporada en el análisis si se quiere tener precisión en los resultados. La identificación partidista no sólo constituye el elemento más fuerte conocido para predecir el voto, sino que condiciona además el comportamiento de otras variables.⁶⁶ Por ello, todo análisis de intención de voto debe incluir algún indicador de identificación partidista, de preferencia el grado de identificación con cada uno de los

⁶⁶ Beltrán (2000), por ejemplo, muestra que las consideraciones económicas retrospectivas pierden su efecto sobre la intención de voto una vez que se incluye la identificación partidista.

partidos existentes, con el fin de comparar distintas utilidades expresivas. Para separar el efecto de la identificación del producido por otros factores, es necesario que la variable dependiente consista en una pregunta de intención de voto por candidato, con su nombre y las siglas con las que compete.

Asimismo, también es importante que se cumplan algunos requisitos contextuales. Como mínimo, las campañas deben tener algún tiempo de haber comenzado, con el fin de que el público esté capacitado, a grandes rasgos, para identificar a los principales candidatos y el contenido general de sus líneas discursivas. Por último, pudimos apreciar que los estudios sobre populismo son numerosos, pero presentan hipótesis diversas y, hasta el momento, no se cuenta con información suficiente como para descartar algunas de ellas, por ser conocido su bajo poder explicativo, o bien para incorporar otras a manera de control, por ser conocido y comprobado su efecto.

Estas condiciones son las necesarias u óptimas para el tipo de análisis que me propongo. La próxima sección describirá las condiciones efectivas en las que éste se llevará a cabo.

Casos

La otra cara de las ventajas de contar con una encuesta como Latinobarómetro viene dada por el hecho de que el instrumento de recolección de datos está diseñado para fines y necesidades distintas a las del investigador de “segunda mano”, a la vez que el marco teórico subyacente, implícito o explícito, tiene referentes divergentes en cada caso. Quien utiliza una encuesta sin haber participado en el diseño del cuestionario debe adaptarse a los datos ya registrados, cuando el instrumento de recolección tendría que adaptarse a las necesidades específicas de la investigación. La selección de los casos a analizar fue una de las decisiones condicionada por este problema. El otro fue la definición de las variables.

Aunque todas las encuestas de Latinobarómetro se pregunta por la intención de voto en una elección hipotética, la codificación de las respuestas en la base de datos de la mayoría de los años es numérica, al menos para los partidos distintos al gobernante, y su interpretación es prácticamente imposible. Sólo para las encuestas realizadas en 2002 se codifica para la respuesta específica en cada país. Ese año, se celebraron por lo menos cuatro elecciones en las que participaron candidatos importantes con un discurso populista: en Bolivia, Manfred

Reyes (Nueva Fuerza Republicana) y Evo Morales (Movimiento al Socialismo); en Ecuador, Álvaro Noboa (Partido Renovador Institucional Acción Nacional) y Lucio Gutiérrez (Partido Sociedad Patriótica), y en Colombia, Álvaro Uribe (Primero Colombia). El hecho de que la pregunta consista en el partido por el que votaría el elector representa una limitación adicional a la utilidad de los datos para los fines que me propongo, pero de particular gravedad para el caso de Colombia. En éste, la codificación consiste en “Liberal”, “Conservador” e “Independientes”, siendo imposible determinar con alguna precisión qué tipos de candidatura incluye esta última categoría. La incapacidad de aislar de alguna forma las respuestas favorables a Uribe me llevó a descartar la realización de pruebas sobre esta base de datos.

Por otro lado, las bases correspondientes a Ecuador y Bolivia presentan mejores condiciones para realizar las pruebas. La limitación correspondiente a la base de Ecuador reside en que la encuesta se realizó cinco meses antes de la elección, debilitando cualquier efecto discursivo que pudiera presentarse en una observación tomada en fechas coincidentes con las campañas electorales. De esta forma, el total de personas que expresan alguna preferencia en particular suma apenas el 27% de las respuestas.⁶⁷ Sin embargo, al agrupar en una sola categoría (“populistas”) a los partidos que apoyaron las candidaturas de Noboa y Gutiérrez se obtiene una proporción suficiente para realizar las pruebas.

El cuestionario de Bolivia, en cambio, se realizó un mes y medio antes de las elecciones. Aunque los principales acontecimientos de la campaña estaban por ocurrir, la distancia es lo suficientemente corta como para que varios de los entrevistados estuvieran en capacidad de identificar las etiquetas partidistas con los nombres de sus candidatos. Además, existe la variación suficiente en los datos como para realizar pruebas más completas que las permitidas por la base de datos anterior.

A estos dos casos añado el de Venezuela en 1998. La codificación de la intención de voto no señala de qué partido se trata. Sin embargo, la encuesta se realizó entre el 25 de noviembre y el 3 de diciembre, mientras que la elección se celebró el 6 de diciembre. Dada la cercanía de las fechas y conociendo los resultados finales, no me pareció en exceso arbitrario identificar al partido que registra la mayor frecuencia con el Movimiento Quinta

⁶⁷ Los totales correspondientes a la intención de voto se calculan excluyendo de la cuenta a los entrevistados que se negaron a contestar o reportaron no estar registrados para votar.

República. Así, los resultados que presento del análisis de este caso serán válidos en la medida en que se me conceda que hice una apuesta acertada. Desde mi perspectiva, el mayor riesgo que corro se debe a que no pude distinguir en el resto de los partidos a los demás integrantes del Polo Patriótico, por lo que me conformé con agrupar a todos los demás en una misma categoría, lo que en principio pudo haber trabajado en contra de mis hipótesis centrales.

Una limitación grave de los análisis que realizaré más adelante, es que en 1998 y en 2002 no se incluyó pregunta alguna sobre identificación partidista. El impacto de la ausencia de un indicador semejante no sólo tendría que reflejarse en una menor capacidad explicativa global de los modelos, sino que introduce un elemento de incertidumbre en cuanto a si las variables que se sostuvieron en cada uno de los modelos también lo harían de tomarse en cuenta ese factor.

Variables de interés

Como mencioné, pretendo mostrar evidencia en favor de la relación entre la confianza en las instituciones y la credibilidad de los políticos, por un lado, y la propensión al voto por candidatos populistas (en este caso, para ser más precisos, por partidos que postulan a candidatos populistas). La primera de ellas no presenta inconvenientes y utilizo el índice de desconfianza en las instituciones políticas, calculado exactamente de la misma forma en que se hizo para el análisis del capítulo anterior. La diferencia es que el análisis de componentes principales se realiza sobre las respuestas individuales dadas en cada país por separado (y que, obviamente, en esta ocasión no trabajo con promedios).

Con el tema de la credibilidad, no obstante, existen problemas de operacionalización. Necesito un indicador de descrédito que afecte a la totalidad de la clase política. El único que parece apropiado es la pregunta relativa al incremento de la corrupción. Como se recordará, esta medida fue utilizada como determinante de la confianza en las instituciones. Más allá de los potenciales problemas de multicolinealidad, el hecho de que se utilice un mismo indicador para dos cuestiones distintas debe ser clarificado teóricamente. Como veo las cosas, el razonamiento es de este estilo. Si como ciudadano quiero hacerme una idea de la medida en que mis intereses están siendo cuidados por los gobernantes, la percepción

dinámica y estática que tenga de la corrupción indica la frecuencia con la que, según mi estimación, dichos gobernantes atienden su propio bienestar a costa del mío. Por otro lado, si como elector quiero evaluar las promesas que hizo un candidato para incrementar mi bienestar, mi percepción del incremento de la corrupción actualiza la estimación que yo hago de la probabilidad de que un político cualquiera (v.gr., el candidato en cuestión) se aproveche de su puesto y, si me ofrece mejoras en mi situación, en realidad esté mintiendo.

Con esta justificación, utilizo una variable dicotómica codificando con 1 a los entrevistados que consideran que la corrupción aumentó mucho o poco, y con 0 al resto de las respuestas.⁶⁸ Si mi expectativa es correcta, esta variable tendrá una asociación positiva con la probabilidad de voto a favor de un candidato populista, una vez descontado su efecto sobre la confianza en las instituciones.

Por otro lado, no puede dejar de considerarse la posibilidad de que los electores cuenten más con la pericia de los políticos para ocuparse de sus asuntos. Esta dimensión no afecta a la credibilidad de los representantes, sino que atañe a la creencia en que tomarán las decisiones adecuadas. El modelo explicativo de la propensión de voto en favor de los populistas, en una palabra, debe dar cabida a la posibilidad de que los políticos carezcan de credibilidad ante los electores no tanto por mentirosos como por ineptos. Utilizo una variable en la que se codifica con 1 a los entrevistados que confían en que la gente que conduce el país hará las cosas correctamente.

El problema con reposar en este indicador consiste en que el nivel de incertidumbre sobre la competencia de los políticos es mayor que con respecto a la evaluación del comportamiento. Finalmente, los casos de corrupción son publicitados en los medios, la impunidad puede ser vista por todos, al igual que los niveles de vida ostentosos en la clase dirigente. La corrupción observada, sean en los medios o por vivencias cotidianas o comentarios de otras personas, es fácilmente generalizable. Nada de eso ocurre con la capacidad profesional, que es más difícil de determinar y atribuir a grupos amplios de personas. Un posible indicador es el grado académico del representante, pero utilizarlo

⁶⁸ Los estadísticos descriptivos de cada una de las variables independientes con las que trabajaré en este capítulo pueden ser consultados en el anexo IV.1. Salvo en el caso de la edad y donde se señale, todas las variables independientes son categóricas.

conlleva problemas de credencialismo que dejan al ciudadano en el mismo lugar en el que estaba en cuanto a incertidumbre.

Finalmente, el modelo incluye seis diferentes medidas de juicio sobre la situación económica. Mi interés principal radica en los juicios retrospectivos sobre la situación económica. Aquí se debe tomar en cuenta que existe una disputa con respecto a si los juicios retrospectivos relevantes electoralmente son de carácter sociotrópico (sobre economía nacional) o egotrópico (sobre economía personal).⁶⁹ El modelo de decisión electoral que desarrollé en el capítulo dos explícitamente remite a juicios retrospectivos egotrópicos, prediciendo que el incremento en el ingreso personal reducirá la propensión al voto en favor de los candidatos populistas. No obstante, incorporo ambas consideraciones en el análisis, al igual que variables prospectivas (estimación de la situación económica futura, personal y familiar) y actuales (situación económica actual). El motivo es que diversos estudios han comprobado que todas ellas tienen relevancia empírica. Pero, insisto, mi atención se centra en el comportamiento electoral con respecto a las consideraciones retrospectivas egotrópicas.

Variables de control

Los modelos correspondientes a los tres casos incluyen las siguientes variables de control: sexo, tamaño de población, religión, edad, educación, confianza generalizada y percepción de estrechez del ingreso. Su inclusión obedece a la intención de que los resultados de los análisis sean más robustos, dado que podrían estar relacionados con las preferencias electorales. Ninguna de ellas está contemplada como fundamental en el modelo de decisión electoral ni por los estudios sobre el tema, por lo que no les prestaré mayor atención al interpretar los resultados.

Añado también una variable relativa a la preocupación por quedar desempleado en los próximos doce meses. Esta preocupación actual indica un elemento de fuerte incertidumbre sobre el futuro relacionada con variables económicas cuyo control es razonable imputar, al

⁶⁹ Puede encontrarse una exposición de este debate en Stokes (2001b), junto con una interesante contribución. Véase también Harper (2000: 1197-8), quien reseña las dimensiones egotrópica-sociotrópica y retrospectiva-prospectiva.

menos parcialmente, al control del gobierno. Aunque espero que la incertidumbre tenga efectos electorales, carezco de elementos para hipotetizar su dirección.

Hipótesis a verificar

Como mencioné en su momento, las diversas teorías y estudios sobre el populismo han planteado una diversidad de causas para explicarlo sin necesariamente someter sus propuestas a contrastación empírica sistemática. A riesgo de excederme con el número de variables a considerar, me parece que no es tarea menor comenzar a aportar evidencia que en el futuro permita seguir por caminos validados o, en su caso, desechar las vertientes de análisis que se probaron irrelevantes. Me limito a incluir indicadores de Latinobarómetro que se relacionan con ciertas hipótesis destacadas sobre el populismo.

Algunas hipótesis se refieren a ciertas propiedades secundarias del discurso populista. En el capítulo I argumenté que este discurso se caracteriza por su componente *antiestablishment*, y mi hipótesis general es que el éxito del populismo depende del grado en que el discurso resulta convincente (lo que es capturado en dos de mis variables de interés). Ahora bien, algunas características derivadas del núcleo discursivo han sido rescatadas como fundamentales en el análisis. Una de ellas es el llamado al ejercicio de la democracia participativa. No me cabe duda de que efectivamente este llamado es muy frecuente. Para medir su atractivo electoral, incorporo una variable en la que se codifica con 1 a quienes consideran prioritario aumentar la participación de los ciudadanos en las decisiones de gobierno (frente a combatir la inflación, mantener el orden y proteger la libertad de expresión).

Otro aspecto a verificar es si el discurso populista se beneficia con una ideología anticonsensual. Con esto no me refiero a su ataque a los actores e instituciones existentes, lo cual ya está contemplado. Más bien, hasta dónde el populismo obtiene dividendos electorales entre quienes no coinciden con los valores compartidos por las élites políticas. Con el fin de operacionalizar esta hipótesis, tomo como estos valores básicos el mercado en lo económico y la democracia representativa en lo político. Con respecto al mercado, tomo dos indicadores: 1) quienes prefieren que los servicios de salud, educación, agua, y electricidad sean ofrecidos por el sector privado y no por el Estado, y 2) quienes están a

favor de la integración económica de América Latina. En lo que se refiere a la democracia representativa, utilizo dos variables: la preferencia por la democracia sobre el autoritarismo y la asignación de primacía a la democracia sobre el desarrollo económico. Alternativamente, estas variables políticas pueden ser consideradas como evidencia con respecto a la hipótesis que atribuye una mentalidad autoritaria a las bases populistas.

El discurso populista, al identificar una parte con el todo (i.e., el pueblo como los de abajo con el pueblo como los integrantes de una nación) suele tener un componente altamente nacionalista, que puede ser defensivo frente a las potencias centrales en los países en desarrollo, o bien xenófobo en el caso del populismo de los países desarrollados. Para evaluar el grado en que este aspecto del discurso atrae a los más nacionalistas, utilizo como grupo indicador de nacionalismo a quienes se declaran orgullosos de su nacionalidad.

Todas estas variables son controladas por la ideología del entrevistado en función de su autoubicación en el eje izquierda-derecha. Para este caso se construyeron grupos de izquierda (0 a 3), derecha (7 a 10) y centro (4 a 6), que se utiliza como grupo de control. Aunque por lo general esta variable es utilizada como continua, me parece que operacionalizarla como diferencia con respecto al centro ideológico aporta la ventaja de captar relaciones no lineales (digamos, en forma de U), sin que deje de captar la linealidad cuando sea el caso. Por otro lado, añadí como grupo a quienes no son capaces de ubicarse en el espectro ideológico. La razón principal radica en que de esta forma se minimiza enormemente la pérdida de datos. Adicionalmente, se verá que este grupo no deja de tener interés por sí mismo.

Por último, se presentan tres variables relativas a cuestiones de carácter organizativo. Una de ellas se refiere al clientelismo imputado a los movimientos populistas. Aunque el clientelismo tiene componentes culturales que obedecen al manejo y adhesión de normas de lealtad (Adler-Lomnitz *et al.*, 2004), su ocurrencia no deja de ser producto de condiciones objetivas que orillan a personas con determinadas características a buscar la protección de un *broker* para tener acceso a determinados recursos. Para capturar el grado en que los encuestados se perciben como insertos en esas condiciones, elaboré un índice de disposición al clientelismo que consiste en la suma simple de la coincidencia (codificada

con valor de 1) con las siguientes afirmaciones: el éxito en la vida depende de las conexiones y el trabajo duro no es garantía del éxito.

Otro aspecto remite a la afirmación de que el populismo “integra” a quienes estaban previamente excluidos. Esta hipótesis está muy relacionada con los estudios del populismo clásico y la regla de voto censatario de los regímenes oligárquicos de América del Sur. Sin embargo, de vez en cuando es actualizada para referirse a los populismos de los años noventa (De la Torre, 1996; Roberts, 1998; Weyland, 1999). Entiendo que la exclusión a la que se refieren estos estudios es de tipo político (si bien correlacionada con la social), la falta de acceso a los centros de toma de decisiones vinculantes. Por ello, utilizo como indicador de exclusión la percepción de que el sector político que apoya el entrevistado no tiene las mismas oportunidades que el resto para llegar al poder.

Finalmente, para medir la relación entre los movimientos populistas de los noventa y principios del siglo XXI y el sector informal, presento como indicador a los entrevistados que reportan trabajar por cuenta propia o ser vendedores ambulantes.

El cuestionario aplicado a Venezuela en 1998 no coincide en todas sus preguntas con el aplicado a las muestras de Bolivia y Ecuador en 2002. Las diferencias pueden ser apreciadas revisando los cuadros del anexo IV.1. En los casos de nacionalismo y preferencia entre desarrollo y democracia no existía la pregunta respectiva ni alguna equivalente. Sin embargo, existe una pregunta sobre pertenencia a organizaciones que permite evaluar la hipótesis de que el populismo apela principalmente a las masas desorganizadas. Se construyeron tres grupos. Uno corresponde a quienes pertenecen a una organización política; otro para quienes pertenecen a las siguientes organizaciones: junta de vecinos, centros juveniles, centro de madres, club deportivo, sindicato, asociación de voluntariado, centro cultural, organizaciones de iglesia y otras; finalmente, se toma como grupo de control a quienes no pertenecen a ninguna organización. La razón de separar las organizaciones políticas del resto obedece a que, de incluirlas, la hipótesis de masas desorganizadas sería tautológica: el terreno de casa natural de todo partido nuevo consiste en las masas no organizadas previamente en partido político. Si la hipótesis es correcta, la pertenencia al segundo grupo reducirá la probabilidad de votar por un candidato populista.

Determinantes del voto por partidos populistas

Para el análisis de los casos se utilizan diversos modelos de regresión logística multinomial. El grupo de referencia está construido de forma tal que represente al sistema de partidos al cual ataca el movimiento populista. Los coeficientes de regresión corresponden a la votación por los partidos populistas, la respuesta no sabe, entendida como indecisión, y la abstención, interpretando así las respuestas “ninguno” y “voto en blanco”. Los datos correspondientes a Bolivia permiten la elaboración de modelos más complejos, por lo que comenzaremos con el análisis de este caso.

Antes, quisiera recuperar un aspecto derivado del modelo de decisión electoral. En el capítulo 2 argumenté que la menor confianza en las instituciones, favorable a la votación por candidatos populistas, podía también ser causa de abstencionismo, al reducir el valor esperado de votar por cualquiera de los candidatos y, por lo tanto, promover el predominio de los costos asociados con el acto de votar. Por ello, es de esperarse que la desconfianza en las instituciones no sólo incremente la probabilidad de votar por el candidato populista, sino que también incremente la probabilidad de abstención.

Bolivia

En las elecciones de 2002, se presentaron por lo menos dos candidatos cuyos discursos corresponden al populismo: Evo Morales, por el Movimiento al Socialismo (MAS), y Manfred Reyes, por la Nueva Fuerza Republicana (NFR). Ambos impugnaban al sistema de partidos tradicionales dominado por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Acción Democrática Nacional (ADN) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). En el modelo de decisión electoral no contemplé una posibilidad como ésta. Sin embargo, establecí que la naturaleza impugnadora del discurso populista requería de ciertas precondiciones que le daban credibilidad. En este sentido, Morales se distinguía claramente de Reyes por sus credenciales de genuino *outsider*, tanto con respecto al juego del sistema de partidos dominante como con respecto a la legalidad representada por este sistema de partidos.⁷⁰ Si estas condiciones de credibilidad tienen alguna fuerza,

⁷⁰ Para las diferencias específicas entre ambos candidatos, véase el capítulo V de este estudio.

Morales tendría que beneficiarse en mayor medida que Reyes de las condiciones que favorecen la votación populista.

Para el momento en que se realizó la encuesta, Reyes no sólo tenía una clara ventaja sobre Morales, sino que para muchos era el ganador seguro de la contienda. El cuadro 4.1. presenta la distribución porcentual de las preferencias para el conjunto de los tres partidos tradicionales, el MAS, NFR, otros partidos, los indecisos y los potenciales abstencionistas.

Cuadro 4.1. Intención de voto. Bolivia,
16 de abril – 11 de mayo de 2002

	%
Tradicionales	21.0
MAS	9.5
NFR	18.6
Otros	12.8
Indecisos	12.7
Abstención	25.4
N	1163

Fuente: Latinobarómetro, Bolivia -
2002

El cuadro 4.2. presenta el resultado de un modelo de regresión multinomial en el que la variable dependiente viene dada por las categorías mostradas en el cuadro 4.1., tomando como grupo de referencia al del conjunto de los partidos tradicionales. El modelo original incluyó la totalidad de las variables mencionadas en la sección anterior, pero el cuadro sólo incluye las variables cuyos coeficientes alcanzaron los niveles convencionales de significancia estadística para al menos uno de los grupos. El valor de los coeficientes reportados es el correspondiente a la repetición de la operación una vez suprimidas las variables irrelevantes.⁷¹

Uno de los primeros aspectos a resaltar del modelo es que los coeficientes relativos a la confianza y a la percepción de corrupción se comportan conforme a lo esperado únicamente para el caso del MAS. La propensión a votar por NFR no es sensible a las variaciones en los niveles de desconfianza y, si bien este partido se beneficia con el paso de una percepción de que la corrupción ha disminuido o sigue igual a una percepción de que la

⁷¹ Sigo el mismo criterio en los próximos reportes de modelos de regresión.

corrupción ha aumentado, lo hace a una tasa inferior a la del incremento en las votaciones por Evo Morales. Dado que el discurso, en su núcleo, es el mismo para estas dos fuerzas, encuentro razonable imputar la diferencia de los efectos a la distinta credibilidad que otorgaban los respectivos antecedentes de los candidatos.

Ahora bien, en lo que respecta a los juicios económicos retrospectivos de carácter egotrópico, podemos observar que el perdedor con las evaluaciones positivas es la NFR, mientras que la propensión a votar por el MAS no se muestra afectada. Esto podría indicar que, en presencia de dos candidatos con el mismo discurso populista, perder la guerra por la credibilidad implica renunciar a los beneficios de la desconfianza. Pero esto, en contraparte, promueve una imagen de mayor capacidad para restablecer la economía cuando las evaluaciones retrospectivas son malas. Tal vez a esto se deba el que sólo el MAS se vea afectado, de manera negativa, cuando los electores pasan de no preocuparse a preocuparse por el desempleo.

El perfil de los electores del MAS presenta una gran similitud con algunos de los supuestos ideológicos y organizativos planteados en investigaciones pasadas. Las probabilidades de voto para este partido se reducen cuando el entrevistado es favorable a la privatización de los servicios y se incrementan cuando los electores son ambulantes o se sienten excluidos con respecto al sistema político. Por otro lado, hay que destacar que no tiene ninguna relación con la posición de los entrevistados respecto de la integración económica. Con respecto a la dimensión política, no parece que el electorado del MAS tenga un perfil autoritario (ni particularmente demócrata). Tienen una mayor propensión a votar por él los indiferentes entre democracia y desarrollo, al mismo tiempo que el apoyo a que el gobierno pase por encima del congreso ni la preferencia entre democracia y autoritarismo se relacionan con el voto por este partido. Tampoco lo hace el nacionalismo, que más bien parece operar en favor del sistema tradicional de partidos cuando las opciones son los partidos minoritarios, la indecisión y el abstencionismo. Asimismo, el énfasis en la participación no tiene relación con el voto por este partido.

Cuadro 4.2. Bolivia 1998. Determinantes de la preferencia electoral. Regresión logística multinomial.
Referencia: partidos tradicionales

	MAS		NFR		Otros		Indeciso		Abstención	
	β (Error est.)	Exp. (β)	β (Error est.)	Exp. (β)	β (Error est.)	Exp. (β)	β (Error est.)	Exp. (β)	β (Error est.)	Exp. (β)
Constante	n.s.		n.s.		n.s.		n.s.		2.072*** (.771)	
Desconfianza en instituciones	.261** (.134)	1.299	n.s.		n.s.		n.s.		.368*** (.107)	1.445
Corrupción ha aumentado	1.308** (.522)	3.699	.761** (.356)	2.140	n.s.		n.s.		n.s.	
Econ. país comp. hace un año: mejor	.679* (.376)	1.972	.595* (.309)	1.813	n.s.		n.s.		n.s.	
Econ. personal comp. hace un año: mejor	n.s.		-.446* (.266)	.640	n.s.		n.s.		n.s.	
Preocupa desempleo	-.954*** (.290)	.385	n.s.		n.s.		n.s.		n.s.	
Aumentar participación	n.s.		n.s.		n.s.		n.s.		.488** (.213)	1.629
Favorable a servicios privados	-.534* (.318)	.586	n.s.		n.s.		n.s.		n.s.	
Democ. y desarr.										
Desarrollo más importante	-.866* (.513)	.421	n.s.		-.959** (.483)	.383	n.s.		n.s.	
Democracia más importante	-1.091* (.556)	.336	n.s.		n.s.		n.s.		n.s.	
Ideología										
No se ubica	n.s.		n.s.		n.s.		n.s.		n.s.	
Izquierda	n.s.		n.s.		n.s.		n.s.		-.490* (.262)	.612
Derecha	n.s.		n.s.		n.s.		-.953*** (.344)	.386	n.s.	
Orgullosa de su nacionalidad	n.s.		n.s.		-.634* (.346)	.531	-.833** (.341)	.435	-1.063*** (.294)	.346
Exclusión	.517* (.294)	1.678	n.s.		n.s.		.632** (.278)	1.882	.844*** (.230)	2.325
Es ambulante	.784** (.322)	2.190	n.s.		n.s.		n.s.		n.s.	
Ingreso subjetivo										
Les alcanza bien, pueden ahorrar	1.811** (.689)	6.116	1.805*** (.622)	6.081	n.s.		n.s.		n.s.	
Les alcanza, sin dificultades	n.s.		1.022** (.473)	2.780	n.s.		n.s.		n.s.	
No les alcanza, tienen dificultades	1.121** (.513)	3.067	1.193*** (.466)	3.297	.893** (.454)	2.443	n.s.		n.s.	
Es mujer	n.s.		n.s.		-.456** (.233)	.634	.453* (.224)	1.573	n.s.	
Reside en pob. Pequeña	-.863*** (.301)	.422	n.s.		n.s.		n.s.		n.s.	
Es católico	-.777** (.327)	.460	n.s.		n.s.		-.646** (.309)	.524	-.861*** (.264)	.423
Edad	-.022*** (.008)	.979	-.019*** (.007)	.981	n.s.		.014* (.008)	1.014	-.012* (.006)	.988

χ^2 del modelo: 294.393***

Pseudo R² (Nagelkerke): .254

N válidos: 1042

* p < .10 ** p < .05 *** p < .01

Fuente: Latinobarómetro (Bolivia, 2002)

Sobre el sentimiento de exclusión cabe añadir que su ocurrencia favorece tanto la indecisión como el abstencionismo, y que el MAS es la única formación política que parece mejorar sus posibilidades frente a este fenómeno. Otro tanto cabe decir con respecto a la relación entre abstencionismo y desconfianza. Como se había dicho, la mayor desconfianza, además de incrementar las probabilidades de voto en favor del MAS, también incrementa las probabilidades de abstención (en ambos casos, frente a la opción de votar por cualquiera de los partidos tradicionales).

Venezuela

En Venezuela la situación es menos complicada que en Bolivia en el sentido de que se presentó un solo candidato populista a retar al sistema de partidos establecidos. La distribución en grupos de opción de voto se presenta en el cuadro 4.3.

Recordando la advertencia sobre los posibles problemas de clasificación mencionados anteriormente, el cuadro 4.4. muestra los resultados del modelo utilizando como grupo de referencia al conjunto formado por todos los partidos distintos al MVR. La relación de la desconfianza y la corrupción con respecto a las probabilidades de votar por el MVR es similar a la mostrada por estas variables con relación al MAS. Lo mismo sucede con la relación entre desconfianza y abstención. La propensión a votar por el MVR responde negativamente a las evaluaciones económicas retrospectivas, pero en este caso se trata de las de carácter sociotrópico.

Cuadro 4.3. Intención de voto. Venezuela, 25 de noviembre – 3 de diciembre de 1998

	%
MVR	40.9
Todos los demás	17.7
Indeciso	6.4
Abstención	34.9
N	1139

Fuente: Latinobarómetro, Venezuela – 1998

En cuanto a las características asociadas con el populismo, el MVR presenta pocas. La divergencia con respecto al consenso económico no sólo es nula en la dimensión de estatismo, sino que incluso tiene una asociación positiva con el acuerdo respecto de la

integración económica. El clientelismo y la importancia asignada a la participación, el ser ambulante y el sentimiento de exclusión, tampoco presentan relación con la probabilidad de voto en favor de este partido con relación al voto con el resto. Finalmente, el caso de Venezuela (en ocasiones presentado como una reedición del populismo al estilo de Perón) no presenta pruebas que apoyen la hipótesis de una relación entre el populismo y las masas desorganizadas. Sencillamente, la adscripción a cualquier organización no política no está relacionada con la decisión del voto –mientras que la adscripción a una organización política favorece a los partidos establecidos frente a la opción de abstenerse.

Al parecer, el único rasgo de similitud con el patrón hipotetizado es que la preferencia por la democracia sobre el autoritarismo (frente a la indiferencia entre autoritarismo y democracia) tiende a alejar al elector del MVR y acercarlo a los partidos tradicionales. Pero esto es muy distinto a afirmar que quienes prefieren el autoritarismo se suman a este movimiento partidista (lo cual no ocurre).

Cuadro 4.4. Venezuela 1998. Determinantes de la preferencia electoral. Regresión logística multinomial.

	MVR			Indeciso			Abstención		
	β	Error est.	Exp. (β)	β	Error est.	Exp. (β)	β	Error est.	Exp. (β)
Constante	n.s.			n.s.			n.s.		
Índice de desconfianza en instituciones	.347***	.096	1.415	n.s.			.319**	.098	1.375
Corrupción ha aumentado	.875*	.485	2.398	n.s.			n.s.		
Situación económica país comp. hace 1 año: mejor	-.539*	.280	.583	-1.765**	.764	.171	-.657**	.285	.518
Situación económica país próx. año: mejor	.902***	.223	2.464	n.s.			n.s.		
Preocupa desempleo	.431*	.224	1.538	n.s.			n.s.		
Antiestatismo	n.s.			.130**	.062	1.138	n.s.		
A favor de integración AL	.719***	.238	2.053	1.101**	.466	3.006	.488**	.235	1.628
Valoración democracia									
Democracia es preferible	-.607**	.302	.545	n.s.			n.s.	.320	1.055
Autoritarismo puede ser mejor	n.s.			n.s.			n.s.	.360	.909
Ideología									
No se ubica	n.s.			.997*	.585	2.710	n.s.		
Izquierda	n.s.			n.s.			n.s.		
Derecha	-.529**	.238	.589	n.s.			n.s.		
Participa en partido político	n.s.			n.s.			-1.409***	.376	.244
Es mujer	-.471**	.197	.624	n.s.			n.s.		
Grupo educativo									
Bajo	n.s.			n.s.			n.s.		
Medio	n.s.			-.904**	.451	.405	-.515*	.288	.598
χ^2 del modelo: 228.031***									
Pseudo R ² (Nagelkerke): .230									
N válidos: 971									

* p < .10 ** p < .05 *** p < .01

Fuente: Latinobarómetro (Venezuela, 1998)

Ecuador

Por último, evalúo el caso de Ecuador. El cuadro 4.5. muestra la distribución de votos agregando en el rubro “populistas” a los partidos que apoyaron respectivamente las candidaturas de Noboa y Gutiérrez y bajo el rubro “tradicionales” al resto de los partidos.

Cuadro 4.5. Intención de voto. Ecuador, 20 de abril – 17 de mayo 2002

	%
Tradicionales	14.8
Populistas	12.4
Indeciso	26.4
Abstención	46.4
N	1137

Fuente: Latinobarómetro, Ecuador - 2002

El cuadro 4.6. muestra los resultados del modelo correspondiente. Estos resultados son menos satisfactorios para efectos de la verificación de hipótesis que en el caso de los modelos anteriores. Por un lado, el nivel de desconfianza aún funciona como predictor del voto en favor de los partidos populistas, a la vez que operan los efectos esperados de las evaluaciones retrospectivas.

Cuadro 4.6. Ecuador 2002. Determinantes de la preferencia electoral. Regresión logística multinomial.

	Populistas			Indeciso			Abstención		
	β	Error est.	Exp. (β)	β	Error est.	Exp. (β)	β	Error est.	Exp. (β)
Constante	n.s.			n.s.			.978***	.229	
Desconfianza en instituciones	.305**	.142	1.356	n.s.			n.s.		
Gente que conduce el país	-.637**	.315	.529	n.s.			n.s.		
Econ. país comp. hace un año: mejor	n.s.			-.668**	.262	.513	-.687***	.235	.503
Econ. personal comp. hace un año: mejor	-.751**	.374	.472	n.s.			n.s.		
Aumentar participación	n.s.			.601***	.224	1.823	.413**	.208	1.511
Ideología									
No se ubica	n.s.			1.037***	.268	2.820	.710***	.245	2.033
Izquierda	-.768*	.417	.464	-.701**	.348	.496	-.793***	.297	.452
Derecha	-.646*	.322	.524	n.s.			-.627***	.240	.534
Exclusión	n.s.			n.s.			.368*	.188	1.445
Es ambulante	n.s.			n.s.			-.476*	.284	.621
Confía en otros	n.s.			n.s.			-.461**	.210	.631
Poblado pequeño	n.s.			.703***	.208	2.019	n.s.		

χ^2 del modelo: 141.662***

Pseudo R² (Nagelkerke): .134

N válidos: 1084

* p < .10 ** p < .05 *** p < .01

Fuente: Latinobarómetro (Ecuador, 2002)

Sin embargo, por el otro lado, el indicador de confiabilidad a partir de la corrupción, deja de funcionar, y en su lugar entra la evaluación de la competencia de los funcionarios. De igual forma, no se verifica el efecto esperado de la relación entre participación electoral y nivel de desconfianza. Ninguna otra de las variables consideradas en el modelo (distintas a las de control) alcanza los niveles requeridos de significancia.

Sumario

En este capítulo se analizaron tres casos de candidaturas populistas con el fin de proporcionar evidencia en favor de la hipótesis derivada del modelo de decisión electoral desarrollado en el capítulo II: la probabilidad de voto a favor de un candidato populista tiene una relación negativa con la confianza en las instituciones políticas y con la credibilidad de la clase política establecida en general.

En las tres pruebas, se verifica la relación positiva entre desconfianza en las instituciones políticas y propensión al voto en favor del partido populista. El elemento de credibilidad de la clase política también está presente, si bien en el caso de Ecuador la clase política tradicional es afectada por la percepción de su incompetencia, más que por la percepción de su indecencia (como en Bolivia y Venezuela) por expresarlo de forma llana. El comparar el comportamiento de ambos indicadores con respecto a los candidatos populistas y con respecto al abstencionismo, obtenemos conclusiones interesantes. Siempre que se acepte la relación inversa entre la credibilidad del candidato populista y la credibilidad de la clase política (i.e., que $q = 1 - p$), mis resultados aportan evidencia en el sentido de que la desconfianza en las instituciones puede ser motivo tanto para abstenerse como para votar por candidatos populistas, pero los electores encontrarán motivos para votar por estos últimos en vez de por los candidatos de los partidos tradicionales (en lugar de abstenerse) cuando creen que ellos, y sólo ellos, son capaces de gobernar y anteponer los intereses de los electores a los propios.

Por último, la evaluación retrospectiva positiva opera en contra de los candidatos populistas, aunque los resultados indican que el modelo original debe ajustarse para dar cabida a consideraciones tanto sociotrópicas como egotrópicas.⁷²

Cabe destacar, finalmente, que algunas de las características resaltadas por investigaciones anteriores no probaron tener una relación sistemática con el perfil del electorado populista. Si comparamos los resultados de los tres modelos, encontramos que algunos populismos, y no todos, cumplen con funciones integradoras. Asimismo, no hay nada en el electorado que se muestre en contra de la ideología de mercado (ni a favor), mientras que en la dimensión del régimen político, las bases populistas no se muestran ni antidemocráticas ni prodemocráticas. El mensaje participativo, en el que efectivamente insisten los candidatos, no tiene efectos electorales. Por último, el clientelismo no es específico del populismo y, donde fue posible someterla a prueba, la hipótesis de masas desorganizadas carece de sentido. En una palabra, parece ser que lo único que se puede decir en general sobre los votantes de los candidatos populistas es que comparten un hartazgo con el desempeño de las instituciones políticas y con el comportamiento de sus dirigentes.

Concluyo señalando que la relación entre desconfianza y voto favorable al populismo detectada en el nivel individual parece tener un correlato en el nivel agregado. Entre 1996 y 2003, se registraron un total de 30 elecciones presidenciales, de las cuales en nueve se presentaron candidatos populistas con votaciones superiores a 20%, sea en lo individual o en conjunto.⁷³ El promedio del índice de desconfianza para estas unidades (medido en la encuesta inmediata anterior a la celebración de las elecciones) es de .266, mientras que en

⁷² Hago notar que la presencia consistente de los elementos retrospectivos en los tres modelos, fundamental para la validez general del modelo teórico, debe ser reiterada con mayor evidencia empírica y, muy particularmente, con los controles adecuados de identificación partidista. Por ejemplo, en los resultados de Harper (2000), que incluye controles de carácter programático, el efecto de las consideraciones retrospectivas no es consistente para Lituania, Hungría y Bulgaria. Por otro lado, aún bajo condiciones de certeza sobre las consideraciones retrospectivas, el carácter egotrópico y sociotrópico de éstas debe ser clarificado en el nivel teórico. Con base en su revisión de alrededor de 1000 investigaciones sobre el tema, Nannestad y Paldam (1994) concluyen que las consideraciones sociotrópicas tienden a funcionar mejor que las egotrópicas, pero cuando son estas últimas las que operan, se recurre a particularidades culturales para explicar tal situación. Mi impresión es que hay suficientes hallazgos como para intentar definir cuándo predominarán unas y cuándo las otras. Stokes (2001a) presenta una serie de prerrequisitos para que el modelo de voto retrospectivo sea verificado, a la vez que un intento por explicar el predominio de las consideraciones sociotrópicas.

⁷³ Las elecciones a las que me refiero son: Argentina, 2003; Bolivia, 1997 y 2002; Colombia, 2002; Costa Rica, 2001; Ecuador, 1997 y 2002; Guatemala, 1998, y Venezuela, 1998. Véase cuadro 1.1., *supra*, para mayores detalles.

los 21 restantes el promedio del índice de desconfianza es $-.059$. La diferencia es significativa al 5 por ciento y el coeficiente de asociación tiene un valor de $.404$.

Anexo 4.1.

Cuadro A4.2. Variables continuas incluidas en modelo de cuadro 4.1.
Estadística descriptiva.

Variable	Media	Desv. Estándar	Coefficiente de asimetría
Índice de desconfianza en instituciones políticas	.000	1.000	-.906
Índice de disposición al clientelismo	1.084	.664	-.094
Edad	37.709	15.681	.696

Fuente: Latinobarómetro, Bolivia – 2002

Cuadro A4.4. Variables continuas incluidas en modelo de cuadro 4.4.
Estadística descriptiva.

Variable	Media	Desv. estándar	Coefficiente de asimetría
Índice de desconfianza en instituciones políticas	.000	1.000	-.895
Antiestatismo: número de servicios que deben estar en manos privadas	1.731	2.424	1.298
Índice de disposición al clientelismo	1.246	.698	-.378
Edad	37.167	14.828	.811

Fuente: Latinobarómetro, Venezuela - 1998

Cuadro A4.5. Variables continuas incluidas en modelo de cuadro 4.6. Estadística descriptiva.

Variable	Media	Desv. Estándar	Coefficiente de asimetría
Índice de desconfianza en instituciones políticas	.000	1.000	-1.124
Índice de disposición al clientelismo	1.094	.728	-.146
Edad	37.629	14.871	.762

Fuente: Latinobarómetro, Ecuador – 2002

Cuadro A4.6. Variables categóricas incluidas en modelo de cuadro 4.1.
Porcentajes

Variable	%
Corrupción ha aumentado mucho/poco	89.1
Confía en que gente que conduce el país hará las cosas correctamente	25.0
Situación económica actual del país: muy buena/buena	5.1
Situación económica del país comparada con la de hace un año: mejor	14.8
Situación económica del país el próximo año: mejor	21.1
Situación económica personal y familiar actual: muy buena/buena	12.3
Situación económica personal y familiar comparada con la de hace un año: mejor	22.1
Situación económica personal y familiar el próximo año: mejor	32.3
Preocupado/muy preocupado de quedar desempleado durante los próximos doce meses	43.4
Lo más importante: Aumentar la participación de los ciudadanos en las decisiones importantes del gobierno	30.2
Favorable a servicios privados	24.0
Muy/algo a favor de integración económica de América Latina	75.8
De acuerdo/muy de acuerdo con que el gobierno pase por encima de instituciones frente a situación difícil.	34.5
Democracia frente a autoritarismo (grupo de control: da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático)	
Democracia preferible a cualquier otra forma de gobierno	63.8
En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible	22.5
Democracia y desarrollo (grupo de control: desarrollo y democracia son igual de importantes)	
Desarrollo económico es más importante	67.6
Democracia es más importante	24.9
Muy/algo orgulloso de su nacionalidad	82.6
Ideología (grupo de control: centro)	
No se ubica en escala ideológica	19.6
Izquierda	20.1
Derecha	21.2
El sector político que apoya no tiene iguales oportunidades de llegar al poder que los demás	27.0
Trabajador por cuenta propia/ambulante	23.3
Percepción de estrechez (grupo de control: el ingreso familiar no les alcanza, tienen grandes dificultades).	
Les alcanza bien, pueden ahorrar	5.5
Les alcanza justo, sin grandes dificultades	36.4
No les alcanza, tienen dificultades	49.5
Se puede confiar en la mayoría de las personas	26.9
Es mujer	49.8
Está desempleado	3.9
Reside en poblado de hasta 5 mil habitantes	28.1
Es católico	80.7
Escolaridad (grupo de control: tiene estudios superiores)	
Analfabeto/estudios básicos	30.1
Estudios secundarios/educación media/técnica	51.9

Fuente: Latinobarómetro, Bolivia, 2002

Cuadro A4.7. Variables categóricas incluidas en modelo de cuadro 4.4.
Porcentajes

Variable	%
Corrupción ha aumentado mucho/poco	96
Situación económica actual del país: muy buena/buena	6.8%
Situación económica del país comparada con la de hace un año: mejor	11.3
Situación económica del país el próximo año: mejor	27.6
Situación económica personal y familiar actual: muy buena/buena	27.1
Situación económica personal y familiar comparada con la de hace un año: mejor	21.6
Situación económica persona y familiar el próximo año: mejor	41.9
Preocupado/muy preocupado de quedar desempleado durante los próximos doce meses	74.4
Lo más importante: Aumentar la participación de los ciudadanos en las decisiones importantes del gobierno	21.8
El gobierno debe priorizar que no suban los precios aunque esto signifique menos puestos de trabajo	6.1
Muy/algo a favor de integración económica de América Latina	78.6
Democracia frente a autoritarismo (grupo de control: da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático)	
Democracia preferible a cualquier otra forma de gobierno	61.5
En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible	25.0
Ideología (grupo de control: centro)	
No se ubica en escala ideológica	6.9
Izquierda	24.5
Derecha	36.4
El sector político que apoya no tiene iguales oportunidades de llegar al poder que los demás	23.3
Organización (grupo de control: no participa en ninguna organización)	
Participa en al menos 1 organización no partidista	73.6
Participa en partido político	7.3
Trabajador por cuenta propia/ambulante	14.0
Percepción de estrechez (grupo de control: el ingreso familiar no les alcanza, tienen grandes dificultades).	
Les alcanza bien, pueden ahorrar	7.9
Les alcanza justo, sin grandes dificultades	27.9
No les alcanza, tienen dificultades	42.6
Se puede confiar en la mayoría de las personas	15.9
Es mujer	48.9
Está desempleado	6.6
Reside en poblado de hasta 20 mil habitantes	11.7
Es católico	83.9
Escolaridad (grupo de control: tiene estudios superiores)	
Analfabeto/estudios básicos	43.5
Estudios secundarios/educación media/técnica	34.4

Fuente: Latinobarómetro, Venezuela, 1998

Cuadro A4.8. Variables categóricas incluidas en modelo de cuadro 4.6.
Porcentajes

Variable	%
Corrupción ha aumentado mucho/poco	90.6
Confía en que gente que conduce el país hará las cosas correctamente	29.1
Situación económica actual del país: muy buena/buena	6.5
Situación económica del país comparada con la de hace un año: mejor	18.5
Situación económica del país el próximo año: mejor	15.5
Situación económica personal y familiar actual: muy buena/buena	17.3
Situación económica personal y familiar comparada con la de hace un año: mejor	21.8
Situación económica personal y familiar el próximo año: mejor	24.3
Preocupado/muy preocupado de quedar desempleado durante los próximos doce meses	46.5
Lo más importante: Aumentar la participación de los ciudadanos en las decisiones importantes del gobierno	30.8
Favorable a servicios privados	34.8
Muy/algo a favor de integración económica de América Latina	79.4
De acuerdo/muy de acuerdo con que el gobierno pase por encima de instituciones frente a situación difícil.	47.3
Democracia frente a autoritarismo (grupo de control: da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático)	
Democracia preferible a cualquier otra forma de gobierno	51.9
En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible	18.9
Democracia y desarrollo (grupo de control: desarrollo y democracia son igual de importantes)	
Desarrollo económico es más importante	67.0
Democracia es más importante	22.1
Muy/algo orgulloso de su nacionalidad	93.9
Ideología (grupo de control: centro)	
No se ubica en escala ideológica	40.1
Izquierda	9.4
Derecha	21.3
El sector político que apoya no tiene iguales oportunidades de llegar al poder que los demás	38.6
Trabajador por cuenta propia/ambulante	10.4
Percepción de estrechez (grupo de control: el ingreso familiar no les alcanza, tienen grandes dificultades).	
Les alcanza bien, pueden ahorrar	5.2
Les alcanza justo, sin grandes dificultades	35.2
No les alcanza, tienen dificultades	40.6
Se puede confiar en la mayoría de las personas	
Es mujer	23.0
Está desempleado	3.5
Reside en poblado de hasta 5 mil habitantes	37.5
Es católico	89.8
Escolaridad (grupo de control: tiene estudios superiores)	
Analfabeto/estudios básicos	28.9
Estudios secundarios/educación media/técnica	51.0

Fuente: Latinobarómetro, Ecuador, 2002

V. Instituciones políticas y populismo en Bolivia y Venezuela

El descrédito de una clase política en su totalidad produce distintas respuestas. Una de ellas es la del electorado: se vuelve perceptivo al discurso populista. Ahora bien, si la clase política tiene una mínima capacidad de anticipación, suponer que observa cruzada de brazos su propio derrumbe viola requisitos mínimos de plausibilidad. El marco teórico desarrollado en el capítulo II indica que el gobernante puede favorecer a su partido mejorando el desempeño económico, pero estos esfuerzos pueden encontrar límites en restricciones externas fuera de su control. El modelo consideraba que el nivel de confianza en las instituciones estaba dado, si bien condicionado por las instituciones de elección. Pero existen ocasiones en las que, en situaciones restrictivas, los actores a cargo de la toma de decisiones perciben el origen sistemático de las fallas en su propio comportamiento, así como el interés común a largo plazo que tienen en remediarlo, de tal forma que se ponen de acuerdo para modificar lo que esté en sus manos para obtener mejores resultados. Los políticos no pueden intervenir en el grado en que los electores son o no sensibles al desempeño pasado –sospecho que por lo general preferirían que no lo fueran en absoluto–, pero son por lo general los agentes adecuados para emprender el cambio institucional.⁷⁴

Estas condiciones supuestas en las élites políticas, con la consiguiente reforma a las instituciones, se cumplieron en los dos casos que aquí analizaré: Bolivia y Venezuela. Es notoria la similitud tanto de trayectoria como la conclusión de ambos. En los dos casos, la presentación de candidaturas populistas exitosas (Evo Morales y Hugo Chávez) fue antecedida por un difundido cuestionamiento a la representatividad del sistema de partidos vigente; en ambos, también, las élites respondieron a la crisis transformando sistemas electorales de representación proporcional con listas cerradas en sistemas del tipo “proporcional personalizado”.⁷⁵

⁷⁴ La idea de que la difusión de un sentimiento antipartidista entre la población puede ser recogido por la élite política para producir un cambio correctivo en el nivel de las instituciones ha sido planteada por Scarrow (1996).

⁷⁵ *Vid. infra* para una descripción de ambos sistemas. La diferencia más evidente es que en los sistemas de representación proporcional por listas únicamente se utilizan circunscripciones plurinominales, mientras que los sistemas proporcionales personalizados combinan las circunscripciones plurinominales con circunscripciones uninominales.

Estrategia de investigación⁷⁶

El lector orientado metodológicamente cuestionará la utilidad de presentar dos trayectos paralelos. Por un lado, los dos casos analizados no pueden ser prueba de un efecto causal, pues no hay variación en ninguna de las variables dependientes. Por ejemplo, que a la crisis del sistema de partidos haya sucedido en los dos casos una reforma a las reglas de elección del congreso no prueba que la crisis *cause* la reforma. Tampoco basta para probar el efecto causal de la crisis sobre el éxito electoral del populismo (efecto que aquí se tomará por supuesto). Por otro lado, si pretendiera hacer un análisis de trayectoria para comprender un proceso, al estilo “narrativa analítica” (Bates *et al.*, 1998), el análisis de un caso particular es más que suficiente, y la inclusión del restante sólo tendría fines confirmatorios.

Sin embargo, ninguno de éstos es mi objetivo. Las élites políticas tradicionales de Bolivia y Venezuela se comportaron como si dieran por probada la hipótesis de que los sistemas electorales del tipo proporcional-personalizado produjesen sistemáticamente una mayor vinculación entre los representantes individuales y sus respectivos electorados. En este capítulo pretendo argumentar en favor de la hipótesis nula correspondiente: que el efecto de este diseño específico sobre la relación entre representantes y representados no es distinto al que genera el sistema electoral de representación proporcional por listas cerradas.

Este objetivo se justifica por la naturaleza de los casos de estudio. Veamos. En el análisis comparado, el diseño necesario para dar cuenta de un efecto causal “cero” es distinto al necesario para presentar evidencia en favor de un efecto causal. En el segundo caso, la posibilidad de que dos o más causas distintas conduzcan al mismo resultado obliga a elegir casos en los que todas las variables independientes relevantes mantengan un valor relativamente homogéneo, salvo aquella que queremos destacar en nuestra hipótesis. Al mantener constantes los valores de todos los factores que esperamos tengan una influencia y permitir variación en la variable de interés, podemos imputar a esta variación los cambios que, en su caso, se presenten en la variable dependiente (King, Kehoane y Verba, 2000). Algo de esto se presenta en Bolivia y Venezuela. Sea por los efectos concentradores de la riqueza de la política económica aplicada o por una incapacidad crónica de retomar el crecimiento, en ambos países el desempeño económico dejaba mucho que desear, al menos

⁷⁶ El planteamiento metodológico de este capítulo debe mucho a los comentarios que realizó Judith Pérez Soria a un borrador previo.

para la mayoría de los electores. Por otro lado, éstos habían reaccionado de forma retrospectiva a este desempeño castigando los resultados de la gestión pasada, sin que esto se tradujera en mejoras considerables. Finalmente, se había difundido una percepción de que la clase política era el problema en sí, que su comportamiento no correspondía a la imagen de gobernantes que deciden en función de los gobernados.

Estas características comunes indican que las variables relevantes que he manejado hasta ahora son constantes en ambos casos. Asimismo, los sistemas electorales de los dos países presentaban las características que en el segundo capítulo asocié con la representación de los intereses partidistas a costa de los intereses de los electores: representación proporcional con listas cerradas. Las élites políticas de ambos países coincidieron en que el cambio del sistema electoral elevaría los niveles de representatividad del sistema, eligiendo el sistema proporcional personalizado como el conducente al logro de este objetivo.

Ahora llevemos estos hechos a la discusión sobre la estrategia de investigación. Cuando se controla por los factores causales relevantes, verificar el efecto positivo de un cambio en el sistema electoral sobre el nivel representatividad implicaría comparar un caso en el que el cambio fue emprendido con otro en el que no se hubiese procedido al rediseño. Ahora bien, invirtiendo la cuestión, cuando en casos similares, como son Bolivia y Venezuela, se procede a un mismo rediseño institucional y la variable dependiente (la representatividad, entendida como confianza en las instituciones) no cambia, podemos decir con un alto grado de certeza que el diseño institucional específico que fue adoptado no es diferente, en términos de sus efectos, con respecto al diseño anterior. Para el caso que me ocupa, sostendré que, dado el valor de los factores que efectivamente intervienen en la relación entre representantes y representados, los resultados habrían sido exactamente los mismos si la reforma al sistema electoral no se hubiese emprendido en absoluto.

Sin duda resulta poco convencional una investigación argumentando en favor de la ausencia de un efecto causal, operación que parece contraindicada por los manuales de metodología. Otro tanto se podría decir del procedimiento de imputar a actores políticos reales una acción conducida bajo una hipótesis determinada, para después, desde el análisis académico, proponer que estaban errados en la hipótesis que guió sus acciones. Sin embargo, el planteamiento que desarrollo aquí no sólo es que el cambio institucional se

reveló empíricamente inefectivo, sino que existían razones teóricas suficientes como para predecir que no se daría el efecto esperado. En todas las decisiones políticas subyace una hipótesis causal (así sea en términos de esperanza), y no parece ocioso el confrontarlas con los conocimientos acumulados en la academia, con mayor razón si estos conocimientos son sistematizados metódicamente y, de esa forma, se supera el nivel de opiniones informadas que caracteriza el debate entre intelectuales en los medios de comunicación. En este sentido, lo que presento aquí es una suerte de diagnóstico del impacto de una medida determinada. Creo que un diagnóstico de este tipo habría sido útil antes de emprender la reforma en estos países, si no para tomar una mejor decisión, al menos para no llevar a cabo una enorme inversión en el cambio institucional en la medida en que representó un costo de oportunidad en países con muchos problemas que atender.

Por otro lado, el hallazgo de efectos nulos no es común en la investigación cualitativa debido a limitaciones propias de este tipo de estrategia. En el análisis estadístico, es posible incorporar un número amplio de variables independientes y evaluar el impacto de cada una sobre la variable dependiente. Si el objetivo del análisis se reduce a éste, al revisar el nivel de significancia para cada coeficiente podemos, en una sola operación, confirmar si existe evidencia en apoyo del impacto causal de unas y de la ausencia de dicho impacto en otras.

En la comparación cualitativa esto no es verdad. La exigencia de homogeneidad de las unidades dificulta el someter a contrastación, simultáneamente, hipótesis sobre más de una variable. Debido a esto, la norma es que las investigaciones privilegien la búsqueda de efectos causales verificados efectivamente, en detrimento del descartamiento de hipótesis empíricamente fundamentado (por lo general se realiza en el nivel teórico). Sin llegar al absurdo de proponer un cambio radical a esta norma, me parece que la estrategia que aquí escojo es una forma de integrar la falsación en la investigación cualitativa.

De acuerdo con los principios teóricos establecidos en el capítulo II y la evidencia mostrada en el capítulo III, las variables por las que debo controlar son: la sensibilidad del electorado al desempeño de las instituciones, la evaluación de dicho desempeño y la evaluación del comportamiento de la clase política, por ser aquellas claramente relacionadas con la confianza en las instituciones políticas. En la primera sección describiré las características de los procesos vividos en Bolivia y Venezuela desde la perspectiva del desempeño

institucional y los resultados electorales. Presentaré evidencia en el sentido de que el comportamiento electoral era, a grandes rasgos, consistente con los resultados económicos, y cómo este mecanismo no necesariamente mejoraba la calidad de dichos resultados. Después mostraré que ambas comunidades políticas presentan esencialmente las mismas condiciones en lo que se refiere a la evaluación de los resultados y del comportamiento.

A continuación, expondré la reforma institucional emprendida en Bolivia y Venezuela para, después, confrontar estos datos con la evolución de la confianza en las instituciones, en donde a mi juicio quedará claro que el impacto fue nulo. Presento una explicación de por qué el cambio en el sistema electoral no trajo los efectos deseados, para después especular sobre los motivos que llevaron a las élites a escoger un diseño inadecuado,⁷⁷ existiendo otras alternativas conocidas. Termino con un sumario de los resultados.

Desempeño económico y resultados electorales

Los dos países de nuestro estudio atravesaron por crisis severas y programas de estabilización identificados con las políticas neoliberales. Estos programas de “píldora amarga” prescriben medidas que en el corto plazo producirán reducciones considerables en el consumo. Se asume que, pasado un período de sacrificio, la recuperación traerá beneficios que superarán los resultados de una hipotética continuidad de las políticas anteriores al ajuste (Przeworski, 1995). En ambos casos, las políticas de estabilización siguieron a caídas en el ingreso ocurridas durante gestiones que seguían modelos de intervención estatal en la economía, si bien la respuesta fue ligeramente más tardía en Venezuela que en Bolivia.

Venezuela

El cuadro 5.1. presenta dos indicadores para evaluación de desempeño de la gestión presidencial. Los dos indicadores tratan de reproducir dos posibles perspectivas que puede

⁷⁷ El término “adecuación” será muy socorrido en adelante para referirme a los problemas de diseño institucional enfrentados en los países de este estudio. Me apresuro a aclarar que no me refiero a criterios normativos sobre lo que yo considero una representación “adecuada”, o para el caso, los mismos actores involucrados. El sentido de la expresión es absolutamente técnico: un diseño es adecuado o inadecuado si sus características conducen o no a los objetivos que explícitamente se perseguían con él.

adoptar un elector retrospectivo. La primera de ellas es comparar el valor de su ingreso real al finalizar la gestión presidencial con el valor del ingreso que tenía cuando culminaba la gestión inmediatamente anterior. La segunda medida pretende captar el avance de la promesa neoliberal. Para ésta, las ganancias en eficiencia en la asignación de los recursos que se obtienen al desregular la economía son tales que superan lo que es capaz de realizar la estrategia de intervención estatal. Por lo tanto, nuestro elector tiene buenas razones para comparar, en el momento de las elecciones, su ingreso real con el valor máximo registrado durante el período de intervención. Estaría justificado en suponer que, en algún momento, esa marca se tiene que superar. En Venezuela, ese año fue 1977.

Cuadro 5.1. Indicadores de desempeño económico. Venezuela. 1969-1999

Presidente	Partido	Período	Variación del PIB per cápita real entre gestiones (%) *	PIB per cápita real en último año de gestión. 1977 = 100
Rafael Caldera	COPEI	1969-1974	0.92	95.79
Carlos Andrés Pérez	AD	1974-1979	3.15	98.81
Luis Herrera	COPEI	1979-1984	-21.65	77.42
Jaime Lusinchi	AD	1984-1989	5.29	81.52
Carlos Andrés Pérez/ Ramón J. Velázquez	AD	1989-1994	0.05	81.56
Rafael Caldera	Convergencia	1994-1999	-2.85	79.23

Cálculos propios con base en datos de WB (2004b)

* Diferencial del último año de la gestión en curso con respecto del último año de la gestión anterior

Ambos indicadores de “corte de caja” muestran un desempeño incapaz de dar marcha atrás al deterioro. Durante la primera gestión de Carlos Andrés Pérez ocurre el *boom* petrolero que lleva al país a registrar el nivel más alto del PIB per cápita. Luis Herrera, en primera instancia, quiso capitalizar el flujo de recursos incurriendo en sobregasto. La crisis de los precios del petróleo y una devaluación consecuente llevaron a que esta sea la gestión con peores resultados en el período considerado. Al concluir su mandato, el ingreso había perdido cerca del 23% de su valor con respecto a 1977. Lusinchi consiguió detener la caída y, desde 1987, cierta recuperación. Sus medidas no se salieron de los parámetros de la política intervencionista, compartida por los actores políticos relevantes. Fue Carlos Andrés Pérez quien se encargó de llevar a cabo su política de ajuste, pomposamente bautizada “El

Gran Viraje”. El efecto inmediato de la política de *shock* fue una caída del PIB per cápita real de 11 puntos. En los años siguientes, hubo una recuperación sostenida, pero apenas suficiente para que, al momento de las elecciones, los votantes se encontraran exactamente donde estaban cuando Pérez inició su gestión. Caldera inicia su presidencia con medidas erráticas, alternando entre la reversión del programa neoliberal y su posterior aplicación renuente. Durante su período, el PIB per cápita tiene un comportamiento cíclico, pero al finalizar éste los electores se encuentran con que están peor que al concluir la desastrosa gestión anterior. Cuando Caldera entrega el poder, los venezolanos estaban apenas mejor que cuando finalizó la presidencia de Herrera (i.e., como si acabaran de pasar una gran crisis económica) y su ingreso había perdido más de una cuarta parte del valor con respecto al mejor año de la economía venezolana.

Vale la pena revisar algunas otras medidas de gestión. Por ejemplo, si un programa de ajuste debe ser exitoso en algo, esto es el control inflacionario. Resulta curioso que en Venezuela el problema de precios no era particularmente agudo. Entre 1980 y 1988, la inflación promedio fue de 16.2 por ciento. En los dos últimos años completos de la gestión de Lusinchí los precios subieron en más de 20 puntos, pero esto no se acerca a la experiencia de otros países. Podría decirse que las medidas de Pérez tuvieron un carácter preventivo en este sentido. Si esa fue la intención, el desempeño en este rubro también es fatal: entre 1989 y 1998 la inflación promedio fue de 53 por ciento anual (WB, 2004b). El cuadro 5.2 presenta cifras relativas a la pobreza y el empleo.

Puede apreciarse que los venezolanos pasaron por tres grandes impactos en estos indicadores. El primero es el impresionante incremento en la pobreza extrema que se registra durante la gestión de Caldera. Los otros dos corresponden al desempleo. Con Herrera el desempleo se duplica. Después, tras una recuperación del empleo hasta volver prácticamente a los mismos niveles que en 1981, el desempleo repunta para registrar (al concluir la gestión de Caldera) el nivel más alto del período considerado.

Cuadro 5.2. Desempeño social. Venezuela
1981-1999.

Año	Pobreza extrema*	Desempleo **
1981	7.52	6.3
1984	7.06	13
1987	6.6	9.2
1990	2.97	10.4
1993	2.66	6.7
1996	14.69	11.8
1999	15.37	14.9

*% de habitantes que percibe 1.08 dólares diarios, PPC, 1993. (WB: 2004a)

**% de fuerza de trabajo (WB: 2004b)

Bolivia

A continuación reproduzco la evolución de los mismos indicadores en Bolivia. De este país se puede decir que, a diferencia de lo que sucedió en Venezuela, la política de ajuste fue antecedida de una crisis inflacionaria severa, por lo que había un ambiente más receptivo a los argumentos en favor de su indispensabilidad. Asimismo, la aplicación del ajuste fue más disciplinada y consistente en el tiempo, lo que se refleja en mejores niveles de desempeño en algunos de los indicadores. El cuadro 5.3. muestra los indicadores de desempeño económico. El *benchmark* también es el PIB per cápita real de 1977. Cabe señalar que este nivel, a diferencia de Venezuela, no se registró en condiciones democráticas, sino durante la dictadura de Hugo Banzer (1971-1978).

La economía boliviana había comenzado a declinar desde 1979 a la vez que asomaban tendencias inflacionarias. Hernán Siles fue electo ofreciendo un programa de recuperación económica con intervención estatal. Sin embargo, su gestión se caracterizó por el deterioro del PIB per cápita y la hiperinflación. Víctor Paz aplicó de inmediato una política de *shock* que detuvo la inflación a partir de 1986, mientras que la recuperación comenzó un año después, pero a un ritmo tan lento (menos de uno por ciento anual, en promedio), que dejó el ingreso en términos peores que a su arribo. Los dos gobiernos siguientes se mantuvieron en la línea de las políticas neoliberales, y ambos consiguieron incrementos considerables del ingreso. En el rubro de abatimiento de la inflación, el desempeño no podría ser mejor.

Entre 1980 y 1985 el promedio anual de crecimiento de los precios fue de 2,251.5 por ciento; en 1986 fue de 276.3 por ciento, y entre 1987 y 2002 se registra un promedio anual de 9.8 por ciento.

Cuadro 5.3. Indicadores de desempeño económico. Bolivia. 1982-2002

Presidente	Partido	Período	Variación del PIB per cápita real entre gestiones (%) [*]	PIB per cápita real en último año de gestión. 1977 = 100
Hernán Siles	UDP	1982-1985	-11.08	77.53
Víctor Paz	MNR	1985-1989	-2.036	75.95
Jaime Paz	MIR	1989-1993	5.75	80.32
Gonzalo Sánchez	MNR	1993-1997	7.98	86.72
Hugo Bánzer/ Jorge Quiroga	ADN	1997-2002	0.64	87.28

Cálculos propios con base en datos de WB (2004b)

^{*} Diferencial del último año de la gestión en curso con respecto del último año de la gestión anterior

Este patrón se detiene en la gestión de Bánzer, predominantemente recesiva. Para el año 2000, el nivel de ingreso de los bolivianos era superior al que tenía tras la crisis de los ochenta, pero aún representaba el 87.3 por ciento con respecto al nivel de 1977. Con todo, no es posible hablar de un completo fracaso del desempeño económico como lo fue en Venezuela. El problema, como puede verse en el cuadro 5.4, consiste en los resultados desiguales del desempeño económico.

Cuadro 5.4. Desempeño social.
Bolivia 1990-2001.

Año	Pobreza extrema [*]	Desempleo ^{**}
1990	5.68	7.3
1993	5.02	6.0
1996	21.06	3.8
1999	14.38	7.2
2001	14.52	5.2
2002	n.d.	8.7

^{*}% de habitantes que percibe 1.08 dólares diarios, PPC, 1993 (WB, 2004a).

^{**}% de fuerza de trabajo. WB (2004b), para 1990-2001; INE (2005).

Una vez más, vemos que el incremento en la pobreza extrema entre 1993 y 1996 es considerable. Llama la atención que esto ocurre precisamente durante la gestión más exitosa en términos de incremento del producto. Aunque en 1999 se registra una reducción

de la pobreza, ésta seguía siendo casi tres veces mayor que la de 1993. En lo que se refiere al desempleo, tenemos que el carácter recesivo del gobierno de Bánzer revirtió los importantes avances que se habían logrado en este rubro.

Para los dos países, entonces, tenemos una incapacidad de la gestión económica para llevar el producto a los niveles anteriores a la crisis. Esto no necesariamente es un problema cuando existen signos de recuperación sostenida, como lo fue durante un tiempo en Bolivia. Pero, con recuperación o sin ella, el deterioro de los indicadores sociales tiende a ajustar a la baja la utilidad obtenida por el incremento. Cuando, después de una crisis severa, la pobreza y el desempleo se difunden, es de esperarse que se reduzca el horizonte temporal de quienes vieron empeorar aún más su situación; en una palabra, que se vuelvan impacientes y menos dispuestos a esperar el momento en que se cumpla la promesa neoliberal.

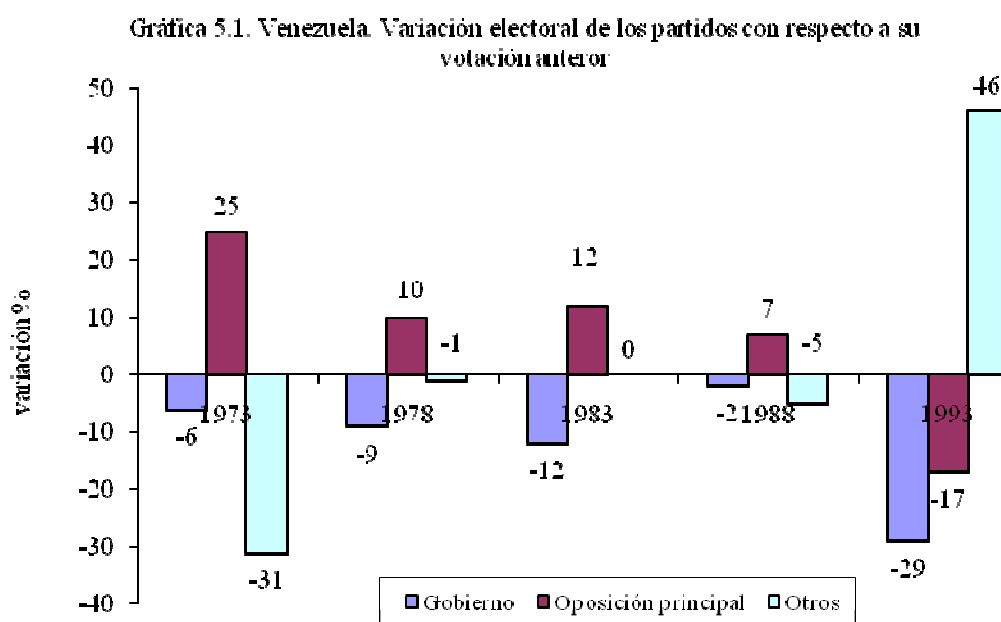
La reacción electoral al desempeño económico

Los sistemas de partidos de Venezuela y Bolivia presentaban un alto grado de consolidación, al menos en lo que se refiere a la generación de organizaciones permanentes, identificables y orientadas a la gestión gubernamental. En Venezuela, desde 1963 Acción Democrática (AD) y el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) predominaron en las preferencias electorales, alternándose en la presidencia y relegando al resto de los partidos a un papel muy secundario, con el Movimiento al Socialismo (MAS) en un tercer lugar lejano (Kornblith y Levine, 1995). En Bolivia, por su parte, se desarrolló un patrón de competencia alrededor de tres partidos que han venido sucediéndose en el gobierno: por un lado, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y, por el otro, la coalición formada por Acción Democrática y Nacionalista (ADN) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) (Gamarra, 1997). Estos tres partidos conviven con una multitud de partidos pequeños con fortuna y duración muy diversas.

En ambos casos, se presentaron dos características generales en los patrones de votación. La primera de ellas fue una reiterada desaprobación de la gestión presidencial en turno, como queda mostrado por el hecho de que en cada elección el candidato del partido en el gobierno reducía la proporción de votos en comparación con la recibida por el gobierno en

funciones. La segunda característica consiste en que la reducción de la votación conjunta de los partidos tradicionales vino asociada con ganancias en favor de candidatos populistas.

La gráfica 5.1 muestra los respectivos *swings* de votación para el partido en el gobierno y para el partido de la oposición en Venezuela. En 1973, AD se benefició no sólo de la caída en la votación del gobernante COPEI, sino del declive, debido a motivos internos, de la Unión Republicana Democrática, capturando el voto liberado por este partido. En las elecciones de 1978 y 1983, los intercambios entre el partido en el gobierno y el partido de la oposición son simétricos, y en magnitud suficiente para producir la alternancia. En las elecciones de 1988, cuando Carlos Andrés Pérez fue electo por segunda ocasión, el signo negativo de la diferencia de votos puede resultar un tanto engañoso. En primer lugar, se debe tomar en cuenta que Lusinchi, el presidente en funciones, había sido electo con 55 por ciento.



Con datos de Crisp (1997) y PDBA (2002)

Por otro lado, está claro que los votos ganados por COPEI fueron a costa de la votación de los partidos más pequeños. Lusinchi había logrado revertir la crisis ocurrida durante el período de Herrera y la primera gestión de Pérez era en este momento valorada como una época de prosperidad (McCoy, 1999; Coppedge, 2005), por lo que debemos interpretar esta

elección como una reiteración por parte del electorado de la mayoría a AD, con la expectativa de continuar con el camino de la recuperación. La pérdida de 2 puntos para este partido debe ser interpretada en los términos del “costo por gobernar”.⁷⁸

El fracaso de la administración de Pérez dio lugar a que su partido registrara una caída sin precedentes. Sin embargo, en esta ocasión COPEI no se benefició de ella, sino que también su votación cayó. Parece ser que Herrera y Pérez se encargaron de demostrar que era el bipartidismo lo que no funcionaba como tal, y no sus integrantes en lo particular. Esto favoreció en primer lugar al candidato populista de 1993, Rafael Caldera, si bien varios electores aún buscaron alternativas dentro del sistema de partidos existente, especialmente Causa Radical, partido de izquierda que pasó de la irrelevancia a una votación de 22 por ciento, igual a la de COPEI (Crisp, 1997).

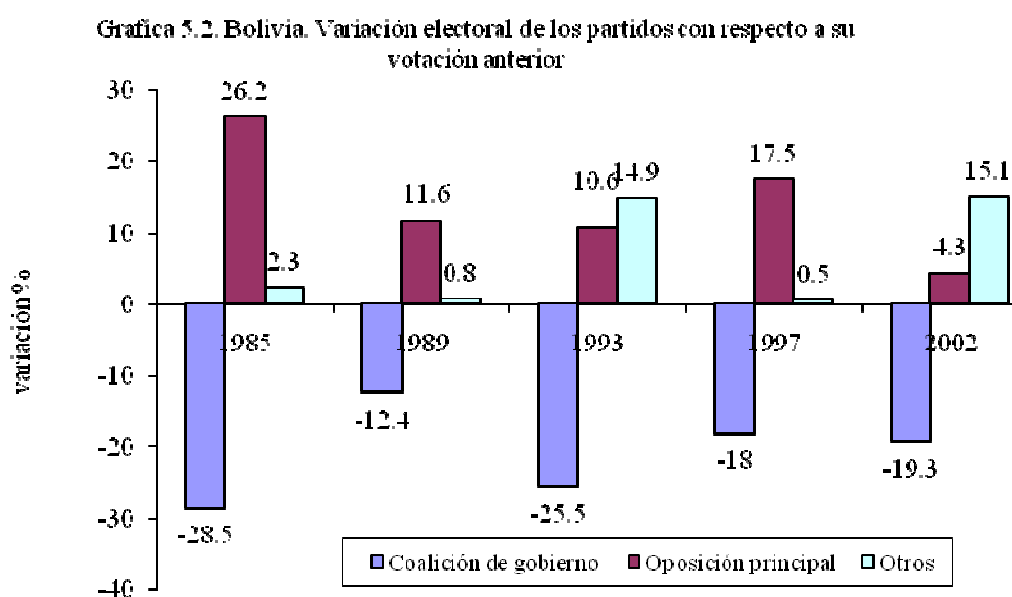
Los malos resultados de Caldera pudieron haber confirmado aún más la mala impresión que ya generaba el bipartidismo. No sólo porque sus antecedentes lo convertían en un miembro prácticamente emblemático de la clase política. Su partido, Convergencia, creado al vapor, únicamente alcanzó el 12 por ciento de los escaños en la cámara baja, mientras que los dos partidos tradicionales sumaban el 53 por ciento (Kulisheck y Crisp, 2001). Durante su tránsito de la heterodoxia a la ortodoxia, Caldera requirió y obtuvo el apoyo en el congreso de los partidos a los que había repudiado en campaña (Crisp, 1997), arrastrándolos en su descrédito. Comenta Roberts (2003: 65): “su gobierno personalista no resucitó a los partidos tradicionales ni construyó uno nuevo viable para llenar el vacío político dejado por su desaparición”. Convergencia ni siquiera presentó candidato presidencial en la elección de 1998.⁷⁹

En Bolivia, el consenso en la clase política alrededor de la economía de mercado hizo que las políticas públicas fuesen insensibles a los cambios en la votación y a la alternancia de gobierno. En anticipación al descontento social que las medidas habrían de provocar, cada uno de los gobiernos entre 1985 y 2002 acompañó su paquete económico de la promulgación del estado de sitio (Gamarra, 1997). La gráfica 5.1 muestra los *swings* de

⁷⁸ Esta expresión refiere a una regularidad empírica, la pérdida promedio de 1.65% del voto para el partido en el gobierno entre una elección y otra. Para un intento por explicar este fenómeno véase Paldam y Skott (1995).

⁷⁹ De ahí que no sea posible reportar datos para este año en la gráfica 5.1.

votación para los partidos que en su momento encabezaban la coalición de gobierno de los tres partidos dominantes, los partidos predominantes que se hallaban en la oposición y el resto de los partidos. El patrón aquí es incluso más marcado que el observado en Venezuela. En promedio, los partidos que integraban la coalición de gobierno reducían su votación en 21 puntos en la siguiente elección, mientras que la volatilidad electoral era, en promedio, de 25 puntos.



Con datos de Salazar Elena (2004)

En síntesis, los dos países considerados para este estudio comparten, en cuanto al comportamiento del electorado, una alta sensibilidad al desempeño de las instituciones. Por una parte, las cuentas entregadas por las respectivas gestiones presidenciales mostraban resultados bastante pobres, de acuerdo con indicadores objetivos de desempeño económico y social. Por la otra, los resultados electorales agregados muestran que los electores no fueron indiferentes a la evolución de estos indicadores, imprimiendo el castigo electoral correspondiente al partido o coalición gobernante y responsable de los resultados.

Evaluación de los resultados

Una vez establecido que la respuesta de los electores al desempeño presenta condiciones similares en Bolivia y Venezuela, el paso siguiente es determinar hasta qué grado la población de ambos países presentaba similitud en cuanto a la evaluación subjetiva de estos resultados. Hasta el momento, lo que hemos revisado pretende confirmar que el electorado en los dos países de estudio presentaba un comportamiento que favorecía la corrección por parte de las élites de las decisiones tomadas (*vid.* gráfica 2.1., *supra*). Ahora es momento de orientar el argumento hacia los efectos de esta operación sobre la confianza en las instituciones. El primer paso consiste en verificar si hasta qué punto los resultados producidos por el régimen eran evaluados positivamente por los electores. En el capítulo 2, mostré que la satisfacción con la democracia y la evaluación de la situación económica actual condicionan, parcialmente, el nivel de confianza en las instituciones políticas. Con el fin de simplificar el análisis, utilizo únicamente la satisfacción con la democracia, toda vez que es una variable que, por un lado, responde a la evaluación de la situación económica y, por el otro, parece abarcar un conjunto más amplio (si bien indeterminado) de bienes que se espera entregue un régimen democrático.

Presentar una evolución simple de este indicador para los dos países y, a partir de ahí, inferir conclusiones comparando los valores en el tiempo y entre los países, puede llevar a resultados engañosos. Por ejemplo, entre 1996 y 1997 el porcentaje de personas satisfechas con la democracia pasó de 24.7 a 33.3 en Bolivia, lo que parece marcar un cambio muy importante en el período; sin embargo, el total para los 17 países de la región pasó, en el mismo indicador, de 27.4 a 40.6 por ciento, por lo que parece ser que Bolivia únicamente acompañó una tendencia regional, sin destacarse por presentar una evaluación superior a la media. En este sentido, el paso de Venezuela en el mismo período 30 a 35.8 por ciento podría no ser un incremento en términos efectivos. Asimismo, el 30 por ciento de satisfechos con la democracia en Venezuela –1996 podría tener implicaciones que no observaríamos si sólo lo comparamos, por ejemplo, con el 34.3 por ciento de Bolivia en 1998, año en que los países de la región registraron en promedio 36.4 por ciento de satisfacción. Es decir, este indicador parece mostrar un carácter cíclico y regional que es

reflejado en los valores que adquiere en cada país en el tiempo. Este hecho debe ser controlado si se quiere comparar adecuadamente.

En conclusión, para saber si y cuando las condiciones son homogéneas en los países de estudio, se requiere de algún criterio de comparación. El criterio elegido es relativamente sencillo. Calculo en cada año los porcentajes para cada uno de los 17 de países de América Latina de los que dispongo datos y obtengo en cada caso el valor del residuo estandarizado. Este estadístico es una medida de la desviación del valor observado en la frecuencia correspondiente a un subgrupo (en este caso, el país) con respecto al valor esperado que tendría si la distribución fuese igual a la del conjunto de los datos (el total para los 17 países), expresado en unidades de desviación estándar con respecto a la media.⁸⁰

Así, cuando para la respuesta “muy satisfecho/más bien satisfecho” a la pregunta sobre la situación económica actual del país, el residuo estandarizado es igual o menor a -1, considero que el país en cuestión tiene condiciones especialmente conducentes a niveles altos de desconfianza en las instituciones políticas. El cuadro 5.5. muestra una relación de los países que, en cada año, se encontraban en esta situación.

Para determinar si y cuándo son homogéneas las variables relevantes, tenemos que tener en cuenta las motivaciones y los objetivos de la reforma al sistema electoral emprendida en nuestras unidades de análisis. Como expondré en la siguiente sección, la reforma enfrentó una situación de desconfianza en las instituciones e intentó elevarla acercando a los representantes con los electores, modificando los mecanismos de integración de la cámara baja.

De esta forma, una vez demostrada la similitud en cuanto a la sensibilidad de los electores al desempeño, constante en ambos casos para todo el período, considero que las condiciones son homogéneas si los indicadores relativos a la evaluación del desempeño se encuentran en niveles bajos. Como puede observarse, sean cuales sean las variaciones puntuales registradas en Bolivia, este país durante todo el período se encuentra en el grupo de baja satisfacción con la democracia. Por su parte, Venezuela está en tal grupo en los años 1997 y 1998. Así, una primera conclusión es que, para el período analizado hasta

⁸⁰ Hago notar que estos datos disponibles son escasos para Venezuela, de los que sólo nos interesa en este apartado el período 1996-1998. En las conclusiones haré una breve reflexión sobre los cambios registrados en este país a partir del año 2000.

ahora, ambos países comparten una baja evaluación subjetiva del funcionamiento de sus respectivas democracias (con la excepción de Venezuela en 1996).

Cuadro 5.5. Satisfacción con la democracia en América Latina (1996-2002)

residuo estandarizado (re)	1996	1997	1998	2000	2001	2002
re ≤ -1	Bolivia , Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay	Bolivia , Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela	Bolivia , Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela	Bolivia , Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú	Argentina, Bolivia , Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú	Argentina, Bolivia , Brasil, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú
re > -1	Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú, Uruguay, Venezuela	Argentina, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Uruguay	Argentina, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Uruguay	Argentina, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Uruguay, Venezuela	Costa Rica, Chile, Honduras, México, Uruguay, Venezuela	Costa Rica, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Uruguay Venezuela
17 países	27.4%	40.6%	36.7%	36.2%	25.1%	32.9%

Fuente: A partir de datos de Latinobarómetro

De todas estas unidades, únicamente para Bolivia en 1996 y 1997 estaba vigente el sistema de representación proporcional por listas cerradas. En el resto de los años el sistema electoral fue el proporcional personalizado. Para Venezuela, la totalidad de los datos disponibles corresponde a los años en los que se encontraba en vigor el sistema proporcional personalizado, cuyas reglas comenzaron a operar a partir de las elecciones de 1993. Así, si el sistema electoral produjo alguna diferencia, los niveles de confianza en Bolivia tendrían que ser mayores en el período 1998-2002 que en 1996-1997; en correspondencia, los niveles de confianza en Venezuela tendrían que ser similares a los de Bolivia en este período. Antes de verificar si esta expectativa se cumple, expondré brevemente las características de las reformas emprendidas en ambos países.

Reforma de los sistemas electorales

Bolivia y Venezuela compartían un sistema electoral de representación proporcional en el que los electores votaban por listas de candidaturas, sin posibilidad de manifestarse por candidatos particulares. Se entiende que este sistema es el más propenso a que los diputados, con el fin de obtener en el futuro un lugar favorable en la lista, atiendan más a las instrucciones del liderazgo partidista que a las necesidades de los electores (Shugart, 2001). En los dos países de estudio, las élites de los partidos tradicionales advirtieron de manera temprana los signos de desconfianza en las instituciones y buscaron resolverla con la reforma institucional.

En Venezuela, los críticos acusaban a los partidos tradicionales de monopolizar a su favor funciones que correspondían a la sociedad civil (Crisp y Rey, 2001: 180). En Bolivia, diversas encuestas señalaban que buena parte de la población, aunque consciente del papel central de los partidos políticos en la democracia, sentía que a éstos no les preocupaban los problemas de la gente y les generaban desconfianza. Adicionalmente, las manipulaciones fraudulentas en la Corte Nacional Electoral con las que el MIR y ADN incrementaron sus respectivas votaciones en las elecciones de 1989 produjeron una demanda de cambio, aunque vaga, generalizada (Mayorga, 2001a: 197, 200).

En ambos países se escogió para la cámara de diputados un sistema electoral conocido como “proporcional personalizado”. En el nivel más superficial, este sistema consiste en una composición mixta del cuerpo colegiado: alrededor de la mitad de sus miembros son electos por mayoría relativa en circunscripciones uninominales (CUN), mientras que el resto es electo por representación proporcional a listas de partidos en circunscripciones plurinominales (CPN). Se esperaba que la parte originada en las CUN haría más representativo el sistema con diputados directamente responsables ante sus electores.

En Bolivia, los partidos retomaron la preocupación manifestada en la sociedad civil y la llevaron a una discusión amplia en el Congreso, en donde, tras debatir la posibilidad de usar un sistema electoral constituido exclusivamente por CUN con mayoría relativa, se terminó aprobando, con el consenso de todos los partidos, el sistema proporcional personalizado como el más adecuado para, en los términos del comité encargado del proyecto, “fortalecer la representatividad del sistema y la legitimidad del parlamento al hacer posible la

responsividad y la rendición de cuentas de los diputados hacia sus electores” (Mayorga, 2001a: 204-5).

En Venezuela, para 1989, los partidos no habían alcanzado un consenso sobre el tema, pero entre intelectuales, asociaciones de vecinos, los medios de comunicación y el sector privado se tenía por descontado que las elecciones por mayoría relativa en CUN acercaban al elector con su representante. Ante la popularidad del tema, el presidente Pérez y AD modificaron su posición anterior, adversa a cualquier reforma, y se sumaron a COPEI en su propuesta favorable a un sistema proporcional personalizado, aprobándolo contra la oposición de todos los partidos pequeños (Crisp y Rey, 2001: 185-6).

Resultados de la reforma sobre la confianza en las instituciones

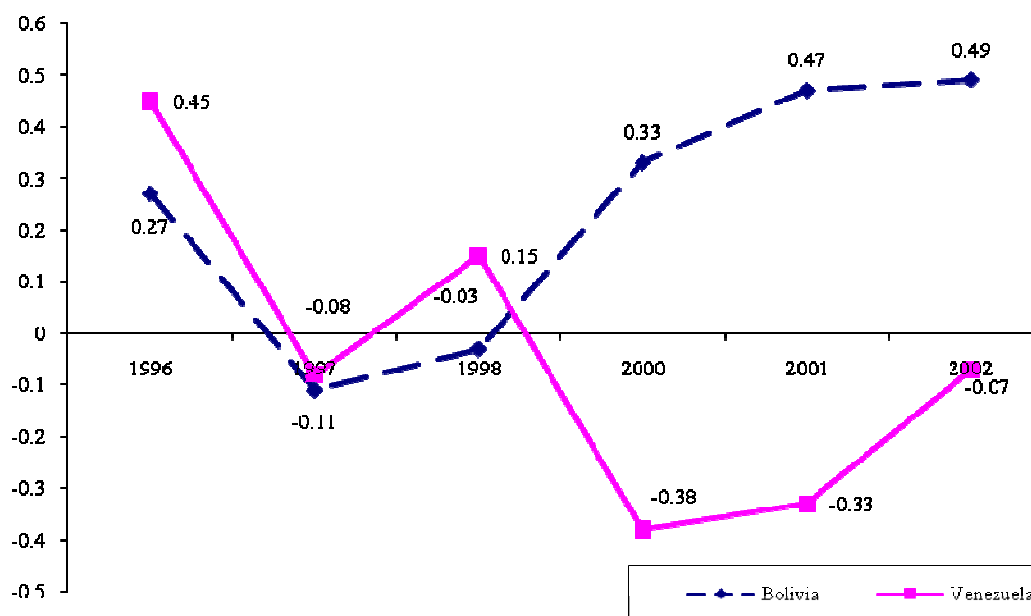
Los resultados no podían ser más contrarios a lo esperado. En el terreno de las actitudes de los diputados, es muy notable que los políticos electos en CUN, bolivianos y venezolanos, *sintieron* que debían ser más cercanos a los electores que los eligieron y sensibles a sus demandas, pero su *comportamiento* legislativo no se distinguió gran cosa del de los diputados electos por listas, especialmente en términos de disciplina parlamentaria. De igual forma, las dirigencias de los partidos mantuvieron el mismo control sobre las candidaturas de antes de las respectivas reformas, tanto las nominales como las de lista (Kulisheck y Crisp, 2001; Mayorga, 2001b).

Esta impresión queda reforzada con los datos de la gráfica 5.3. En ella, se muestra el promedio del índice de desconfianza en las instituciones políticas de cada país. Utilizo el puntaje obtenido con los métodos reportados en el capítulo 2, de tal forma que los datos para cada país son comparables entre sí y con los del otro país.

Al observar los valores comparables para Bolivia, tenemos que, paradójicamente, la desconfianza en el período 2000-2003 (con sistema proporcional personalizado) no sólo no es menor a la de 1996 y 1997 (sistema de representación proporcional con listas cerradas), sino que es mayor y en forma creciente. Por otro lado, en lo que respecta a los años comparables de Venezuela, vemos que en 1997 registra un valor similar al de Bolivia para ese año, sólo para moverse hacia la mayor desconfianza en 1998. Es decir, que los niveles de desconfianza en Venezuela, en 1997 y 1998, con el sistema proporcional personalizado,

no parecen muy distintos a los de Bolivia entre 1996 y 1997, con el sistema de listas cerradas. En realidad, la desconfianza en Venezuela cambia (descendiendo) hasta que las condiciones (satisfacción con la democracia) cambian también, sin que parezca haber un efecto de la reforma al sistema electoral. Estos datos parecen indicar que, descontando el efecto de las evaluaciones subjetivas del desempeño y del comportamiento, el sistema electoral de tipo proporcional personalizado no tiene efectos sobre la confianza en las instituciones que se distingan de los efectos del sistema de representación proporcional con listas cerradas.

Gráfica 5.3. Bolivia y Venezuela. Índice de desconfianza en las instituciones políticas (1996-2003)



Fuente: calculado con base en datos de Latinobarómetro.

Podría decirse, no obstante, que es una condición muy exigente el vincular las reformas al sistema electoral con cambios en los niveles de confianza. De hecho, en el segundo capítulo de este estudio aventuré que, de tenerlo, el efecto del sistema electoral sería sobre el comportamiento percibido en la representación política. Así, los cambios en el sistema electoral pudieron haber “acercado” a los electores con sus representantes, pero sin que esto se reflejara en los niveles de confianza debido a la influencia sobre éstos por parte de otras variables; por ejemplo, la evaluación de la situación económica. Las investigaciones citadas

poco más arriba parecen desmentir de antemano esta posibilidad; sin embargo, tal impresión puede ser confirmada con los indicadores que aquí he venido utilizando.

Cuadro 5.6. Corrupción ha aumentado mucho/poco. América Latina 1996-2002

residuo estandarizado (re)	1996	1997	1998	2000	2001	2002
re < 1	Bolivia , Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Perú,	Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Perú,	Bolivia , Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú,	Chile, Guatemala, México, Panamá, Perú, Uruguay, Venezuela	Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, México, Uruguay, Venezuela	Chile, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Uruguay, Venezuela
re ≥ 1	Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela	Argentina, Bolivia , Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Uruguay, Venezuela	Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Uruguay, Venezuela	Argentina, Bolivia , Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay,	Argentina, Bolivia , Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú	Argentina, Bolivia , Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay,
17 países de AL	85.4%	88.8%	88.4%	84.7%	89.7%	80.9%

Fuente: A partir de datos de Latinobarómetro

Para ello, reproduzco el uso del residuo estandarizado para evaluar de forma controlada hasta qué grado se han presentado cambios en la evaluación del comportamiento, medida con el porcentaje que contesta que la corrupción ha aumentado. Cuando el residuo estandarizado es igual o mayor que 1, interpreto que la evaluación del comportamiento es particularmente negativa en el país en cuestión. Los resultados se reportan en el cuadro 5.6.

Una vez más, no parece haber una contribución por parte del sistema electoral. Para los dos casos que tenemos de sistema con lista cerrada (Bolivia en 1996 y 1997), en uno la corrupción está en niveles altos y en el otro no. En cambio, de seis casos homogéneos en función del nivel de satisfacción con la democracia (Bolivia 1998-2002 y Venezuela 1997-1998), cinco presentan niveles particularmente altos de evaluación negativa del comportamiento de los representantes.

Evidencia adicional

Con el fin de apoyar esta conclusión, realicé una prueba que incluyera todas las unidades en las que se sostuviera la condición de homogeneidad; es decir, tomando del cuadro 5.5 las 56 unidades en las que el indicador de evaluación del desempeño tuviese un $r.e. \leq -1$. Realicé una prueba de comparación de medias en el porcentaje que considera que la corrupción ha aumentado para tres grupos: 1) aquellos cuyo sistema electoral es de representación proporcional con listas cerradas; 2) los correspondientes al sistema proporcional personalizado, y 3) todos los demás.

De acuerdo con los elementos teóricos que he venido manejando, en igualdad de condiciones (especialmente propensas a la desconfianza), la desconfianza tendría que ser mayor en los países con listas cerradas que en el tercer grupo; al mismo tiempo, si el sistema proporcional personalizado mejora la percepción del comportamiento de los políticos, se tendría que registrar una respuesta inferior a la que se da, en promedio, en los países con sistema de listas cerradas y al menos similar a la obtenida en el tercer grupo.⁸¹ El cuadro 5.7 muestra los promedios para cada uno de los grupos, mientras que el cuadro 5.8 presenta los resultados de la prueba de diferencia de medias entre cada grupo con el resto.

Cuadro 5.7. Corrupción ha aumentado. Promedio según sistema electoral

Sistema electoral	N	Media	Desviación estándar
RP lista cerrada	27	90.500	5.180
Proporcional personalizado	7	92.457	3.876
Otros	22	84.923	7.219
Total	56	.185	.355

Fuente: con base en datos de Latinobarómetro e IPU

Los resultados dan razones para pensar que, al menos en el nivel de las percepciones, los sistemas de tipo proporcional personalizado no mejoran el comportamiento de los políticos con respecto a lo que hacen los sistemas de representación proporcional con listas cerradas. Podemos observar que, cuando las condiciones para la confianza en las instituciones son malas en términos de evaluación del desempeño, el sistema de listas cerradas está asociado con una evaluación del comportamiento que es peor a la que se presenta en otras

⁸¹ El procedimiento que utilizo para obtener unidades comparables está inspirado en Ravallion (2001).

alternativas de diseño de sistema electoral, y esta diferencia es significativa en términos estadísticos. Los sistemas electorales de tipo proporcional personalizado, presentan niveles de evaluación del comportamiento de los políticos que, también en términos estadísticos, son iguales a los de los sistemas de representación proporcional con listas cerradas.

Cuadro 5.8. Corrupción ha aumentado. Diferencia de medias por sistema electoral

	Diferencia de medias	Error estándar	Sig.
RP lista cerrada – Otro	5.577	1.712	.005
Proporcional personalizado – Otro	7.534	2.586	.014
RP lista cerrada – Proporcional personalizado	-1.957	2.528	.720

Fuente: con base en datos de Latinobarómetro e IPU

Consecuencias en el sistema de partidos. El triunfo electoral del populismo.

Hasta ahora hemos visto que en Bolivia y Venezuela existieron condiciones que en buena medida propiciaban niveles bajos de confianza en las instituciones políticas. De acuerdo con el modelo teórico desplegado en el capítulo II de este estudio, las élites pueden elevar el nivel de confianza en las instituciones incrementando los niveles de ingreso del mayor número posible de personas. Sin embargo, las condiciones parecen no haber sido favorables a este camino. Mientras que en Venezuela el ajuste estructural había producido precisamente lo contrario, en Bolivia se suma a la política económica el hecho de que se trata de un país en condiciones tales de pobreza que las posibilidades de incrementos en el ingreso, rápidos y perceptibles, son muy restringidas. Cerrada esta vía, las élites optaron por la reforma a los sistemas electorales, con la expectativa de incrementar los niveles de representatividad de las instituciones. En la medida en que esta representatividad sea equivalente a (o se exprese en) altos niveles de confianza en las instituciones, la evidencia sugiere que este objetivo no fue logrado.

En esta sección abordo las consecuencias que tuvo sobre el sistema de partidos la persistencia de los altos niveles de desconfianza en las instituciones políticas. En el capítulo III vimos como, a nivel individual, esta desconfianza incrementaba las probabilidades de voto a favor de los candidatos populistas. Aquí veremos que, en el nivel agregado, este factor puede venir acompañado de una transformación del sistema de partidos imperante.

Dados los criterios de selección señalados en el capítulo I, los siguientes candidatos utilizaron un discurso populista en los países que aquí reviso: Rafael Caldera y Hugo Chávez, en Venezuela; Carlos Palenque, Max Fernández, Manfred Reyes y Evo Morales, en Bolivia. De ellos, Rafael Caldera tenía los mayores problemas de credibilidad, en la medida en que fue uno de los principales artífices del régimen político venezolano, presidente del país y cacique de uno de los dos partidos predominantes, con el que rompió por no haber conseguido la nominación en 1993 (McCoy, 1999; Coppedge, 2005). Manfred Reyes había iniciado su carrera política como figura menor del Movimiento Bolivia Libre y de ADN, pero rompió con ellos antes de darse a conocer por su trabajo como alcalde. Por su parte, Max Fernández y Carlos Palenque llegaron como genuinos *outsiders*, habiéndose desempeñado previamente como empresario cervecero y locutor de radio, respectivamente (Lazarte, 1998). Sin embargo, la participación de sus partidos en los gobiernos de Sánchez de Lozada y Hugo Banzer redujo después la posibilidad de percibirlos como actores ajenos a la *politics as usual*.

Tanto Evo Morales como Hugo Chávez presentan credenciales populistas impecables. Nada en su historial puede dar a entender que hayan sido, ni de lejos, parte de la dinámica política que criticaron en sus discursos. Hugo Chávez encabezaba desde los años ochenta a un grupo de oficiales de rango medio que, indignados moralmente por el comportamiento de los políticos y el trato que éstos daban al ejército, pretendieron en 1992 regenerar la vida nacional con un golpe de Estado que resultó fallido (Trinkunas, 2002). Tras una amnistía decretada por Rafael Caldera en 1994, se dispuso a capitalizar la simpatía popular que despertó su retórica conformando el Movimiento V República. Al presentar su candidatura presidencial, su partido conformó el Polo Patriótico con Patria Para Todos, creado en 1997, y el Movimiento al Socialismo, fundado en 1971, pero siempre ocupando un lugar marginal.

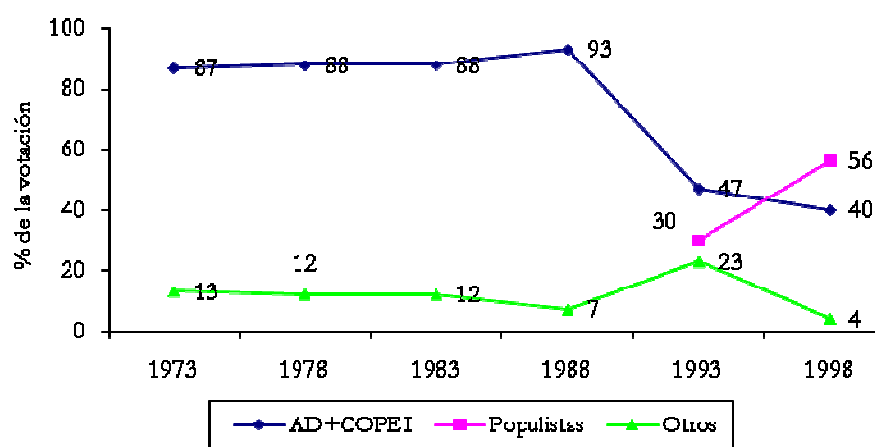
Por su parte, Evo Morales surge como dirigente de los campesinos cultivadores de hoja de coca en la región del Chapare. Desde 1987, esta actividad era considerada ilegal, por lo que la dirección de Morales tuvo una estrategia de confrontación con el Estado que, en 1997, se complementó con el acceso al congreso en calidad de diputado, tomando prestadas las siglas del partido Izquierda Unida (Van Cott, 2003; Healy, 1988). En enero de 2002, fue incluso expulsado de la legislatura por su participación en las protestas en contra de la

erradicación de la hoja de coca. Para las elecciones de 2002, él y su grupo habían desplazado íntegramente a la dirigencia del Movimiento al Socialismo (MAS), partido hasta entonces sin ninguna relevancia en la arena electoral (Bigio, 2002).

Venezuela

La gráfica 5.4 muestra cómo el populismo fue el beneficiario del declive electoral del sistema de partidos venezolano. Puede apreciarse que hasta 1988, los venezolanos resolvieron el descontento con el desempeño dentro del formato partidista predominante. En 1993, ese comportamiento se acabó cuando la votación conjunta de AD y COPEI se redujo, de golpe, a la mitad. En la siguiente ronda electoral, ambos partidos continuaron su declive, con el añadido de que el candidato populista, por sí sólo, obtuvo más de la mitad de los votos.

Gráfica 5.4. Evolución electoral de bloques de partidos en Venezuela



Con datos de Crisp (1997) y PDBA (2002)

De hecho, la elección de 1998 fue una contienda entre independientes. El descrédito de los partidos tradicionales era tal que, en sus intentos por apoyar a alguno de estos candidatos, fueron reforzando el carácter de excluido del ex golpista Chávez, incrementando la

intención de voto a su favor.⁸² Las investigaciones empíricas realizadas sobre esta elección muestran que se trató de una contienda entre ganadores y perdedores de la gestión económica (Roberts, 2003), ampliamente mediada por las actitudes con respecto a la satisfacción con el desempeño general de la democracia (Weyland, 2003a).

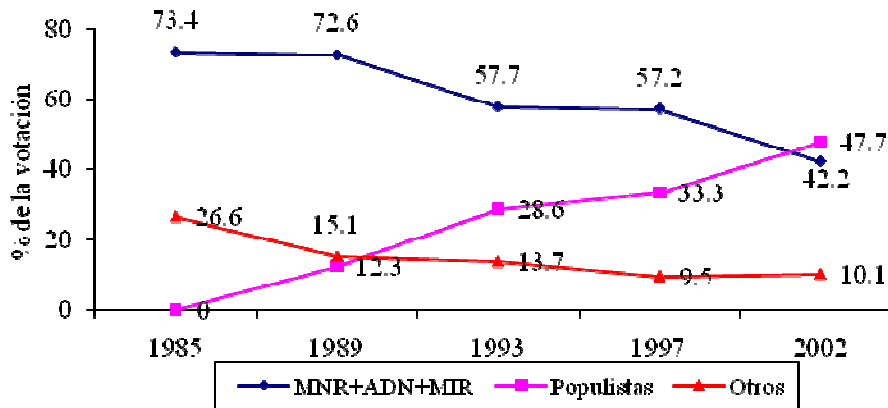
Bolivia

La gráfica 5.5 muestra cómo los partidos predominantes fueron perdiendo, como grupo, la capacidad de representar la fuente de alternativas para expresar el descontento en favor de los partidos populistas. El primer salto se presenta en 1993, cuando los partidos tradicionales enfrentan la competencia conjunta de CONDEPA (que había competido en 1989) y UCS. Estos partidos, no obstante el carácter confrontativo de su discurso, desarrollaron un estilo pragmático y se mostraron dispuestos a cooperar con los partidos tradicionales a cambio de mejoras para sus bases. El resultado de sus acciones parece haber sido el de integrar en el sistema político, sin modificarlo en sus fundamentos, a sectores antes excluidos (Mayorga, 2001). Sin embargo, el gobierno de Hugo Bánzer mostró una enorme incapacidad para el manejo del conflicto social, así como escasa voluntad para respetar acuerdos a los que había llegado con una sociedad civil crecientemente demandante (Mayorga, 2005).

En las elecciones presidenciales de 2002, el debate alrededor de la política económica y la corrupción de la clase política tradicional fue el tema central. Aunque, a diferencia de la elección de 1998 en Venezuela, en esta ocasión el populismo no fue llevado a la presidencia, los efectos disruptivos en el sistema de partidos son similares. Como votación agregada, las opciones populistas alcanzaron un nivel sin precedentes, similares a los obtenidos por Chávez en Venezuela en 1998. Los candidatos Evo Morales y Manfred Reyes, en segundo y tercer lugar, obtuvieron respectivamente el 20.94 y el 20.91% de la votación, separados por 721 votos, mientras que el primer lugar, Gonzalo Sánchez de Lozada, aventajó a Morales por sólo 1.5 puntos.

⁸² Irene Sáez comenzó la carrera como puntera, pero al aceptar la nominación de COPEI, la intención de voto a su favor cayó a 18 por ciento (de un 40 por ciento inicial). En un último intento por detener el avance de Chávez, AD y COPEI abandonaron a sus respectivos candidatos para apoyar al exgobernador y educado en Yale Enrique Salas Röemer. Con esto no consiguieron más que convertir a un candidato independiente (pero no populista) en el candidato del *establishment* (McCoy, 1999).

Gráfica 5.5. Evolución electoral de bloques de partidos en Bolivia



Con datos de Salazar Elena (2004)

Así que la diferencia en el resultado entre estos dos países no se debe a que en Bolivia el sistema de partidos tradicional haya estado menos desacreditado que en Venezuela, sino más bien a la dispersión del voto adverso a este sistema de partidos. Dicha dispersión, a su vez, tiene un condicionante institucional. De acuerdo con la investigación de Gary Cox (1997), cuando las elecciones por un solo puesto se realizan bajo la regla de mayoría relativa, la competencia real se decide entre los dos candidatos más viables, en quienes concentrarán su votación los electores interesados en que su decisión electoral influya en el resultado. En Venezuela, tanto los electores como la clase política se tornaron hacia dos competidores entre los que se decidió la contienda pro y anti sistema. En cambio, sigue el mismo investigador, en las elecciones de dos vueltas los candidatos viables son el que encabeza las encuestas y los dos que tienen mayores oportunidades de obtener el segundo puesto y, así, competir en la segunda vuelta. En Bolivia, cuando ningún candidato obtiene la mayoría absoluta de los votos, el Congreso electo decide entre los dos candidatos más votados, de tal forma que para el electorado la decisión es exactamente la misma que para los sistemas en los que se decide por votación popular; en particular, en Bolivia el dilema para el electorado de protesta consistía en decidir a quién, de los cuatro candidatos populistas en pugna, llevar a la segunda votación en el Congreso. Singer y Morrison (2004) presentan evidencia que indica que Reyes y Morales siempre se disputaron el mismo

electorado. Como el primero de ellos comenzó apareciendo en primer lugar, el MNR desató una campaña en su contra cuestionando su honestidad, cuyo “éxito” consistió en que las deserciones fortalecieron la posición de Morales.

En la selección por parte del Congreso, Morales se negó a negociar con otros partidos posiciones en el gobierno a cambio de su voto, de tal forma que, tras varias semanas de conversaciones, Sánchez de Lozada fue electo con el voto de los tres partidos tradicionales más el de UCS (Salazar Elena, 2004). Sin tomar en cuenta los acontecimientos ulteriores, para las siguientes elecciones de 2005 este hecho tuvo que fortalecer la imagen de *outsider* del líder cocalero.

Por qué la reforma no afectó la confianza política

Este seguimiento muestra que el sistema proporcional personalizado no induce a una mayor cercanía con los electores, por parte de los representantes, que el sistema de representación proporcional por listas cerradas (mi “hipótesis nula”). Esta verificación no estaría completa sin una explicación que atendiese a las propiedades del sistema adoptado. El sistema electoral proporcional personalizado, contra lo que dice su nombre, no “personaliza” la política ni la actividad representativa. En un sistema de este tipo, el país se divide en CPN, que a su vez contienen un número determinado de CUN. Se determina cuántos escaños en total corresponden a cada CPN y, de ellos, cuántos serán electos por mayoría relativa, de tal forma que el resto es distribuido entre listas de candidaturas. Los electores depositan un voto a favor de un candidato nominal y otro a favor de una lista. La población vota y se procede a asignar escaños. Para ello, se cuentan los votos que recibieron las listas de cada partido. Después se aplica una fórmula electoral proporcional cualquiera⁸³ que determina el total de escaños que recibe cada partido en esa CPN. Acto seguido, se cuenta el número de escaños que cada partido se adjudicó por la vía de las CUN. Los escaños que recibe la lista de cada partido se calcula restando los obtenidos por sus candidatos nominales del total de escaños que le corresponden por la aplicación de la fórmula electoral.

⁸³ Bolivia y Venezuela hacen de cada unidad administrativa del país (departamentos y estados, respectivamente) una CPN. Ambos utilizan la fórmula d’Hont. En los ejemplos que siguen, por conveniencia utilizo como fórmula el conciente natural, lo que no afecta al argumento.

Supóngase una CPN en la que se distribuirán en total 31 escaños. 16 de ellos se asignan en CUN y 15 a listas de partido. Supóngase ahora que el partido x obtuvo el 40% de la votación y 7 de sus candidatos *nominales* obtuvieron la mayoría relativa. Al aplicar la fórmula electoral a la votación de este partido resulta que le corresponden 12 escaños en total. Entonces su lista obtiene $12 - 7 = 5$ escaños. Destaca que, para efectos de la fuerza de los partidos en la asamblea, este sistema arroja los mismos resultados que si no existieran en absoluto candidaturas nominales.

Las características del sistema proporcional personalizado son más claras si se las compara con otra variación de sistema electoral de composición mixta: el sistema “segmentado”. Como en el caso anterior, una parte de los diputados es electo en CUN por mayoría, mientras que el resto es asignado en forma proporcional a listas de partidos. La diferencia en este caso es que los escaños por lista son adjudicados en forma *independiente* de los escaños que se obtienen en el nivel de las CUN. Los efectos de cada sistema son distintos. Volvamos con el partido x obteniendo el mismo número de escaños en el nivel nominal y la misma votación. La fórmula electoral distribuye ya no 31 sino 15 escaños, de los cuales 6 le corresponden al partido de nuestro ejemplo. Así, el total que recibe es $7 + 6 = 13$. Por eso, a pesar de sus similitudes, el sistema personalizado es de tipo proporcional, mientras que el segmentado es mayoritario.⁸⁴

Se puede decir que la proporcionalidad del sistema elegido compete a la dimensión interpartidista, mientras que el objetivo de las reformas se dirigía a la dimensión intrapartidista, de tal forma que los diputados electos en el nivel nominal bien podrían haber respondido a los incentivos y cultivar una reputación personal. Sin embargo, la proporcionalidad del sistema elimina dichos incentivos. Supongamos ahora que el partido x no gana 7 sino 6 escaños en el nivel nominal, con la misma votación. Como la fórmula electoral le asigna 12 escaños, entonces su lista recibirá 6 escaños en vez de 5. A la dirigencia le importa poco si uno o más de sus candidatos nominales pierden en las elecciones por no haberse relacionado lo suficiente con su electorado. En consecuencia, resistirá los esfuerzos de éstos por ser más independientes, pues toda independencia es a costa de su propio liderazgo.

⁸⁴ Para una descripción de ambos tipos de sistemas electorales de composición mixta véase Shugart y Wattenberg (2001). Los términos “proporcional personalizado” y “segmentado” son de Nohlen (1998).

Los diputados electos en el nivel nominal responderán acatando las directivas del partido, pues de lo contrario corren el riesgo de estar solos en la siguiente campaña. Incluso tienen incentivos para quedar bien con la dirigencia esperando que en las siguientes elecciones su candidatura ya no sea nominal, sino en un buen lugar en la lista, o mejor aún obtener la doble candidatura. No hay forma de que estos políticos aseguren al mismo tiempo su independencia y el éxito en sus carreras, que es la forma en que operan como incentivos las disposiciones que personalizan el voto. Esto explica la diferencia, casi esquizofrénica, en los diputados provenientes del nivel nominal de sus actitudes con respecto a sus preferencias normativas.

En el sistema segmentado, cada escaño que determinado partido pierde en el nivel nominal es insustituible y se refleja en la disminución del tamaño de su bancada. De haberse optado por un sistema así, manteniendo constante la posibilidad de reelección, el liderazgo de los partidos no habría tenido más remedio que dejar a sus diputados que se comporten de manera independiente, pues su mayor popularidad personal incidirá en la fuerza relativa del partido. Existen otras alternativas para conseguir la personalización de la política como, por ejemplo, el voto único no transferible y las listas abiertas.⁸⁵ En ambas disposiciones, pero especialmente en la primera, el elector tiene la oportunidad de manifestar una preferencia personal al interior del partido que representa sus preferencias políticas. Los candidatos, por su parte, tienen incentivos para destacar sus cualidades individuales, no sólo frente a los miembros de otros partidos, sino también frente a sus propios compañeros.

Es decir que, para el propósito declarado, existían alternativas más adecuadas. En Bolivia, una vez descartado el sistema mayoritario puro, no se discutió ninguna otra opción (Mayorga, 2001a: 204). En Venezuela se discutió el voto único no transferible, pero sin considerarlo con seriedad, mientras que el MAS durante todo el proceso luchó por las listas abiertas que, finalmente, se adoptaron para la integración de los consejos municipales (Crisp y Rey, 2001: 183-5). De hecho, en las elecciones municipales de 1989, este sistema

⁸⁵ El voto único no transferible se aplica por lo general en circunscripciones con 5 o menos. Los partidos presentan tantos candidatos como escaños disponibles hay, y el elector deposita un voto por su candidato preferido. Ganan los candidatos más votados, independientemente del partido al que pertenezcan. En las listas abiertas, cada partido presenta una lista de candidaturas. El elector tiene la opción de depositar su voto por la lista o por un candidato en específico. Los votos que cada partido recibe suman ambas variables y recibirán escaños en proporción, pero encabezan la lista los candidatos que hayan recibido el mayor número de votos individuales.

produjo efectivamente, aunque no radicalmente, una mayor cercanía entre representantes y electores, apoyando el surgimiento de una clase política local (Kornblith y Levine, 1995: 65-7).

Existe evidencia adicional sobre la inadecuación entre este diseño y los objetivos específicos en otros casos con sistemas electorales iguales. Los otros dos países, cuyas cámaras se integran con el mismo método, son Alemania y Nueva Zelanda. En ambos casos, las condiciones de partida y las intenciones fueron muy distintas a las de sus pares latinoamericanos. En Alemania, donde se inventó el sistema proporcional personalizado, el diseño se dio bajo la ocupación de las tropas aliadas, en parte tomando en cuenta la preferencia de los países anglosajones por las circunscripciones uninominales, y se esperaba que sólo fuese válido para las elecciones de 1949 (Scarrow, 2001). Desde entonces no se ha notado una especial cercanía entre los electores y los representantes (Krennerich, 1997: 85). En Nueva Zelanda, donde se pasó de un sistema electoral de mayoría relativa en circunscripciones uninominales a uno proporcional personalizado en 1993, la intención de mantener el elemento uninominal no fue hacer más representativo al sistema, sino conservar cierta continuidad que hiciera menos brusco el cambio para los electores. Ahí se quería corregir la desproporcionalidad entre los votos recibidos y la proporción de escaños que le correspondían a cada partido (Roperts, 1997).

A mi juicio, las élites partidistas de Bolivia y Venezuela no sólo reconocieron con tiempo la necesidad de un cambio en la forma de la conducción política, sino que vieron en su propio interés proceder en esa dirección. Tanto los tres partidos tradicionales bolivianos, incapaces de modificar el modelo económico frente a la probabilidad de un desplome en las escasas inversiones, como en el caso del presidente Pérez, principal promotor de los cambios institucionales sabiendo que no estaría en condiciones de repetir el dispendio de su anterior período, estaban claramente conscientes del descontento popular.

Junto con esta realidad percibida, no obstante, entraron consideraciones políticas. En Bolivia, por ejemplo, dados los impresionantes *swings* de votación, la proporcionalidad ofrece una protección mínima contra caídas bruscas en las votaciones de los partidos grandes y los pequeños, por lo que opciones menos proporcionales, como el voto único no transferible o el sistema segmentado, quedaron sin considerar. En Venezuela, Pérez bien

pudo anticipar al menos un desquite electoral, pero el hecho de que las listas abiertas no fueran llevadas al nivel nacional, indica que las dirigencias partidistas tampoco querían renunciar a la disciplina de sus respectivas diputaciones.⁸⁶ Esto último se relaciona con la incompatibilidad entre la representación por mandato y los imperativos de una reestructuración económica radical: las élites reformistas correrían el riesgo de que los diputados rechazaran o modificaran las políticas de ajuste, respondiendo a las preferencias de sus electores.

Entre lo que se consideró las necesidades de largo alcance de la representación política y las necesidades inmediatas de las organizaciones partidistas, se optó por proteger las segundas con un sistema electoral que, aparentando personalizar la rendición de cuentas, en realidad no lo hacía. El comentario de Crisp y Rey (2001: 174, 192) sobre Venezuela, vale también para Bolivia: los partidos tradicionales apoyaron, entre las alternativas, el sistema electoral más parecido al vigente.

Sumario

En este capítulo mostré la evolución del desempeño de las instituciones representativas en dos países en los que el populismo terminaría por sustituir a los partidos que habían predominado por décadas en la escena electoral. Los datos sobre el desempeño que expuse dan cuenta de que éste fue subóptimo en dos sentidos: 1) porque gestión tras gestión todos estaban peor que antes, o bien 2) porque en casos de crecimiento, algunos empeoraron su situación.

En ambos países, el castigo electoral al mal desempeño no fue suficiente para elevar la calidad de la representación, lo que produjo una reducción considerable de la confianza en las instituciones políticas y, por lo tanto, una mayor propensión a coincidir con los aspectos antipolíticos del discurso populista.

Uno de los aspectos más interesantes de estos dos procesos es que las élites políticas advirtieron tempranamente tanto los aspectos visibles del fenómeno como, entre las causas,

⁸⁶ Los partidos venezolanos llegaron a rechazar las regulaciones a la vida partidista interna sugeridas por una comisión presidencial para la reforma del Estado (Crisp y Rey, 2001). En Bolivia se llegó a legislar la democratización interna de los partidos, pero los liderazgos partidistas se encargaron de dejar esta ley sin efectos (Mayorga, 2005).

la esfera de factores que estaba en sus manos modificar. Aunque se emprendió el rediseño institucional, el resultado fue un sistema electoral que no se adecuaba a los objetivos de la reforma. Las propiedades de los casos elegidos (homogeneidad en todas las variables), permitieron, además, confirmar que los sistemas proporcionales personalizados no producen una mayor cercanía entre los electores y sus representantes que los sistemas de representación proporcional por listas cerradas. Por lo tanto, las consecuencias de la baja calidad de la representación en términos subjetivos (confianza) como objetivos (desempeño electoral del populismo), ocurrieron como si la reforma al sistema electoral no se hubiese realizado jamás.

Conclusiones

Los resultados que estuve en condiciones de aportar parecen sugerir que el mejor camino para explicar al populismo está unido con la explicación de la democracia. La naturaleza del discurso populista y la indagatoria de las condiciones en las que dicho discurso es convincente, me parece, conducen de forma natural a esta vía. Si los electores observan buenos resultados y si perciben en la conducta de los políticos una disposición a favorecer en lo posible a la población, las democracias pueden operar normalmente a pesar de sus problemas de selección adversa y riesgo moral. Incluso si las condiciones son poco favorables para elevar el bienestar de la población, la mera observación de un comportamiento que en lenguaje común llamamos “decente” puede bastar para que buena parte de los electores sientan que están siendo representados.

Si la percepción es precisamente la opuesta, dado que el bienestar es bajo y/o los políticos aparentan rapacidad, el mercado electoral se abre para candidatos con un discurso muy particular. El discurso que divide al pueblo y a la élite en bandos antagónicos e identifica a una sola persona con un colectivo heterogéneo agrupado bajo el rubro “pueblo” (o similares) es muy convincente en condiciones de baja confianza en las instituciones. La desconfianza, por otro lado, es un factor que favorece, por sí mismo, el abstencionismo frente al voto por los partidos tradicionales, pero la presencia de un candidato con suficiente credibilidad personal puede hacer que esa desconfianza opere en favor de su causa.

Quiero cerrar estas páginas con algunas apreciaciones sobre el grado en que el populismo es realmente problemático, una vez hecho gobierno. En principio, el que una persona obtenga la mayoría de los votos y en consecuencia asuma el poder no tiene nada de inconsistente con las reglas de la democracia. Más bien, de eso se trata. El populismo, desde esta perspectiva, es tan democrático como cualquier otra fuerza que busca votos. Sin embargo, su discurso y las condiciones de credibilidad de éste presentan algunos riesgos para la continuidad de estas reglas.

Por sus propiedades discursivas, el líder populista equivale a todo el pueblo y, al mismo tiempo, decide quién pertenece al pueblo y quién pertenece a la élite. Además, pertenecer a la élite significa ser enemigo del pueblo. Cuando el discurso populista de un candidato

opositor no se modifica en cuanto éste adquiere el poder, se hace de los medios materiales para excluir a sus adversarios de la competencia, con la razón que le da el deber de deshacerse de quienes se oponen al mejoramiento del pueblo. En tal sentido, el discurso populista tiene el germen argumentativo de quien justifica medidas autoritarias. Si oponerse al líder equivale a oponerse al pueblo, es difícil que entre el pueblo surjan suficientes voces dispuestas a defender (no como pueblo, sino como opinión pública) a quien se colocó de esa forma en el bando equivocado.

Pero, en última instancia, esto no se trata más que de palabras. Para que las palabras tengan efectos graves, se deben reunir otras condiciones. Me parece que el populismo que reúne las condiciones de credibilidad de su propio discurso presenta algunas de esas condiciones. Un genuino *outsider* que se presenta a elecciones con una etiqueta partidista recién creada puede elevar sus probabilidades de acceder al poder, pero es posible que se entienda mal con la división de poderes. Sin un apoyo partidista sólido, pero con un discurso que convence a una gran cantidad de ciudadanos, la tentación de eliminar las instancias mediadoras cuando resulten un estorbo es demasiado grande (o de rehacerlas una y otra vez hasta que reproduzcan sus propios deseos, y entonces no estorban porque para efectos prácticos no existen). El camino de Fujimori y el de Chávez ejemplifican la realidad de este riesgo. La otra cara de la misma moneda viene dada por Lucio Gutiérrez y Collor de Melo: lo que los distingue de los dos anteriores únicamente es que en la confrontación con las instituciones mediadoras resultaron los perdedores. Sin embargo, esto no tiene por qué ser de esta forma. Uribe, por ejemplo, por no ser del todo un *outsider*, al parecer ha concebido una forma de llegar a acuerdos con los “politiqueros” a los que denigró durante su campaña.

Es pertinente recordar el comportamiento del índice de desconfianza en Venezuela una vez que Hugo Chávez asumió la presidencia. Entre 2000 y 2002, el índice se desprende totalmente de los indicadores objetivos de desempeño, con caídas en el PIB per cápita similares a las que condujeron al caracazo. Sin embargo, en estos años la percepción de que la situación económica es mala y de que la corrupción ha aumentado se reducen sensiblemente, a la vez que aumenta la proporción de satisfechos con la democracia. En correspondencia, la confianza es mayor. Encuentro indicios de evoluciones similares en Argentina y Colombia en el año 2003, una vez que los respectivos candidatos populistas

asumen el poder. No tengo ninguna duda de que algo similar podría estar ocurriendo actualmente en Bolivia, con la reciente elección de Evo Morales.

Si la confianza en las instituciones es alta, esto significa que la población considera que las acciones realizadas por sus líderes son, al menos en la intención, pensadas para maximizar el bienestar de la mayoría. Ese estado de ánimo puede ser aprovechado por el liderazgo en dos formas. Una, la ya comentada, concentrando el poder a costa de las instancias mediadoras. La otra, no obstante, consiste en utilizar la confianza para ampliar el margen de acción, en forma similar a quien es merecedor de un crédito (Offe, 1999). Si las élites políticas pueden contar con que sus electores los juzgarán de buena fe, podrían correr algunos riesgos en el terreno de la política económica y experimentar con algún grado de heterodoxia. Entonces, una dosis suficiente de confianza bien puede contrarrestar las restricciones en el tipo de política que imponen agentes como las instituciones financieras. Claro está que esto exige un liderazgo que no corra riesgos innecesarios y que introduzca cambios de forma incremental, a fin de controlar los efectos. Para ello, los electores deben retener cierta capacidad de llamarlos a cuentas al cumplir su período, en el estricto sentido del ejercicio del voto retrospectivo.

Adicionalmente, por un camino distinto al usual mis resultados confirman que el populismo puede tener efectos correctivos sobre el mal desempeño de las democracias, e incluso, si se quiere, efectos de integración. Pero no lo detecté en políticas públicas realizados por populistas en el poder. El resultado de mi análisis deductivo, parcialmente confirmado por el estudio empírico del capítulo quinto, es que el populismo maximiza sus efectos correctores cuando su fuerza es lo suficientemente grande como para obligar a mayores esfuerzos a los políticos profesionales, pero no tanto como para acceder al poder. Esta idea, que encuentro atractiva por motivos puramente estéticos, me parece que merece una mayor exploración. Sin duda, en el camino continuaríamos aprendiendo sobre la naturaleza de la democracia.

Fuentes consultadas

- ADRIANZÉN MERINO, Alberto (1992): "Democracia y partidos en el Perú", *Pretextos*, núm. 3-4, diciembre, pp. 7-19.
- AGUILAR, Edwin Eloy y Alexander C. PACEK (2000): "Macroeconomic conditions, voter turnout, and the working-class/economically disadvantaged party vote in developing countries", *Comparative Political Studies*, vol. 33, núm. 8, octubre, pp. 995-1017.
- AGUIRRE, Pedro, coord. (2000): *Sistemas políticos y electorales contemporáneos. Uruguay*, IFE, México.
- ALDRICH, John H. (1995): *Why parties? The origin and transformation of political parties in America*, The University of Chicago Press, Chicago.
- ALESINA, Alberto y Nouriel ROUBINI con Gerald D. COHEN (1999): *Political cycles and the macroeconomy*, MIT, Massachusetts.
- ALESINA, Alberto y Romain WACZIARG (2000): "The economics of civic trust", en Pahrr y Putnam, eds., pp. 149-70.
- ÁLVAREZ JUNCO, José (1990): *El emperador del paralelo. Lerroux y la demagogia populista*, Alianza, Madrid.
- ÁLVAREZ JUNCO, José (1994): "El populismo como problema", en *id.* y González Leandri, comps., pp. 11-38.
- ÁLVAREZ JUNCO, José y Ricardo GONZÁLEZ LEANDRI, comps. (1994): *El populismo en España y América*, Editorial Catriel, Madrid.
- BARDI, Luciano (1996): "Anti-party sentiment and party system change in Italy", *European Journal of Political Research*, vol. 29, núm. 3, abril, pp. 345-63.
- BARR, Robert R. (2003): "The persistence of Neopopulism in Peru? From Fujimori to Toledo", *Third World Quarterly*, vol. 24, núm. 6, diciembre, pp. 1161-78.
- BATES, Robert H., Avner GREIF, Margaret LEVI, Jean-Laurent ROSENTHAL y Barry R. WEINGAST (1998): "Introduction", en *Analytic narratives*, Princeton University Press, Princeton, pp. 3-18.
- BAWN, Kathleen (2003): "Construir el 'nosotros': ideología, coaliciones políticas y falsa consciencia", *Zona Abierta*, núm. 102-103, primavera-verano, pp. 77-120.
- BÉLANGER, Éric y Richard NADEAU (2005): "Political trust and the vote in multiparty elections: The Canadian case", *European Journal of Political Research*, vol. 44, pp. 121-46.
- BELTRÁN, Ulises (2000): "Factores de ponderación del voto retrospectivo", *Política y Gobierno*, vol. VII, núm. 2, segundo semestre, pp. 425-42.
- BENGTTSSON, Åsa (2004): "Economic voting: The effect of political context, volatility and turnout on voters' assignment of responsibility", *European Journal of Political Research*, vol. 43, núm. 5, agosto, pp. 749-67.
- BIGIO, Isaac (2002): "Bolivia 1952-2002 ¿Entre dos revoluciones?", documento disponible por Internet en <www.Bolivia.com>.
- BOBBIO, Norberto (1989): *Liberalismo y democracia*, FCE, México.
- BOURDIEU, Pierre, J.C. CHAMBOREDON y J.C. PASSERON (1975): *El oficio del sociólogo*.
- BRAUN, Herbert (2001): "Populazos, populitos, populismos", en Hermet, Loaeza y Prud'homme, comps., pp. 251-74.
- BRENNAN, Geoffrey y Loren LOMASKY (1997): *Democracy and decision: The pure theory of electoral preference*, Cambridge University Press, Nueva York.

- BROWN, Gwen (1997): "Deliberation and its discontents: H. Ross Perot's antipolitical populism", en Andreas Schedler, ed., pp. 115-48.
- CANOVAN, Margaret (1999): "Trust the people! Populism and the two faces of democracy", *Political Studies*, Volume 47, Number 1, marzo, pp. 2-16.
- CAPOCCIA, Giovanni (2002): "Anti-system parties: A conceptual reassessment", *Journal of Theoretical Politics*, vol. 14, núm. 1, pp. 9-35.
- CARDOSO, Eliana y Ann HEIWEGE (1992): "El populismo, el despilfarro y la redistribución", en Dornbusch y Edwards, comps., pp. 58-87.
- CAROTHERS, Thomas (2002): "The end of transition paradigm", *Journal of Democracy*, vol. 13, núm. 1, enero, pp. 5-21.
- CATTERBERG, Gabriela y Alejandro MORENO (2003): The individual bases of political trust: Trends in new and established democracies, documento preparado para la 58 Conferencia Anual de la AAPOR, Nashville, 15-18 de mayo.
- CHANLEY, Virginia A., Thomas J. RUDOLPH y Wendy M. RAHN (2000): "The origins and consequences of public trust in government: A time series analysis", *The Public Opinion Quarterly*, vol. 64, núm. 3, otoño, pp. 239-56.
- COPPEDGE, Michael (2005): "Explaining democratic deterioration in Venezuela through nested inference", en Hagopian y Mainwaring, eds., pp. 289-316.
- COX, Gary W. (1997): *Making votes count. Strategic coordination in the world's electoral systems*, Cambridge University Press, Nueva York.
- COX, Gary W. y Matthew D. MCCUBBINS (2001): "The institutional determinants of economic policy outcomes", en Haggard y McCubbins, eds., pp. 21-63.
- CRAWFORD, Sue E.S. y Elinor OSTROM (1995): "A grammar of institutions", *American Political Science Review*, vol. 89, núm. 3, septiembre, pp. 582-600.
- CRIADO OLMOS, Henar (2003): "Elección racional y comportamiento electoral: más allá de la paradoja del voto", *Zona Abierta*, núm. 102-103, primavera-verano, pp. 1-14.
- CRISP, Brian F. (1997): "Presidential behavior in a system with strong parties: Venezuela, 1958-1995", en Mainwaring y Shugart, pp. 160-98.
- CRISP, Brian F. y Juan Carlos REY (2001): "The sources of electoral reform in Venezuela", en Shugart y Wattenberg, eds., pp. 173-93.
- DASGUPTA, Partha (2000): "Trust as a Commodity", Gambetta, ed., pp. 49-72, <www.sociology.ox.ac.uk/papers/dasgupta49-72.pdf>.
- DAVIS, Charles L., Roderic Ai CAMP y Kenneth L. COLEMAN (2004): "The influence of party systems on citizen's perception of corruption and electoral response in Latin America", *Comparative Political Studies*, vol. 37, núm. 6, agosto, pp. 677-703.
- DESCHOUWER, Kris (1996): "Political parties and democracy: A mutual murder?", *European Journal of Political Research*, vol. 29, núm. 3, abril, pp. 263-78.
- DI TELLA, Torcuato S. (1973): "Populismo y reformismo", en Ianni, comp. pp. 38-82.
- DORNBUSCH, Rudiger y Sebastián EDWARDS (1992): "La macroeconomía del populismo", en *id.*, comps., pp. 15-23.
- DORNBUSCH, Rudiger y Sebastián EDWARDS, comps. (1992): *Macroeconomía del populismo en la América Latina*, FCE, México.
- DOWNS, Anthony (1973): *Teoría económica de la democracia*, Aguilar, Madrid.
- DRAKE, Paul W. (1992): "El populismo en perspectiva", en Dornbusch y Edwards, comps., pp. 47-53.

- DUNLEAVY, Patrick (1988): "Group identities and individual influence: Reconstructing the theory of interest groups", *British Journal of Political Science*, Vol. 18, núm. 1, enero, pp. 21-49.
- DURSTON, John (2000): "¿Qué es el capital social comunitario", *CEPAL – SERIE Políticas sociales*, No. 38, julio, pp. 3-44.
- EASTON, David (1969): *Esquema para el análisis político*, Amorrortu, Buenos Aires.
- ELLNER, Steve (2003): "The contrasting variants of the populism of Hugo Chávez and Alberto Fujimori", *Journal of Latin American Studies*, vol. 35, núm. 1, pp. 139-62.
- ELSTER, Jon (1997): *El cemento de la sociedad. Las paradojas del orden social*, Gedisa, Barcelona.
- ENELOW, James M. y Melvin J. HINICH (2003): "Ideología, cuestiones políticas y la teoría espacial de las elecciones", *Zona Abierta*, núm. 102-103, primavera-verano, pp. 57-75.
- FEARON, James D. (1999): "Electoral accountability and the control of politicians: Selecting good types versus sanctioning poor performance", en Przeworski, Stokes y Manin, eds., pp. 55-97.
- FEREJOHN, John A. (1999): "Accountability and authority: Toward a theory of political accountability", en Przeworski, Stokes y Manin, eds., pp. 131-53.
- GAMARRA, Eduardo A. (1997): "Hybrid presidentialism and democratization: The case of Bolivia", en Mainwaring y Shugart, eds., pp. 363-93.
- GAMBETTA, Diego, ed. (2000b): *Trust: Making and breaking cooperative relations*, edición electrónica, Department of Sociology, University of Oxford, Oxford.
- GERMANI, Gino (1973): "Democracia representativa y clases populares", en Ianni, comp., pp. 12-37.
- GIDENGIL, Elisabeth, André BLAIS, Neil NEVITTE y Richard NADEAU (2001): "The correlates and consequences of anti-partyism in the 1997 Canadian election", *Party Politics*, vol. 7, núm. 4, pp. 491-513.
- GUNTHER, Richard y Larry DIAMOND (2003): "Species of political parties: A new typology", *Party Politics*, vol. 9, núm. 2, pp. 167-99.
- HAGGARD, Stephan y Matthew D. MCCUBBINS, eds. (2001): *Presidents, parliaments, and policy*, Cambridge University Press, Nueva York, pp. 1-17.
- HAGOPIAN, Frances y Scott P. MAINWARING, eds. (2005): *The third wave of democratization in Latin America: advances and setbacks*, Cambridge University Press, Nueva York.
- HARDIN, Russell (1993). *Collective Action*. Baltimore: Johns Hopkins/Resources for the Future.
- HARDIN, Russell (1995): *One for all. The logic of group conflict*, Princeton University Press, Princeton.
- HARDIN, Russell (1999): "Do we want trust in government?", en Warren, ed., pp. 22-41.
- HARPER, M. (2000): "Economic voting in postcommunist Eastern Europe", *Comparative Political Studies*, vol. 33, núm. 9, noviembre, pp. 1191-1227.
- HEALY, Kevin (1988): "Coca, the state, and the peasantry in Bolivia, 1982-1988", *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, vol. 30, núm. 2/3, pp. 105-26.
- HENNESY, Alistair (1970): "América Latina", en Ionescu y Gellner, comps., pp. 39-80.
- HERMET, Guy (2001): "Del populismo de los antiguos al populismo de los modernos", en Hermet, Loaeza y Prud'homme, comps., pp. 13-33.
- HERMET, Guy, Soledad LOAEZA y Jean François PRUD'HOMME (2001): "Presentación", en *id.*, comps., pp. 9-11.
- HERMET, Guy, Soledad LOAEZA y Jean François PRUD'HOMME, comps. (2001): *Del populismo de los antiguos al populismo de los modernos*, El Colegio de México, México.
- HETHERINGTON, Marc J. (1998): "The political relevance of political trust", *American Political Science Review*, vol. 92, núm. 4, diciembre, pp. 791-808.

- HETHERINGTON, Marc J. (1999): "The effect of political trust on the presidential vote, 1968-1996", *American Political Science Review*, vol. 93, núm. 2, junio, pp. 311-26.
- HINDESS, Barry (1997): "Antipolitical motifs in Western political discourse", en Andreas Schedler, ed., pp. 21-39.
- HIRSCHMAN, Albert (1977): *Salida, voz y lealtad. Respuestas al deterioro de empresas, organizaciones y Estados*, FCE, México.
- HOFSTADTER, Richard (1970): "Estados Unidos", en Ionescu y Gellner, comps., pp. 15-38.
- HUG, Simon (2000): "Studying the electoral success of new political parties: A methodological note", *Party Politics*, vol. 6, núm. 2, pp. 187-97.
- IANNI, Octavio, (1973): "Populismo y relaciones de clase", en *id.*, comp., pp. 83-150.
- IANNI, Octavio, comp. (1973): *Populismo y contradicciones de clase en Latinoamérica*, Era, México.
- IIB [Instituto Interuniversitario de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca] (2006): Boletines "Élites Parlamentarias Latinoamericanas", disponibles por Internet en <<http://iberoame.usal.es/index.htm>>.
- INE [Instituto Nacional de Estadística de Bolivia] (2005): "Principales indicadores de empleo, 1999-2003", disponible por Internet en <<http://www.ine.gov.bo/cgi-bin/piwdie1xx.exe/TIPO>>.
- IONESCU, Ghita (1970): "Europa oriental, en *id.* y Gellner, comps., pp. 121-49.
- IONESCU, Ghita y Ernest GELLNER, comps. (1970): *Populismo. Sus significados y características nacionales*, Amorrortu, Buenos Aires.
- IPU [Inter-Parliamentary Union] (2003): "Parline database", <www.ipu.org/parline-e>
- JONES, Philip y John HUDSON (1998): "The role of political parties: An analysis based on transaction costs", *Public Choice*, vol. 94, pp. 175-89.
- KAUFMAN, Robert R. y Barbara STALLINGS (1992): "La economía política del populismo latinoamericano", en Dornbusch y Edwards, comps., pp. 24-46.
- KEREN, Michael (2000): "Political perfectionism and the 'anti-system' party", *Party Politics*, vol. 6, núm. 1, pp. 107-16.
- KEY, V.O. (1966): *The responsible electorate*, Vintage, Nueva York.
- KIEWIET, D. Roderik y Matthew D. MCCUBBINS (1991): *The logic of delegation. Congressional parties and the appropriations process*, The University of Chicago Press, Chicago.
- KING, Gary, Robert O. KEHONAE y Sydney VERBA (2000): *El diseño de la investigación social. La inferencia científica en los estudios cualitativos*, Alianza, Madrid.
- KNIGHT, Alan (1998): "Populism and neo-populism in Latin America, especially Mexico", *Journal of Latin American Studies*, vol. 30, núm. 2, pp. 223-48.
- KORNBLITH, Miriam y Daniel H. LEVINE (1995): "Venezuela. The life and times of the party system", en Mainwaring y Scully, eds., pp. 37-71.
- KRENNERICH, Michael (1997): "Germany: The original mixed member proportional system", en Reynolds y Reilly *et al*, pp. 76-8.
- KULISHECK, Michael R. y Brian F. CRISP (2001): "The legislative consequences of MMP electoral rules in Venezuela", en Shugart y Wattenberg, eds., pp. 404-31.
- LACLAU, Ernesto (1977): "Towards a theory of populism", en *Politics and ideology in Marxist theory: Capitalism, fascism and populism*, NLB, Londres, pp. 143-98.
- LACLAU, Ernesto (2005): "Populism: What's in a name?", en Francisco Panizza, ed., pp. 32-49.
- LAZARTE, Jorge (1998): "Partidos políticos e informatización de la política", en Mackinnon y Petrone, comps., pp. 409-33.

- LEAMAN, David (2004): "Changing faces of populism in Latin America: Masks, makeovers, and enduring features", *Latin American Research Review*, vol. 39, núm. 3, octubre, pp. 312-26.
- LOAEZA, Soledad (2001): "La presencia populista en México", en Hermet, Loaeza y Prud'homme, comps., pp. 365-92.
- LUCARDIE, Paul (2000): "Prophets, purifiers, and prolocutors: Towards a theory on the emergence of new parties", *Party Politics*, vol. 6, núm. 2, pp. 175-85.
- LUHMANN, Niklas (2000): "Familiarity, confidence, trust: Problems and alternatives", en Gambetta, ed., pp. 94-107, <www.sociology.ox.ac.uk/papers/luhmann94-107.pdf>.
- LYNCH, Nicolás (1999): "Neopopulismo: un concepto vacío", *Socialismo y Participación*, núm. 86, diciembre, pp. 63-80.
- MACKINNON María Moira y Mario Alberto PETRONE (1998): "Introducción. Los complejos de la Cenicienta", en *id.*, comps., pp. 11-55.
- MACKINNON María Moira y Mario Alberto PETRONE, comps. (1998): *Populismo y neopopulismo en América Latina: el problema de la cenicienta*, Eudeba, Buenos Aires.
- MACRAE, Donald (1970): "El populismo como ideología", en Ionescu y Gellner, comps., pp. 187-202.
- MAINWARING, Scott y Timothy R. SCULLY (1995): "Introduction: Party systems in Latin America", en *id.*, eds., pp. 1-34.
- MAINWARING, Scott y Timothy R. SCULLY, eds. (1995): *Building Democratic Institutions. Party systems in Latin America*, Stanford University Press, Stanford.
- MAINWARING, Scott y Matthew Soberg SHUGART, eds. (1997): *Presidentialism and democracy in Latin America*, Cambridge University Press, Nueva York.
- MANIN, Bernard (1998): *Los principios del gobierno representativo*, Alianza, Madrid.
- MANIN, Bernard, Adam PRZEWORSKI y Susan C. STOKES (1999a): "Elections and representation", en Przeworski, Stokes y Manin, eds., pp. 29-54.
- MANIN, Bernard, Adam PRZEWORSKI y Susan C. STOKES (1999b): "Introduction", en Przeworski, Stokes y Manin, eds., pp. 1-26.
- MATEO DÍAZ, Mercedes y Daniel ZOVATTO (2005): Voter turnout in Latin America during the third wave of democratization in the light of Latin American Barometer data, documento presentado en la conferencia "10 años de Latinobarómetro", Oxford, 19-20 de septiembre.
- MAYER, Nonna (2001): "Los campeones de las extremas derechas europeas", en Hermet, Loaeza y Prud'homme, comps., pp. 107-36.
- MAYORGA, Fernando (2001): "Neopopulismo y democracia en Bolivia (1988-1999). UCS y CONDEPA: compadres y padrinos en la política", en Hermet, Loaeza y Prud'homme, comps., pp. 301-26.
- MAYORGA, René Antonio (2001a): "Electoral reform in Bolivia: Origins of the mixed-member proportional system", en Shugart y Wattenberg, eds., pp. 194-208.
- MAYORGA, René Antonio (2001b): "The mixed-member proportional system and its consequences", en Shugart y Wattenberg, eds., pp. 433-46.
- MAYORGA, René Antonio (2005): "Bolivia's democracy at the crossroads", en Hagopian y Mainwaring, eds., pp. 149-78.
- MCCOY, Jennifer L. (1999): "Chávez and the end of 'partyarchy' in Venezuela", *Journal of Democracy*, 10/3, julio, pp. 64-77.
- MEYER, Jean (2001): "¿Se puede hablar hoy de populismo en Rusia?", en Hermet, Loaeza y Prud'homme, comps., pp. 197-214.
- MILLER, Gary J. (2005): "The political evolution of principal-agent models", *Annual Review of Political Science*, vol. 8, pp. 203-25.

- MINOGUE, Kenneth (1970): "El populismo como movimiento político", en Ionescu y Gellner, comps., pp. 241-57.
- MISHLER, William y Richard ROSE (2001): "What are the origins of political trust? Testing institutional and cultural theories in post-communist societies", *Comparative Political Studies*, vol. 34, núm. 1, febrero, pp. 30-62.
- MOE, Terry M. (1984): "The New Economics of Organization", *American Journal of Political Science*, vol. 28, núm. 4.
- MOISÉS, José Álvaro y Gabriela de OLIVEIRA (2005): Democracy, political distrust, and dissatisfaction with the regime: The case of Brazil, documento presentado en la conferencia "10 años de Latinobarómetro", 19-20 de septiembre.
- MORENO, Erika, Brian F. CRISP y Matthew Soberg SHUGART (2003): "The accountability deficit in Latin America", en Scott Mainwaring y Christopher Welna, eds., *Democratic accountability in Latin America*, Oxford University Press, Oxford, pp. 79-131.
- MOUFFE, Chantal (2005): "The 'end of politics' and the challenge of right-wing populism", en Francisco Panizza, ed., pp. 50-71.
- MUGHAN, A., C. BEAN y I MCALLISTER (2003): "Economic globalization, job insecurity and the populist reaction", *Electoral Studies*, núm. 22, pp. 617-33.
- NAHMAD, Salomón, Tania CARRASCO y Elena NAVA (2004): Construyendo una tipología de la pobreza rural en México, mimeo.
- NANNESTAD, Peter y Martin PALDAM (1994): "The VP-function: A survey of the literature on the vote and popularity functions after 25 years", *Public Choice*, vol. 79, núms. 3-4, junio, pp. 213-45.
- NEWTON, Kenneth (2001): "Trust, social capital, civil society, and democracy", *International Political Science Review*, vol. 22, núm. 2, pp. 201-14.
- NEWTON, Kenneth y Pippa NORRIS (2000): "Confidence in public institutions: Faith, culture, or performance?", en Pharr y Putnam, eds., pp. 52-73.
- NOHLEN, Dieter (1998): *Sistemas electorales y partidos políticos*, 2a. ed., FCE, México.
- NOVARO, Marco y Vicente PALERMO (1997): "Luces y sombras en la democracia argentina. Las instituciones después de Menem", *Revista Mexicana de Sociología*, vol. LIX, núm. 3, julio-septiembre.
- OFFE, Claus (1999): "How can we trust our fellow citizens?", en Warren, ed., pp. 42-87.
- OLSON, Mancur (1992): *La lógica de la acción colectiva. Bienes públicos y la teoría de grupos*, Limusa, México.
- OSTROM, Elinor (2000): *El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva*, UNAM-CRIM-FCE, México.
- OSTROM, Elinor y T.K. AHN (2003): "Una perspectiva del capital social desde las ciencias sociales: capital social y acción colectiva", *Revista Mexicana de Sociología*, vol. 65, núm. 1, enero-marzo, pp. 155-233.
- ŌTAKE, Hideo (2000): "Political mistrust and party dealignment in Japan", en Pharr y Putnam, eds., pp. 291-310.
- OVERBEYE, Elinor (2003): "Una defensa del votante racional, que busca su propio interés, 'ético', y de paso una resolución de la 'paradoja del no voto'", *Zona Abierta*, núm. 102-103, primavera-verano, pp. 15-56.
- OWEN, Diana y Jack DENNIS (1996): "Anti-partyism in the USA and support for Ross Perot", *European Journal of Political Research*, vol. 29, núm. 3, abril, pp. 383-400.

- OXHORN, Phillip (1998): "The social foundations of Latin America's recurrent populism: Problems of popular sector class formation and collective action", *Journal of Historical Sociology*, vol. 11, núm. 2, junio, pp. 212-46.
- PALACIOS, Marco (2001): "Presencia y ausencia de populismo: para un contrapunto colombo-venezolano", en Hermet, Loeza y Prud'homme, comps., pp. 327-64.
- PALDAM, Martin y Peter SKOTT (1995): "A rational-voter explanation of the cost of ruling", *Public Choice*, vol. 83, núms. 1-2, abril, pp. 159-72.
- PANIZZA, Francisco (2000): "Beyond 'delegative democracy': 'Old politics' and 'new economics' in Latin America", *Journal of Latin American Studies*, núm. 32, pp. 737-63.
- PANIZZA, Francisco, (2005): "Introduction: Populism and the mirror of democracy", en *id.*, ed., pp. 1-31.
- PANIZZA, Francisco, ed. (2005): *Populism and the mirror of democracy*, Verso, Londres.
- PAPADOPOULOS, Ioannis (2001): "El nacional populismo en Europa Occidental: un fenómeno ambivalente", en Hermet, Loeza y Prud'homme, comps., pp. 65-105.
- PDBA [Political Database of the Americas] (2002): "Venezuela: Electoral results", Georgetown University y Organización de Estados Americanos, disponible por Internet en <<http://pdba.georgetown.edu/Elecdata/Venezuela/ven.html>>.
- PHARR, Susan J. (2000): "Officials' misconduct and public distrust: Japan and the Trilateral democracies", en Pahrr y Putnam, eds., pp. 173-201.
- PHARR, Susan J. y Robert D. PUTNAM, eds. (2000): *Disaffected democracies: What's troubling the trilateral countries?*, Princeton University Press, Princeton.
- PITKIN, Hanna Fenichel (1985): *El concepto de representación*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid.
- POGUNTKE, Thomas (1996): "Anti-party sentiment – Conceptual thoughts and empirical evidence: Explorations into a minefield", *European Journal of Political Research*, vol. 29, núm. 3, abril, pp. 319-44.
- POGUNTKE, Thomas y Susan E. SCARROW (1996): "The politics of anti-party sentiment: Introduction", *European Journal of Political Research*, vol. 29, núm. 3, abril, pp. 257-62.
- POPESCU, Christian (2001): "El populismo de los modernos y sus fuentes escandinavas", en Hermet, Loeza y Prud'homme, comps., pp. 167-95.
- PORTA, Donatella della (2000): "Social capital, beliefs in government, and political corruption", en Pahrr y Putnam, eds., pp. 202-28.
- POWELL Jr., Bingham (2000): *Elections as instruments of democracy. Majoritarian and proportional visions*, Yale University Press, New Haven.
- PRUD'HOMME, Jean François (2001): "Un concepto evasivo: el populismo en la ciencia política", en Hermet, Loeza y Prud'homme, comps., pp. 35-63.
- PRZEWORSKI, Adam (1995): *Democracia y mercado. Reformas políticas y económicas en Europa del Este y América Latina*, Cambridge University Press, Cambridge.
- PRZEWORSKI, Adam (1988): *Capitalismo y socialdemocracia*, Alianza, Madrid.
- PRZEWORSKI, Adam (2001): "¿Cuántas terceras vías puede haber?", *Istor*, vol. 2, núm. 7, invierno, pp. 11-37.
- PRZEWORSKI, Adam, Susan C. STOKES y Bernard MANIN, eds. (1999): *Democracy, accountability, and representation*, Cambridge University Press, Nueva York.
- PUTNAM, Robert D., con Robert Leonardo y Raffaella Y. Nanetti (1996): *Making democracy work. Civic traditions in modern Italy*, Princeton University Press, Princeton.

- PUTNAM, Robert D., Susan J. PHARR y Russell J. DALTON (2000): "Introduction: What's troubling the Trilateral democracies?", en Pahrr y Putnam, eds., pp. 3-27.
- RADCLIFF, Benjamin (1993): "Liberalism, populism, and collective choice", *Political Research Quarterly*, vol. 46, núm. 1, marzo, pp. 127-42.
- RAVALLION, Martin (2001): "The mystery of vanishing benefits: An introduction to impact evaluation", *The World Bank Economic Review*, vol. 15, núm. 1, pp. 115-40.
- REYNOLDS, Andrew y Ben REILLY *et al.* (1997): *The international IDEA handbook of electoral system design*, IDEA, Estocolmo.
- RIKER, William H. (1982): *Liberalism against populism. A confrontation with the theory of democracy and the theory of social choice*, Waveland Press, Illinois.
- ROBERTS, Kenneth M. (1998): "El neoliberalismo y la transformación del populismo en América Latina. El caso peruano", en Mackinnon y Petrone, comps., pp. 375-407.
- ROBERTS, Kenneth M. (2003): "Social polarization and the populist resurgence in Venezuela", en Ellner y Hellinger, eds., pp. 55-72.
- ROBERTS, Nigel (1997): "New Zealand: A long-established Westminster democracy switches to PR", en Reynolds y Reilly *et al.*, pp. 129-31.
- ROSE, Richard, William MISHLER y Christian HAERPFER (1998): *Democracy and its alternatives. Understanding post-Communist societies*, Johns Hopkins University Press, Baltimore.
- SALAZAR ELENA, Rodrigo (2004): "Las elecciones bolivianas de 2002: los límites del reformismo institucional", *Revista Mexicana de Sociología*, vol. 66, núm. 1, enero-marzo, pp. 23-56.
- SANTISO, Javier (2001): "¿Del buen revolucionario al buen liberal? A propósito de un extraño camaleón latinoamericano", en Hermet, Loaeza y Prud'homme, comps., pp. 215-50.
- SARTORI, Giovanni (1984): *La política. Lógica y método en las ciencias sociales*, FCE, México.
- SARTORI, Giovanni (1992): *Elementos de teoría política*, Alianza, Madrid.
- SAUL, John S. (1970): "África", en Ionescu y Gellner, comps., pp. 150-84.
- SCARROW, Susan E. (1996): "Politicians against parties: Anti-party arguments as weapons for change in Germany", *European Journal of Political Research*, vol. 29, núm. 3, abril, pp. 297-317.
- SCARROW, Susan E. (2001): "Germany: The mixed-member system as a political compromise", en Shugart y Wattenberg, eds., pp. 55-69.
- SCHEDLER, Andreas (1996): "Los partidos antiestablishment político", *Este País*, núm. 68, noviembre, pp. 2-13.
- SCHEDLER, Andreas, ed. (1997): *The end of politics? Explorations into modern antipolitics*, Macmillan Press, Londres.
- SCHEDLER, Andreas (1997): "Introduction: Antipolitics – Closing and colonizing the public sphere", en *id.*, ed., pp. 1-20.
- SCOTT, James C. (2000): *Los dominados y el arte de la resistencia*, Era, México.
- SHUGART, Matthew Soberg (2001): "'Extreme' electoral systems and the appeal of the mixed-member alternative", en Shugart y Wattenberg, eds., pp. 25-51.
- SHUGART, Matthew Soberg y Stephan HAGGARD (2001): "Institutions and public policy in presidential systems", en Stephan Haggard y Matthew D. McCubbins, eds., *Presidents, parliaments, and policy*, Cambridge University Press, Nueva York, pp. 64-102.
- SHUGART, Matthew Soberg y Martin P. WATTENBERG (2001): "Mixed-member electoral systems: A definition and typology", en *id.*, eds., pp. 9-24.

- SHUGART, Matthew Soberg y Martin P. WATTENBERG, eds. (2001): *Mixed-member electoral Systems. The best of both worlds?*, Oxford University Press, Nueva York.
- SIAVELIS, Peter y Arturo VALENZUELA (1996): "Electoral engineering and democratic stability: the legacy of authoritarian rule in Chile", en Arend Lijphart y Carlos H. Waisman, eds., *Institutional design in new democracies*, Westview Press, Boulder, pp. 77-99.
- SINGER, Matthew M. y Kevin M. MORRISON (2004): "The 2002 presidential and parliamentary elections in Bolivia", *Electoral Studies*, núm. 23, pp. 172-82.
- STEWART, Angus (1970): "Las raíces sociales", en Ionescu y Gellner, comps., pp. 221-40.
- STIMSON, James A (1985): "Regression in space and time: A statistical essay", *American Journal of Political Science*, vol. 29, núm. 4, pp. 914-47.
- STOKES, Susan C. (2001a): *Mandates and Democracy: Neoliberalism by surprise in Latin America*, Cambridge University Press, Nueva York.
- STOKES, Susan C. (2001b): "Introduction: Public opinion of market reforms: A framework", en id., ed., *Public support for market reforms in new democracies*, Cambridge University Press, Nueva York, pp. 1-32.
- SUREL, Yves (2001): "Populismo y sistema de partidos en Europa", en Hermet, Loaeza y Prud'homme, comps., pp. 137-65.
- TARROW, Sydney (1997): *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*, Alianza, Madrid.
- TEMKIN, Benjamín y Rodrigo SALAZAR ELENA (2006): "Abstencionismo, escolaridad y confianza en las instituciones. Las elecciones federales de 2003 en México", manuscrito.
- THORBECKE, Willem y Sarah MATZELEVICH (1995): "Check bouncing and fiscal irresponsibility: Evidence of nonideological shirking by legislators", *Public Choice*, vol. 83, núms. 1-2, abril, pp. 59-64.
- TI [Transparency International] (2006): *Corruption perception index*, disponible por Internet en <www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi>
- TÓKA, Gábor (2002): Voter inequality, turnout and information effects in a cross-national perspective, documento de trabajo núm. 297, Hellen Kellogg Institute, mayo.
- TORRE, Carlos de la (1994a): "Los significados ambiguos de los populismos latinoamericanos", en Álvarez Junco y González Leandri, comps., pp. 39-60.
- TORRE, Carlos de la (1994b): "El velasquismo: democracia y política de masas en el Ecuador de los años 40", en Álvarez Junco y González Leandri, comps., pp. 215-31.
- TORRE, Carlos de la (1996): *Un solo toque: Populismo y cultura política en Ecuador*, Centro Andino de Acción Popular, Quito.
- TORRE, Carlos de la (1998): "Populist redemption and the unfinished democratization of Latin America", *Constellations*, vol. 5, núm. 1, marzo, pp. 85-95.
- TOURAINE, Alain (1998): "Las políticas nacional-populares", en Mackinnon y Petrone, comps., pp. 329-59.
- TRINKUNAS, Harold (2002): "The crisis of civil-military relations: From Punto Fijo to the Fifth Republic", *Latin American Research Review*, vol. 37, núm. 1, pp. 41-77.
- VAN COTT, Donna L. (2003): "From exclusion to inclusion: Bolivia's 2002 election", *Journal of Latin American Studies*, núm. 35., pp. 751-75.
- WALICKI, Andrzej (1970): "Rusia", en Ionescu y Gellner, comps., pp. 81-120.
- WARREN, Mark E (1999): "Introduction", en id., ed., pp. 1-21
- WARREN, Mark E., ed. (1999): *Democracy and trust*, Cambridge University Press, Cambridge.

- WB [World Bank] (2004a): *PovcalNet*, The World Bank Group, disponible por Internet en <<http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/jsp/index.jsp>>
- WB (2004b): *World development indicators*, The World Bank Group, Washington, edición en cd.
- WEBB, Paul D. (1996): "Apartisanship and anti-party sentiment in the United Kingdom: Correlates and constraints", *European Journal of Political Research*, vol. 29, núm. 3, abril, pp. 365-82.
- WEYLAND, Kurt (1999): "Neoliberal populism in Latin America and Eastern Europe", *Comparative Politics*, vol. 31, núm. 4, julio, pp. 379-401.
- WEYLAND, Kurt (2001): "Clarifying a contested concept: Populism in the study of Latin American politics", *Comparative Politics*, vol. 34, núm. 1, octubre, pp. 1-22.
- WEYLAND, Kurt (2003a): "Economic voting reconsidered: Crisis and charisma in the election of Hugo Chávez", *Comparative Political Studies*, vol. 36, núm. 7, septiembre, pp. 822-48.
- WEYLAND, Kurt (2003b): Neopopulist and Neoliberalism in Latin America: How much affinity?, documento presentado en el XXIV Congreso de LASA, 27-29 de marzo, Dallas (rep. como "Latin American neopopulism", *Third World Quarterly*, vol. 24, núm. 6, diciembre de 2003, pp. 1095-1115).
- WILES, Peter (1970): "Un síndrome, no una doctrina: algunas tesis elementales sobre el populismo", en Ionescu y Gellner, comps., pp. 203-20.
- WORSLEY, Peter (1970): "El concepto de populismo", en Ionescu y Gellner, comps., pp. 258-304.
- ZIELINSKI, Jakub (2002): "Translating social cleavages into party systems: The significance of new democracies", *World Politics*, vol. 54, núm. 2, enero, pp. 184-211.